

C.A. de Temuco

Temuco, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Se reproduce la sentencia apelada de fecha 15 de septiembre de dos mil veintitrés, pronunciada por el Sr. Ministro en Visita Extraordinario para causas sobre derechos humanos don Álvaro Mesa Latorre, recaída en la causa rol N° 113.089 (en adelante también denominado caso Polvorín) con las siguientes excepciones:

1) En el considerando 38°, relativo a Sergio Orlando Vallejos Garcés, sección B, se sustituye la expresión “Autor en los términos del artículo N° 15 N° 1 del Código Penal”, por la siguiente: “encubridor en los términos del artículo 17, número 2, del Código Penal”.

2) En el considerando 41°, relativo a Héctor Mauricio Villablanca Huenulao, sección B, se sustituye la expresión “Autor en los términos del artículo N° 15 N° 1 del Código Penal”, por la siguiente: “encubridor en los términos del artículo 17, número 2, del Código Penal”.

3) En el considerando 50°, relativo a Manuel Rafael Campos Ceballos, sección B, se sustituye la expresión “Autor en los términos del artículo N° 15 N° 1 del Código Penal”, por la siguiente: “encubridor en los términos del artículo 17, número 2, del Código Penal”.

4) En el considerando 56°, relativo a Juan Carlos Concha Belmar, sección B, se sustituye la expresión “Autor en los términos del artículo N° 15 del Código Penal”, por la siguiente: “encubridor en los términos del artículo 17, número 2, del Código Penal”.

5) En el considerando 59°, relativo a Gabriel Dittus Marín, sección B, se sustituye la expresión “Autor en los términos del artículo N° 15 N° 1 del Código Penal”, por la siguiente: “encubridor en los términos del artículo 17, número 2, del Código Penal”.



6) En el considerando 71°, relativo a Hernán Raúl Quiroz Barra, se suprimen las secciones A y B.

7) En el considerando 80°, relativo a Pablo Domingo Gran López, sección B, se sustituye la expresión “Autor en los términos del artículo N° 15 N° 1 del Código Penal”, por la siguiente: “cómplice en los términos del artículo 16 del Código Penal”.

8) En el considerando 83°, relativo a Daniel San Juan Clavería, se suprimen las secciones A y B.

9) En el considerando 92°, relativo a Omar Burgos Dejea, sección F, se sustituye la oración “cómplice de los homicidios calificados”, por la siguiente: “encubridor de los homicidios calificados”.

10) En el considerando 92°, relativo a Manuel Rafael Campos Ceballos, Héctor Mauricio Villablanca Huenulao y José Raúl Inzunza Reyes, sección F, se sustituye la oración “los acusados Manuel Rafael Campos Ceballos y Héctor Mauricio Villablanca Huenualo (sic) quedarán como cómplices de los delitos de homicidios calificados”, por la siguiente: “los acusados Manuel Rafael Campos Ceballos y Héctor Mauricio Villablanca Huenulao quedarán como cómplice, el primero, y como encubridor, el segundo, de los delitos de homicidios calificados”.

11) En el considerando 140°, relativo a Juan Labraña Luvecce, Anacleto Aguirre Rivera y Omar Burgos Dejea, sección G, se sustituye la oración “al acusado Omar Burgos Dejea, según el mérito del proceso, le corresponde como ya se indicó precedentemente en el análisis de la declaración indagatoria, la calidad (sic) cómplice de los delitos de homicidios calificado (sic) y”, por la siguiente: “al acusado Omar Burgos Dejea, según el mérito del proceso, le corresponde la calidad de”.

12) En el considerando 143°, relativo a Hernán Quiroz Barra y Daniel San Juan Clavería, sección G (que debería ser la sección H), se sustituye la oración “le (sic) corresponde como se indicó precedentemente en el análisis de la declaración indagatoria, la calidad de cómplices en los términos del artículo 16 del Código Penal, de los



delitos de homicidios calificados y”, por la siguiente: “a los acusados Hernán Quiroz Barra y Daniel San Juan Clavería les corresponde”.

13) En el considerando 144°, relativo a Sergio Vallejos Garcés, sección H, se sustituye la oración “el acusado Sergio Vallejos Garcés quedará como cómplice de los homicidios calificados y”, por la siguiente: “el acusado Sergio Vallejos Garcés quedará como encubridor de los homicidios calificados y como cómplice de los”.

14) En el considerando 147°, relativo a Juan Carlos Concha Belmar, sección F, se sustituye la oración “el acusado Juan Carlos Concha Belmar quedará como cómplice de los homicidios calificados”, por la siguiente: “el acusado Juan Carlos Concha Belmar quedará como encubridor de los homicidios calificados”.

15) En el considerando 167°, sección A, se sustituye la expresión “Se califica de simple”, por la siguiente: “Se califica de simple, con excepción de aquellos que se encontraban realizando el servicio militar, a quienes se les calificará”.

16) En el considerando 167°, sección B, se sustituye la oración “Que se dará lugar a esta minorante respecto de José Raúl Inzunza y Arnoldo Aedo Matus”, por la siguiente: “Que se dará lugar a esta minorante respecto de José Raúl Inzunza, Sergio Orlando Vallejos Garcés y Arnoldo Aedo Matus”. Además, se elimina, en el segundo párrafo, el nombre “Sergio Vallejos Garcés” y la coma que le sigue.

17) En el considerando 170° se elimina la sección B.

18) Se eliminan los considerandos 171° y 173°.

19) En el considerando 174°, a continuación de la oración “no procede ningún beneficio de la ley 18.216 aplicable a los acusados”, y antes del punto que le sigue, se intercala lo siguiente: “, sin perjuicio de lo que se dirá respecto de Omar Burgos Dejea, Libardo Hernán Schwartenski Rubio y José Raúl Inzunza Reyes”.

20) Se eliminan los considerandos 175° y 176°, relativos al otorgamiento de pena sustitutiva.



21) Se elimina el considerando 186°, relativo a los montos de la indemnización de perjuicios otorgados a las víctimas por repercusión.

Y SE TIENE EN SU LUGAR, Y ADEMÁS, PRESENTE:

1°. Que en la causa rol N° 113.089 seguida ante el Ministro en Visita Extraordinaria para causas por delitos contra los derechos humanos, Álvaro Mesa Latorre, se han deducido los siguientes recursos procesales en contra de la sentencia definitiva de primera instancia pronunciada con fecha 15 de septiembre de 2023:

I. Las defensas de los acusados Jaime Guillermo García Covarrubias, Pablo Domingo Gran López, Carlos Eduardo Oviedo Arriagada y Raimundo Ignacio García Covarrubias interpusieron recursos de casación en la forma en contra de lo decidido respecto de la acción penal deducida en su contra.

II. Todos los condenados interpusieron recurso de apelación en contra de lo decidido respecto de la acción penal deducida en su contra.

III. El Fisco de Chile interpuso recurso de apelación en contra de lo decidido respecto de la acción civil deducida en su contra.

2°. El Sr. Ministro en Visita elevó en consulta el sobreseimiento definitivo parcial de los siguientes inculpados: Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez, Aquiles Alfonso Poblete Müller, Juan Humberto Carrillo Rebolledo, Benjamín Farías Lavín, Mario Hernán Arias Díaz y Anacleto Aguirre Rivera.

3°. Que el Sr. Fiscal Judicial (S) de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, don Germán Varas Cicarelli, emitió su informe, el que ha sido considerado para resolver los recursos deducidos en la presente causa.

4°. Que los días miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de agosto de 2024 se procedió a la vista de la causa. En la oportunidad se escucharon los alegatos de las defensas de los acusados y de los querellantes, como así también del Fisco de Chile.



5°. Que la causa quedó en acuerdo y mediante la presente sentencia esta Ilustrísima Corte se pronuncia respecto de los recursos deducidos y consultas elevadas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Orden de la presente sentencia. A efectos de pronunciarse sobre cada una de las cuestiones planteadas a esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, la presente sentencia se organizará en cinco secciones.

La sección I se refiere a las diligencias y solicitudes pendientes de resolución (considerando segundo a considerando décimo).

La sección II revisan los recursos de casación en la forma (considerando undécimo a considerando vigésimo segundo).

En la sección III, la más extensa, se analizan las apelaciones relativas a los delitos investigados (considerando vigésimo tercero a considerando centésimo séptimo).

Al pronunciamiento sobre las decisiones que vienen en consulta se dedica la sección IV (considerando centésimo octavo a considerando centésimo décimo).

La sección V, por último, trata las pretensiones vinculadas con las acciones civiles (considerando centésimo undécimo a considerando centésimo décimo noveno).

I. DILIGENCIAS Y SOLICITUDES PENDIENTES DE RESOLUCIÓN.

SEGUNDO: Identificación de diligencias y solicitudes pendientes de resolución. Según consta en el expediente de primera instancia, deben ser resueltas por esta Ilustrísima Corte las diligencias y solicitudes que se encuentran en el tomo XXX, foja 11.047; foja 11.150, tercer otrosí; foja 11.186, primer y segundo otrosíes; foja 11.209, primer otrosí; y fojas 11.219; y en el tomo XXXI, fojas 11.616, tercer otrosí; fojas 1688 y foja 11.775.



A continuación se analizarán cada una de ellas.

TERCERO: Informe psiquiátrico realizado a Libardo Schwartenski. A fojas 11.042 y siguientes, del tomo XXX, consta informe de la pericia psiquiátrica realizada a Libardo Hernán Schwartenski Rubio, evacuado por la médico psiquiatra del Servicio Médico Legal, Dra. Tamara Peldoza Neira.

Dicha pericia se realizó en cumplimiento del Oficio N° 495-2023, de fecha 4 de abril de 2023, emanado del Ministro en Visita Sr. Álvaro Mesa Latorre.

En las conclusiones del mencionado informe se expresa que “*Se trata de un hombre adulto mayor sin alteración de juicio de realidad*”. Y añade: “*El evaluado posee todas sus funciones corticales superiores conservadas, por lo cual no tiene impedimento para enfrentar un proceso judicial*”.

A fojas 11.047 del mismo tomo XXX el juzgador de primera instancia resolvió que pasen los antecedentes a esta Ilustrísima Corte, en virtud del principio de desasimiento.

Sobre la base de la citada resolución, la Corte tendrá presente el informe, según se expresará en lo resolutivo.

CUARTO: Documento acompañado por Carlos Oviedo. A fojas 11.101 y siguientes, del tomo XXX, la defensa de Carlos Oviedo Arriagada, y de manera principal, entabló recurso de casación en la forma. En el tercer otrosí del mismo escrito acompañó documento. En particular, copia simple del denominado “Sistemas de Hojas de Vida y Calificaciones para el Personal” del mes de enero de 1973, emitido por el Estado Mayor General del Ejército de Chile.

A fojas 11.150 del mismo tomo XXX el juzgador de primera instancia resolvió que pasen los antecedentes a esta Ilustrísima Corte, en virtud del principio de desasimiento.

El citado documento constituye un instrumento privado y no ha sido reconocido en alguna de las formas establecidas en el artículo 187 del Código de Procedimiento Penal. Por tanto, no variará los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LETUXZMWJWX

argumentos y conclusiones que se ofrecen en la sección III de la presente sentencia. Por lo mismo, la Corte tendrá presente el documento, según se expresará en lo resolutivo.

QUINTO: Peticiones subsidiarias de Pedro Tichauer. A fojas 11.159 y siguientes, del tomo XXX, la defensa de Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo deduce apelación en contra de la sentencia de primera instancia. En el primer otrosí deduce peticiones subsidiarias a la de absolución interpuesta de manera principal. En particular, pide recalificación de la participación y formula alegaciones respecto de las circunstancias modificatorias, todo ello en los términos que detalla.

A fojas 11.186 del mismo tomo XXX el juzgador de primera instancia resolvió el primer otrosí, indicando que pasen los antecedentes a esta Ilustrísima Corte, en virtud del principio de desasimiento.

Sobre la base de la citada resolución, la Corte tendrá por interpuestas las peticiones subsidiarias, según se expresará en lo resolutivo.

SEXTO: Documento acompañado por Juan Labraña. A fojas 11.198 y siguientes, del tomo XXX, la defensa de Juan Bautista Labraña Luvecce, y de manera principal, entabló recurso de apelación. En el otrosí del mismo escrito acompañó documento. En particular, Certificado de Beneficio de Asistencia Jurídica otorgado por la Corporación de Asistencia Judicial de Bío-Bío.

A fojas 11.209 del mismo tomo XXX el juzgador de primera instancia resolvió que pasen los antecedentes a esta Ilustrísima Corte, en virtud del principio de desasimiento.

Sobre la base de la citada resolución, la Corte tendrá por acompañado el documento, según se expresará en lo resolutivo.

SÉPTIMO: Informe de pena sustitutiva respecto de Hernán Quiroz. A fojas 11.216 y siguientes, del tomo XXX, consta informe realizado al tenor de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 18.216,



respecto del condenado Hernán Quiroz Barra, evacuado por la Jefa del Centro de Reinserción Social de Villarrica.

Dicha pericia se realizó en cumplimiento del Oficio N° 496-2022, de fecha 4 de abril de 2023, emanado del Ministro en Visita Sr. Álvaro Mesa Latorre.

En las conclusiones del mencionado informe se expresa que “*no se recomienda una pena sustitutiva como la Libertad Vigilada /Libertad Vigilada Intensiva (LV/LVI), la que resultaría ineficaz, por cuanto se infiere que únicamente podría adherir a la dimensión de control y supervisión de esta pena sustitutiva, no así a la instancia de intervención*”.

A fojas 11.219 del mismo tomo XXX el juzgador de primera instancia resolvió que pasen los antecedentes a esta Ilustrísima Corte, en virtud del principio de desasimiento.

Sobre la base de la citada resolución, la Corte tendrá presente el informe, según se expresará en lo resolutivo.

OCTAVO: Documentos acompañados por Pablo Gran. A fojas 11.541 y siguientes, del tomo XXXI, la defensa de Pablo Domingo Gran López, y de manera principal, entabló recurso de casación en la forma.

En el tercer otrosí del mismo escrito acompañó los siguientes antecedentes de la causa, ante la posibilidad de no ser vistos:

1) Copia de la prensa escrita, diarios locales y circulación nacional.

2) Copia sistema de hojas de vida para el personal.

A fojas 11.540 del mismo tomo XXXI el juzgador de primera instancia resolvió que pasen los antecedentes a esta Ilustrísima Corte, en virtud del principio de desasimiento.

Sobre la base de la citada resolución, la Corte tendrá presente el documento, según se expresará en lo resolutivo.

NOVENO: Observaciones a la sentencia de primera instancia de Raimundo García. A foja 11.659 la defensa de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LETUXZMWJWX

Raimundo Ignacio García Covarrubias presentó escrito en que formula observaciones al fallo de primera instancia.

A fojas 11.688 del mismo tomo XXXI el juzgador de primera instancia resolvió que pasen los antecedentes a esta Ilustrísima Corte, en virtud del principio de desasimiento.

Sobre la base de la citada resolución, la Corte tendrá presente el documento, según se expresará en lo resolutivo.

DÉCIMO: Informe psiquiátrico realizado a Hernán Quiroz. A fojas 11.769 y siguientes, del tomo XXXI, consta informe de la pericia psiquiátrica realizada a Hernán Raúl Silva Quiroz, evacuado por la médico psiquiatra del Servicio Médico Legal, Dra. Tamara Peldoza Neira. A foja 11.774 consta Ord. 1072-2023-SM, en el que remite fe de erratas, y corrige el nombre de la persona evaluada por la de Hernán Raúl Quiroz Barra.

Dicha pericia se realizó en cumplimiento del Oficio N° 495-2023, de fecha 4 de abril de 2023, emanado del Ministro en Visita Sr. Álvaro Mesa Latorre.

En las conclusiones del mencionado informe se expresa que “*Se trata de un hombre adulto mayor sin alteración de juicio de realidad*”. Y añade: “*El evaluado posee todas sus funciones corticales superiores conservadas, por lo cual desde el punto de vista psiquiátrico no tiene impedimento para enfrentar un proceso judicial*”.

A fojas 11.775 del mismo tomo XXXI el juzgador de primera instancia resolvió que pasen los antecedentes a esta Ilustrísima Corte, en virtud del principio de desasimiento.

Sobre la base de la citada resolución, la Corte tendrá presente el informe, según se expresará en lo resolutivo.

II. EN CUANTO A LOS RECURSOS DE CASACIÓN EN LA FORMA.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LETUXZMWJWX

UNDÉCIMO: Recursos de casación en la forma deducidos.

Contra la sentencia de primera instancia, de fecha 15 de septiembre de 2023, se han deducido cuatro recursos de casación en la forma. Tales medios de impugnación han sido interpuestos por los siguientes condenados: Jaime Guillermo García Covarrubias, Pablo Domingo Gran López, Carlos Eduardo Oviedo Arriagada y Raimundo Ignacio García Covarrubias.

Todos ellos hacen descansar su pretensión anulatoria en la causal del artículo 541, número 9, del Código de Procedimiento Penal. Esta disposición prescribe, en lo que interesa a la presente decisión, lo siguiente: *“El recurso de casación en la forma sólo podrá fundarse en alguna de las causales siguientes: 9a. No haber sido extendida en la forma dispuesta por la ley”*.

Aquella falta la relacionan con las exigencias del artículo 500, números 4 o 5, o ambos, del mismo texto normativo. De acuerdo con los referidos números 4 y 5, la sentencia definitiva de primera instancia debe contener:

“4° Las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos a los reos; o los que éstos alegan en su descargo, ya para negar su participación, ya para eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta;

5° Las razones legales o doctrinales que sirven para calificar el delito y sus circunstancias, tanto las agravantes como las atenuantes, y para establecer la responsabilidad o la irresponsabilidad civil de los procesados o de terceras personas citadas al juicio”.

A continuación se revisarán las justificaciones de cada uno de tales recursos, en el orden que han sido mencionados.

DUODÉCIMO: Recurso de casación formal deducido por Jaime Guillermo García Covarrubias. La defensa del acusado Jaime Guillermo García Covarrubias dedujo recurso de casación en la forma



fundado en que en la sentencia impugnada no existe descripción de en qué consistió la colaboración.

Recuerda que Jaime García era subteniente, ayudante de regimiento, con funciones administrativas, no operativas. Destaca que la prueba incriminatoria se refiere a apremios ilegítimos, pero no a los homicidios calificados por los que se le condenó. Insiste en que no hay prueba de participación en los tales homicidios.

Luego analiza una a una las declaraciones de los testigos y que han sido citadas en la sentencia recurrida. A partir de dicho análisis se evidencia, a su juicio, que ninguna de las pruebas acredita la participación en los mencionados homicidios calificados. Por tanto, concluye, la sentencia no ha sido extendida en la forma establecida por la ley.

DÉCIMO TERCERO: Recurso de casación formal deducido por Pablo Domingo Gran López. La defensa del acusado Pablo Domingo Gran López también dedujo recurso de casación en la forma, porque la sentencia de instancia no se hizo cargo de su coartada. Sostiene que desde su primera declaración señaló que no tuvo participación porque a la fecha de los hechos no se encontraba en Temuco. Añade que es el único de la compañía de morteros que ha sido procesado, acusado y condenado.

En cuanto a la coartada que invoca, recuerda que entregó diapositivas de fotografías de la época. En ellas consta, según afirma, que estaba junto con toda su compañía en comisión de servicio custodiando los pasos fronterizos de Chile. Solicitó que las fotografías fueran periciadas para acreditar tales dichos. No obstante, y vulnerando el artículo 109 del Código de Procedimiento Penal, cuatro veces el Ministro Mesa rechazó la diligencia. Explica que, por ello, solicitó declaraciones de otros soldados que eran sus compañeros. Como en su mayoría fueron rechazadas, acompañó declaraciones juradas de los mismos.



Luego revisa las declaraciones y la prueba documental que la sentencia recurrida cita para fundar su decisión condenatoria. Y, como consecuencia de dicha revisión, concluye que no hay prueba de cargo que lo ubique en el lugar de los hechos imputados. Por cierto, tampoco participando en los apremios ilegítimos ni en los homicidios calificados.

Por último, alega que en ninguna parte de la sentencia recurrida se describen los hechos en que habría incurrido Pablo Gran. En dicho sentido, añade que se vulneró el principio de legalidad. Además, se infringió el principio de la culpabilidad porque no hay responsabilidad penal sin dolo, y no se ha acreditado el dolo de complicidad. En fin, estima lesionado el principio del debido proceso.

DÉCIMO CUARTO: Recurso de casación formal deducido por Carlos Eduardo Oviedo Arriagada. La defensa del acusado Carlos Eduardo Oviedo Arriagada funda en dos motivos la invalidación formal que pretende.

En primer lugar, porque la sentencia impugnada no entrega las necesarias fundamentaciones respecto de la prueba que rindió la defensa. Al respecto indica que en el plenario rindió las declaraciones de cuatro testigos. Todas ellas coinciden en que el condenado se encontraba en Santiago a la fecha de los hechos atribuidos. Sin embargo, según afirma, ninguno de ellos es citado en parte alguna de la sentencia, como si no hubieran declarado. Agrega que solo se mencionan en el considerando 136°, letra h), en el que se sostiene que estarían contaminadas. Y lo estarían porque esos testigos habrían prestado una declaración extrajudicial. Estima que esto vulnera el derecho fundamental a la defensa y en un caso que no se puede restar valor a las testificaciones.

En segundo lugar, porque la sentencia recurrida no detalla la conducta o los hechos desplegados por Carlos Oviedo. Tampoco se detalla en qué consiste su cooperación para configurar la complicidad regulada en el artículo 16 del Código Penal. En dicho sentido, expresa que, aunque se hubiera acreditado que Oviedo estaba en Temuco, no



se menciona ningún hecho que indique que realizó alguna acción vinculada con los hechos.

A mayor abundamiento, revisa una a una las declaraciones que obran en la causa y que son citadas en el considerando 88° de la sentencia para fundar la condena. Destaca que ninguno de los referidos testimonios menciona a Carlos Oviedo. Solo el soldado Víctor Villagrán Opazo afirma, en su declaración judicial, que Oviedo había regresado a Temuco a inicios de noviembre de 1973.

DÉCIMO QUINTO: Recurso de casación formal deducido por Raimundo Ignacio García Covarrubias. La defensa del acusado Raimundo Ignacio García Covarrubias dedujo recurso de casación formal fundado en que la sentencia no indica el modo en que habría participado en los hechos por los que se le condena.

Al respecto hace presente que a fojas 1161 de la sentencia se afirma que la teoría de la imputación objetiva no sería aplicable a los delitos de *lesa humanidad*. Refutando, expresa que la calificación de *lesa humanidad* no modifica la naturaleza de los delitos de apremios ilegítimos ni de homicidio calificado. Recuerda que las reglas de imputación objetiva son aplicables, así como también lo es el artículo 16 del Código Penal. Agrega que, bajo esta hipótesis de la sentencia, no sería necesario considerar si se incurrió en el tipo, ni saber si el actuar del acusado fue mediante generación del riesgo o si el resultado se produjo como consecuencia de dicho actuar.

Afirma que la sentencia recurrida no hace una exposición del razonamiento de hecho ni de derecho en lo relativo a la complicidad en los mencionados delitos. Los hechos establecidos no indican nada relativo a forma de participación que se encuadre en lo que la ley entiende por cómplice. Solo se funda en la calidad de subteniente que tenía el acusado a la fecha de los hechos investigados. Esto es una circunstancia no un acto o una conducta. Insiste en que se requiere un juicio de imputación objetiva y subjetiva respecto del tipo.



Recuerda que la complicidad requiere un aporte que sea tomado en cuenta por el autor. Por tanto, no puede ser cualquier cosa una colaboración. La complicidad es real y no personal. Analiza las testificaciones y destaca que ninguna de ellas se refiere a actos de participación de Raimundo García en los delitos. Solo se dice que “se paseaba por el regimiento”. Y no se puede castigar por ser, sino por hacer porque el derecho penal es de actos y no de autor, según recuerda. Por último, destaca que la calificación de cómplice fue declarada en la sentencia y no en la acusación.

DÉCIMO SEXTO: Significado de la causal de casación formal deducida. Para el análisis de las cuatro pretensiones anulatorias opuestas conviene evocar el alcance de la causal invocada.

El alcance de la causal del artículo 541, número 9, del Código de Procedimiento Penal ha sido explicado reiteradamente por la Corte Suprema. Al respecto el máximo tribunal ha declarado que, “*según constante jurisprudencia, tiene un carácter esencialmente objetivo, y para pronunciarse acerca de su procedencia basta el examen externo del fallo a fin de constatar si existen o no los requerimientos que compele la ley, sin que corresponda decidir sobre el valor o la legalidad de las afirmaciones que de él se desprenda (SCS Rol N° 28310-18 de 21 de septiembre de 2021, Rol N° 33661-19 de 25 de junio de 2022, Rol N°22379-2019 de 17 de octubre de 2022, Rol N° 57995-22 de 29 de noviembre de 2022, Rol N°29911-18 de 30 de noviembre de 2022 y Rol 25384-21 de 2 de marzo de 2023)*” (Corte Suprema, sentencia recaída en la causa rol 36.979-2019, de fecha 20 de septiembre de 2023, considerando 21°).

Sobre esta base, se analizará si la sentencia recurrida ha sido extendida en la forma establecida por la ley. En particular, si en aquella se expresan las consideraciones en cuya virtud se dan por probados los hechos atribuidos a los condenados.

DÉCIMO SÉPTIMO: Análisis respecto del recurso de casación de Jaime García Covarrubias. Respecto de Jaime García,



la sentencia entrega los motivos por los cuales le atribuye participación en los hechos investigados.

La propia defensa reconoce, aunque de manera implícita, su participación en los apremios ilegítimos aplicados a las víctimas. Y aunque aquel no fuera el caso, los antecedentes expresados en la sentencia son suficientes para así acreditarlo. En efecto, el condenado Libardo Hernán Schwartenski Rubio declaró lo siguiente: *“En una oportunidad pudo ver al Teniente Jaime García y al Subteniente Raimundo García al interior de la sala donde se torturaban personas en la Compañía de Plana Mayor y Servicios. En esos momentos había una persona desnuda y con su vista vendada tendida sobre un somier”* (considerando 42° de la sentencia impugnada). Por su parte, Juan Bautista Labraña Luvecce declara que el Capitán Vásquez Chahuán y el Teniente Jaime García Covarrubias constantemente estaban relacionándose con los detenidos, pero desconoce qué actividades realizaban con ellos (apartado A.9 del considerando 49° de la sentencia de primera instancia). Siempre por vía ejemplar, Jorge Edmundo Sepúlveda Contreras es igualmente citado en la sentencia impugnada, testigo que recuerda que los hermanos Jaime y Raimundo García Covarrubias caminaban sobre un grupo de detenidos que se hallaban boca abajo y con el torso desnudo, en el patio del regimiento (apartado A.9 del considerando 76°). En fin, Oscar Inostroza Segura afirma que *“el teniente Jaime García, se destacaba por su crueldad y tratos inhumanos hacia los detenidos y propios conscriptos”* (sección A.8 del considerando 34°).

Por otra parte, y en relación con los homicidios calificados, el acusado Arnoldo Aedo Matus reitera en tres declaraciones y careos diversos que vio a Jaime García junto al Comandante del regimiento, Pablo Iturriaga, en el lugar donde fueron ejecutadas las víctimas. Así consta en el considerando 33° de la sentencia recurrida.

Por lo demás, son hechos indiscutidos en la presente causa que este acusado tenía la calidad de teniente y que se desempeñaba como



asistente del Comandante del regimiento Tucapel a la fecha de los hechos. En ese contexto, y según consta en el ya mencionado considerando 42º, *“Los hechos ocurridos en el regimiento con relación a los detenidos lo sabían todos los oficiales, por lo menos el Comandante Iturriaga, el segundo Comandante Jofré y el ayudante Jaime García Covarrubias”*. Sin ánimo de exhaustividad, la sentencia impugnada considera también la declaración de Juan Carlos Figueroa Claus, quien sostiene que *“cada vez que él estaba de guardia aparecía Jaime García Covarrubias a dar instrucciones respecto de los detenidos”* (apartado A.6 del considerando 52º).

DÉCIMO OCTAVO: Análisis respecto del recurso de casación de Pablo Domingo Gran López. Respecto de Pablo Gran, la sentencia también explicita los motivos por los cuales tiene por acreditada su participación en los hechos imputados.

En efecto, la sentencia incluye la declaración de Juan Carlos Figueroa Claus, quien ubica a Pablo Gran en el regimiento en los días en que acaecieron los hechos investigados (apartado A.6 del considerando 52º). En el mismo sentido, la sentencia cita la declaración de Norberto Francisco Uribe Moroni (considerando 72º). En fin, y siempre por vía ejemplar, la resolución cuestionada incluye la testificación de Raimundo García Covarrubias. Este recuerda a Pablo Gran como uno de los cinco subtenientes del regimiento a la época de los hechos (considerando 75º).

Por su parte, consta en la sentencia impugnada que Juan José Salgado señaló que *“en alguna oportunidad le correspondió entrar a la sala de interrogatorios y en ese lugar efectivamente los detenidos fueron golpeados por los oficiales a cargo del interrogatorio. Recuerda haber visto que los Tenientes Gran y Oviedo golpearon a los detenidos que eran interrogados. Les dieron golpes de pies y puños”* (sección A.14 del considerando 76º).

Por lo demás, la sentencia expresa los antecedentes a partir de los cuales reconoce que Pablo Gran era uno de los oficiales en el



mencionado regimiento a la época de comisión de los hechos delictivos. Al respecto cuenta con la declaración de Juan José Salgado Goyeneche, apartado A.9 del considerando 52°, y con la declaración de Juan Carlos Figueroa Claus, apartado A.18 del considerando 97°.

DÉCIMO NOVENO: Análisis respecto del recurso de casación de Carlos Eduardo Oviedo Arriagada. Respecto de Carlos Oviedo, la sentencia recurrida tampoco merece el reproche casacional que se le atribuye.

En primer lugar, la sentencia en la sección C.2.4, C.2.7 y C.2.8 del considerando 36° señala las razones por las que no tiene por acreditado que este condenado se encontraba en Santiago de Chile a la fecha de los hechos atribuidos. Además, precisa las evidencias por las que considera que el mismo se encontraba en el regimiento Tucapel a la época de comisión de tales delitos. Por otra parte, en los apartados C.2.6 y C.2.10 del mismo considerando se refiere a las razones por las que rechaza la prueba aportada por Carlos Oviedo para intentar acreditar que no estaba en el regimiento Tucapel.

En segundo lugar, la sentencia expresa las consideraciones por las que tiene a Carlos Oviedo como uno de los partícipes de los delitos investigados. Entre otras declaraciones, se puede mencionar la de Juan José Salgado, quien señaló que *“en alguna oportunidad le correspondió entrar a la sala de interrogatorios y en ese lugar efectivamente los detenidos fueron golpeados por los oficiales a cargo del interrogatorio. Recuerda haber visto que los Tenientes Gran y Oviedo golpearon a los detenidos que eran interrogados. Les dieron golpes de pies y puños”* (sección A.14 del considerando 76°). Y la declaración de Víctor Manuel Villagrán, quien *“recuerda que a eso de las 20:30 horas de aquel día [10 de noviembre de 1973] comenzaron a ir a buscar el fusil para dirigirse al polígono de la isla Cautín. A esa hora todavía había luz natural. Los disparos los efectuaron como a las 21:30 horas. Ese día vio al sargento Salgado y el clase de servicio. Que la mayoría de los oficiales de la compañía andina estuvieron esa noche, como el*



teniente Oviedo. Asegurando que aquella noche los hicieron disparar para provocar ruidos” (sección A.2 del considerando 34°).

VIGÉSIMO: Análisis respecto del recurso de casación de Raimundo García Covarrubias. Respecto de Raimundo García, la sentencia recurrida también cumple las exigencias formales que la recurrente echa en falta.

Más arriba, al tratar de la participación de Jaime García se entregaron antecedentes que acreditan la participación de Raimundo García.

A ellas puede agregarse, *verbigracia*, las declaraciones de Juan José Salgado Goyeneche (sección A.14 del considerando 76°). También puede citarse la declaración de Jorge Godoy, quien señala que “*el subteniente Raimundo García, en un principio fue una persona muy amable y no se quiso meter con los detenidos, pero después fue influenciado por su hermano y cambio de conducta. Posteriormente, ambos participaban en los interrogatorios de los detenidos en la dependencia de la banda del regimiento*” (sección A.9 del considerando 34°). En fin, en el mismo sentido se orientan las declaraciones de Libardo Schwartenski (considerando 42°).

VIGÉSIMO PRIMERO: Participación funcional y sucesiva. Sin perjuicio de lo hasta ahora señalado, se debe considerar la doctrina sentada por la Excelentísima Corte Suprema y que puede denominarse “participación funcional y sucesiva”. En virtud de esta doctrina, los actos de los acusados no deben ser considerados de manera aislada. En lugar de ello, deben tenerse como el conjunto de actos concurrentes, que conjunta y sucesivamente aportan para la realización de los tipos penales atribuidos. En el presente caso, los apremios ilegítimos y los homicidios calificados.

En dicho sentido, el tribunal vértice de la jurisdicción ordinaria ha declarado lo siguiente:

“Sin embargo, no está de más demostrar que los reclamos de los recurrentes no se configuran, desde que, a diferencia de lo alegado, en



los fundamentos 43°, 44°, 64°, 65°, 98°, 99°, 116°, 117°, 136° y 137° de la sentencia de primer grado, que el fallo impugnado hizo suyos, tiene por acreditado que estos acusados formaron parte de la DINA, desarrollaron funciones en uno o más de los cuarteles de detención clandestina en los que se mantuvo a la víctima de autos privado ilegítimamente de libertad, en el mismo periodo en que ésta se produjo y, más concretamente, realizando labores de las que se desprende el conocimiento y aceptación que todos ellos tenían en el plan criminal en curso y su directa intervención en el encierro y privación de libertad de la víctima, procurando que ésta se perpetuara, como es, interrogarlos mientras que los detenidos se encontraban vendados y amarrados (como es el caso de Videla Inzunza y Alfaro Mundaca), desempeñar labores de conductor de Citro Torr  quien era un agente operativo Jefe en la Brigada Caupolic n (seg n declar  Hoyos Zegarra), custodiar a los detenidos directamente e interrogarlos (como reconoci  Neira M ndez) y ser un agente operativo realizando allanamientos y detenciones a quienes integraban el MIR (como sostuvo Alfaro Fern ndez).

Estas acciones dan cuenta que los encartados en examen, ejecutaron, voluntariamente, conductas que no s lo encuadran en los verbos rectores del tipo penal de secuestro calificado, sino que adem s lo hicieron bajo los par metros de la coautor a funcional y sucesiva, que implica que todos ellos efectuaron dentro de su esfera de actuaci n y en un contexto grupal, individualmente, un aporte funcional necesario para llevar a cabo la operaci n delictiva, mediante una determinada funci n y cuya ejecuci n implica la continuidad del tipo penal, sin que sea dable exigir el conocimiento particular de la identidad de las personas que detuvieron a las v ctimas, quienes los interrogaron y quienes los sacaron del lugar en que se hallaban ilegalmente reclusas, de suerte que su calidad de coautores establecida en la sentencia en alzada es indesmentible.” (Corte Suprema, sentencia



recaída en la causa rol 36.979-2019, de fecha 20 de septiembre de 2023, considerando 42°).

VIGÉSIMO SEGUNDO: Conclusión respecto de los recursos de casación en la forma. En virtud de las precedentes consideraciones, los recursos de casación serán rechazados por esta Ilustrísima Corte y así se expresará en lo resolutivo.

III. EN CUANTO A LOS RECURSOS DE APELACIÓN DEDUCIDOS CONTRA LO DECIDIDO RESPECTO DE LA ACCIÓN PENAL.

VIGÉSIMO TERCERO: Orden de las consideraciones relativas a las apelaciones. Atendiendo a la extensión de la fundamentación que se ofrecerá a continuación, respecto de los recursos de apelación deducidos frente a la acción penal y a las alegaciones vertidas durante la vista de la causa, la exposición de esta sección II seguirá el siguiente orden:

1. Pretensiones de los acusados (considerando vigésimo cuarto a considerando cuadragésimo tercero).
2. Pretensiones de los querellantes (considerando cuadragésimo cuarto a considerando cuadragésimo séptimo).
3. Análisis de la calificación jurídica de los hechos (considerando cuadragésimo octavo a considerando sexagésimo tercero).
4. Análisis de la participación (considerando sexagésimo cuarto a considerando sexagésimo noveno).
5. Análisis del grado de participación (considerando septuagésimo a considerando septuagésimo sexto).
6. Análisis de las circunstancias eximentes y modificatorias de la responsabilidad penal (considerando septuagésimo séptimo a considerando octogésimo séptimo).



7. Delitos, grado de participación y circunstancias modificatorias de los acusados (considerando octogésimo octavo a considerando nonagésimo octavo).

8. Imposición de penas sustitutivas y pago de costas (considerando nonagésimo noveno a considerando centésimo séptimo)

1. Pretensiones de los acusados.

VIGÉSIMO CUARTO: Apelaciones de los acusados.

Interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, pronunciada por el Sr. Ministro en Visita don Álvaro Mesa Latorre, los siguientes acusados:

- 1) Manuel Abraham Vásquez Chahuán (apelación verbal).
- 2) Jaime Guillermo García Covarrubias (recurso de apelación escrito).
- 3) Pablo Domingo Gran López (recurso de apelación escrito).
- 4) Romilio Osvaldo Lavín Muñoz (apelación verbal).
- 5) Norberto Francisco Uribe Moroni (apelación verbal).
- 6) Gabriel Alfonso Dittus Marín (recurso de apelación escrito).
- 7) Manuel Rafael Campos Ceballos (recurso de apelación escrito).
- 8) Héctor Mauricio Villablanca Huenulao (recurso de apelación escrito).
- 9) José Raúl Inzunza Reyes (apelación verbal).
- 10) Carlos Eduardo Oviedo Arriagada (recurso de apelación escrito).
- 11) Libardo Hernán Schwartenski Rubio (apelación verbal).
- 12) Raimundo Ignacio García Covarrubias (apelación verbal).
- 13) Pedro Guillermo Tichauer Salcedo (recurso de apelación escrito).
- 14) Orlando Moreno Vásquez (apelación verbal).
- 15) Raúl Binaldo Schonherr Frías (recurso de apelación escrito).



16) Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud (recurso de apelación escrito).

17) Juan Carlos Concha Belmar (apelación verbal).

18) Sergio Orlando Vallejos Garcés (apelación verbal).

19) Arnoldo Aedo Matus (recurso de apelación escrito).

20) Omar Burgos Dejea (apelación verbal).

21) Juan Bautista Labraña Luvecce (recurso de apelación escrito).

22) Hernan Raúl Quiroz Barra (recurso de apelación escrito).

23) Daniel San Juan Clavería (recurso de apelación escrito).

Tanto en los respectivos escritos, como durante la vista de la causa, las defensas de los acusados dedujeron diversas alegaciones y pretensiones en relación con sus representados. A continuación se sintetizan unas y otras, en el mismo orden en que los recurrentes han sido recién mencionados. Se excluyen las alegaciones relativas a las casaciones en la forma, tratadas más arriba, en la sección I de esta sentencia.

VIGÉSIMO QUINTO: Pretensiones de la defensa de Manuel Abraham Vásquez Chahuán. La defensa de Manuel Vásquez opone tres líneas de alegaciones: en relación al derecho, a la participación y a la pena.

En cuanto a las alegaciones de derecho, sostiene que se han vulnerado disposiciones de derecho penal esenciales. Primero, el Decreto Ley N° 2191, de 1978, que está plenamente vigente y por tanto debe aplicarse. Segundo, la institución de la prescripción penal. Tercero, la denominada media prescripción, la que no es prescripción, sino una atenuante calificada. Cuarto, el principio de legalidad o reserva legal.

Profundizando esta última argumentación, señala que los tratados internacionales son inaplicables sin vulnerar el principio de legalidad. Afirma que la imprescriptibilidad no puede regir hacia lo pasado, sino solo hacia lo futuro. En dicho sentido, recuerda que la Convención Americana sobre Derechos Humanos inició su vigencia en 1991. El



Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos entró en vigencia en 1989. Por su parte, el Convenio contra la Tortura está vigente desde 1988. Por tanto, entiende que esas normas son inaplicables.

Los Convenios de Ginebra, por su parte, son de 1951. Reconoce que estos instrumentos sí estaban vigentes a la época en que ocurrieron los hechos investigados en esta causa. No obstante, solo se aplican a conflictos entre fuerzas armadas, y específicamente entre fuerzas armadas diversas. Esto no existía en la referida época. Añade que el protocolo tercero indica que, concluido el conflicto, se debe procurar la más amplia amnistía.

Por último, la sentencia alude a delitos de *lesa humanidad*. Sin embargo, la Ley N° 20.357, de delitos de *lesa humanidad*, es de 2009. Además, el artículo 44 de dicha Ley Dispone que los hechos cometidos con anterioridad a la vigencia de esta ley se regirán por normas vigentes a la época de su comisión y no por este texto normativo.

En cuanto a la prueba de la participación, recuerda que en 1973 Manuel Vásquez era teniente. Hace presente que Arnoldo Aedo, a quien califica de testigo estrella de la incriminación, declaró en varias oportunidades. Sin embargo, no menciona a este acusado, sino solo una vez que indicó que llevaba alimentos a los prisioneros. De este modo, se le condena como autor conforme al artículo 15 del Código Penal, pero sin precisar de qué forma participó en los ilícitos. No hay testigo alguno que lo coloque en la ejecución de los hechos, no hay prueba, según concluye.

En cuanto a la pena, destaca que Manuel Vásquez fue sancionado con la pena de presidio perpetuo, lo que considera excesivo.

De acuerdo con lo alegado, solicita la absolución del condenado o, en subsidio, que la causa vuelva a primera instancia para un correcto desarrollo de la investigación.

VIGÉSIMO SEXTO: Pretensiones de la defensa de Jaime Guillermo García Covarrubias. La defensa de Jaime García sostiene,



en esencia, que su representado fue condenado pese a que no existe evidencia de su participación en los homicidios calificados.

Alega que en la sentencia recurrida no hay descripción de en qué consistió la colaboración. Recuerda que Jaime García era subteniente, ayudante de regimiento, con funciones administrativas, pero no operativas. Destaca que la prueba incriminatoria se refiere a los apremios ilegítimos, pero no a los homicidios calificados. No hay prueba de participación en estos últimos.

Luego la defensa analiza una a una las declaraciones de los diversos testigos que fundan la condena. Destaca que ninguno de ellos coloca a Jaime García realizando una conducta típica asociada a los homicidios. No hay descripción de en qué consistió la colaboración, ni anterior ni coetánea, a dichos delitos. Concluye afirmando que ningún funcionario de la Policía de Investigaciones, oficial o suboficial involucrados en el caso lo menciona en relación con tales hechos.

Reconoce que existen algunas declaraciones que vinculan a Jaime García con los apremios ilegítimos. Empero, destaca la vaguedad de las mismas. Recalca que Jorge Godoy a fojas 779 dice que había una patrulla a cargo de García, pero luego en el respectivo careo señala que no reconoce a García. Hace presente que esta defensa pidió un nuevo careo, pero el Ministro instructor lo rechazó.

Concluye solicitando absolución.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Pretensiones de la defensa de Pablo Domingo Gran López. La defensa de Pablo Gran pide la absolución porque este acusado no se encontraba en el regimiento Tucapel a la fecha de los delitos investigados en esta causa.

En primer lugar, se refiere a diapositivas de fotografías de la época, las que incorporó al expediente. Afirma que en ellas consta que estaba junto con toda su compañía en comisión de servicio en Curarrehue, custodiando los pasos fronterizos de Chile. Se solicitó que las fotografías fueran periciadas. Afirma que, vulnerando el artículo 109 del Código de Procedimiento Penal, cuatro veces el Ministro Mesa



rechazó periciar esas fotografías. Por ello solicitó se recibieran las declaraciones de otros soldados que eran compañeros de Gran. Como en su mayoría fueron rechazadas, se acompañaron bajo el formato de declaraciones juradas.

Al respecto añade que el peritaje realizado evidenció que tales fotografías corresponden a Pucón y Curarrehue. Además, que fueron capturadas entre el 5 y el 21 de noviembre de 1973. Denuncia que se solicitó al Ministro instructor que se validara mediante toma de declaración a peritos y mediante metaperitaje, pero las diligencias fueron rechazadas. Expresa que lo mismo ocurrió con otras 80 testificaciones, que también fueron rechazadas por el Ministro. Por lo mismo, pidió a esos mismos soldados que prestaran declaraciones juradas ante notario. A fojas 4442 se aportan testificaciones que indican que en noviembre de 1973 Gran estaba destinado en Curarrehue.

En segundo lugar, analiza uno a uno los 29 elementos de cargo mencionados en la sentencia condenatoria. Destaca que la mayoría de ellos no mencionan a Gran, o aportan antecedentes irrelevantes o vagos. En lo relativo a la prueba documental, hace presente que nada aportan respecto de la participación en los hechos imputados. Más aún, insiste en que tomó conocimiento de los hechos a través de una publicación en el Diario Austral. Por ello concurrió a la unidad de Carabineros de la zona de Curarrehue para consultar si debía regresar al regimiento Tucapel, pero le instruyeron mantenerse en la frontera.

Profundiza en algunos de esos testimonios. Por ejemplo, señala que el Sr. Vizcarra declaró que el Teniente Grant sacaba fotografías a la compañía. Luego del careo con Gran se da cuenta que su declaración anterior era errónea respecto de lo que había ocurrido y se retracta de ella. Además, alega que no pudo leer lo que le hicieron firmar en su primera declaración. También por vía ejemplar, sostiene que la sentencia tampoco considera la declaración de Armando Sepúlveda a fojas 4757 y 4758. Este testifica que su compañía no se



encontraba en el regimiento Tucapel, sino en Curarrehue y que al mando de dicha compañía estaba el subteniente Grant.

En tercer lugar, se refiere al modo en que la sentencia recurrida analizó las hojas de vida de Grant. Reconoce, como lo destaca la sentencia, que en ellas no constan las comisiones de servicios alegadas, ni la de Santiago ni la de Curarrehue. Sin embargo, hace presente que acompañó el boletín del Ejército de enero de 1973, en el que se informa que en las hojas de vida solo se indicarían feriados, licencias, investigaciones sumarias y sus resultados, méritos y deméritos. Por tanto, no debían constar las comisiones de servicios. De este modo, esas hojas de vida no aportan.

Concluye sosteniendo que, a partir de estas pruebas, no hay cómo construir las presunciones judiciales en que se funda la condena. En el fondo la sentencia señala que es imposible que el subteniente Grant no se haya enterado de los hechos. Pero esto no es un hecho a partir de las pruebas, sino una conjetura. No se señalan los hechos que habría realizado Grant como cómplice de los delitos. Insiste en que no hay responsabilidad penal sin dolo y no se ha acreditado el dolo de complicidad, porque no se explica si interrogó, si detuvo, si apremió.

VIGÉSIMO OCTAVO: Pretensiones de la defensa de Romilio Lavín Muñoz y de Norberto Francisco Uribe Moroni. La defensa de Romilio Lavín y de Norberto Uribe plantea las mismas alegaciones para ambos. En suma, pide la absolució n a partir de tres líneas de argumentación.

En primer lugar, se refiere a la participación. Afirma que la extensa sentencia castiga por ser, por estar y no por hacer. Hace presente que los cómplices deben ser condenados porque colaboraron antes o durante la comisión de los hechos. El cómplice participa de los intereses del autor para lograr los objetivos de este último. Indica que el 90% de la sentencia es un relato de elementos históricos para contexto, incluyendo analogías con el régimen nazi. Pero no hay prueba de la participación.



En segundo lugar, alude a la prueba. Señala que pidió diversas diligencias probatorias durante el procedimiento, pero fueron rechazadas por el Ministro instructor. Analiza diversas testificaciones para concluir que no hay prueba que incrimine al condenado Lavín ni al condenado Uribe. No hay evidencia de dónde, cuándo ni cómo respecto de la participación. Insiste en que no se cumplen los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal para generar presunciones judiciales incriminatorias. En el específico caso de Lavín, indica que este señaló en el juicio que estaba en la enfermería la noche de los hechos, y que había escuchado los disparos. La sentencia se funda en que, por ser oficial del regimiento, debía saber lo que ocurría.

En tercer lugar, se refiere al control de convencionalidad. La sentencia alude al artículo 150, número 1, del Código Penal vigente a la época de los hechos. Dicho artículo alude a “incomunicar al reo”. Este artículo fue modificado por diversas leyes desde el retorno a la democracia. Solo desde la Ley 20.968, de 2016, se incorpora la referencia a torturas. Sin embargo, la sentencia alude a tortura como elementos típicos, lo que no estaba vigente al año 1973. Alega que no se puede aplicar analogía en el ámbito penal *in malam partem*, pues se vulnera el principio de tipicidad.

Concluye solicitando la revocación de la sentencia apelada y la absolución de los condenados Lavín y Uribe.

VIGÉSIMO NOVENO: Pretensiones de la defensa de Gabriel Alfonso Dittus Marín. La defensa de Gabriel Dittus ofrece dos líneas de peticiones.

De manera principal solicita revocación de la sentencia recurrida y la absolución del condenado. Alega inocencia de Gabriel Dittus Marín respecto de los hechos investigados. Expresa que los elementos de convicción son insuficientes e inconexos. Destaca que no hay descripción de hechos constitutivos de la participación. Luego analiza diversas declaraciones que la sentencia menciona como elementos de



cargo. Expone que la mayoría de ellos no menciona a Dittus, quien por cierto siempre negó participación.

También pide absolución fundado en la aplicación de la prescripción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del citado Código. Indica que los tratados internacionales que establecen la imprescriptibilidad no son aplicables porque no estaban vigentes en Chile en 1973.

En subsidio pide que se acoja la eximente contemplada en el artículo 10, número 9, del Código Penal. Funda esta pretensión en que un soldado conscripto no tiene posibilidad de resistirse a las órdenes. Destaca que, a la época de los hechos, era un niño. No podía resistirse a una orden de sus superiores. Invoca también las atenuantes de los números 1, 6 y 8, del Código Penal. Conjuntamente pide la recalificación del hecho, de homicidio calificado a homicidio simple. Por último, pide la aplicación de la media prescripción, regulada en el artículo 103 del Código Penal.

Por último, hace presente que la sentencia incurre en un error al individualizar tanto al conscripto Dittus como a los demás conscriptos. Contrariamente a lo que en aquella se afirma, no es ex funcionario del Ejército de Chile. Recalca que nunca fue funcionario del Ejército. Esto se debe a que el conscripto no es funcionario militar.

TRIGÉSIMO: Pretensiones de la defensa de Manuel Rafael Campos Ceballos, de Héctor Mauricio Villablanca Huenulao y de José Raúl Inzunza Reyes. La defensa de Manuel Campos, de Héctor Villablanca y de José Inzunza propone alegaciones comunes a los tres y alegaciones diferenciadas.

a) Alegaciones comunes a Campos, Villablanca e Inzunza. Respecto de los tres condenados solicita la absolución.

Funda aquella pretensión, en primer lugar, en la falta de participación. La sentencia no describe la conducta por la cual se sanciona a estos condenados. Afirma que solo hay tres testigos que indican que aquellos fueron parte de la patrulla denominada “Chacal”.



Sin embargo, la sentencia no indica si participaron en algún hecho, no indica la conducta que se les reprocha. No se indica cuál es la actividad de colaboración. Solo eran parte de una compañía.

Por otra parte, funda la petición de absolución en la aplicación de la eximente del artículo 10, número 10, del Código Penal. Esto, según detalla, en el entendido que eran conscriptos, llevaban solo tres meses cumpliendo el servicio militar. Insiste en que se trató de una orden irresistible considerando las circunstancias de la época. Hace presente que Hernán Carrasco, testigo, informa cómo se obedecían las órdenes y que todos tenían temor de no obedecer.

b) Alegaciones específicas respecto de Campos y Villablanca, condenados por homicidios calificados. En subsidio de lo expresado en la letra a), se pide recalificar la participación de Campos y Villablanca en los hechos por los que fueron condenados. Recuerda que la Corte de Apelaciones de Temuco, en la causa rol 1125-2023, mediante sentencia de 23 de julio de 2024, sostuvo que no se comunican las circunstancias agravantes. Por tanto, deberían ser sancionados por homicidio simple y no por homicidio calificado.

Además, se opone a la aplicación de la agravante del artículo 12, número 8, del Código Penal. Funda esta pretensión en que tal agravante exige servirse de la calidad o carácter público que tenga el hechor.

c) Alegaciones específicas respecto de Inzunza, condenado por apremios ilegítimos. En subsidio de lo sostenido en la letra a), se formulan dos solicitudes. Primero, que se rebaje dos o tres grados la pena. Funda esta solicitud en que la sentencia recurrida reconoce a Inzunza las atenuantes de los números 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal. Segundo, pide la imposición de una pena sustitutiva porque se cumplen los requisitos de la Ley N° 19.216.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Pretensiones de la defensa de Carlos Eduardo Oviedo Arriagada. La defensa de Carlos Oviedo recuerda que está acusado como cómplice de siete homicidios



calificados y como cómplice de siete apremios ilegítimos. En parte reitera las mismas alegaciones que propuso para sostener la ya analizada casación en la forma.

Apela contra la sentencia de primera instancia porque se desestimó la prueba que rindió la defensa. Recuerda que presentó cuatro testigos en el probatorio del plenario. Resume lo que cada uno de ellos expresó en su respectiva declaración. Sin embargo, alega que no son citados en ninguna parte de la sentencia, como si no hubieran declarado. Lo único que dice en el considerando 136, letra h), es que estaría contaminada porque esos testigos habrían prestado una declaración extrajudicial y por tanto ahora no podrían declarar. Hace presente que todos declaran que el acusado estaba en Santiago a la fecha de los hechos.

En segundo lugar, objeta la sentencia porque no se detalla la conducta o los hechos desplegados típicos por Oviedo. Tampoco se detalla en qué consiste la cooperación para configurar el artículo 16 del Código Penal.

En tercer lugar, expone que el 11 de noviembre de 1973 Oviedo formaba parte de la Compañía Andina, de la que era subteniente. Precisa que esto consta en su hoja de vida y también en múltiples declaraciones. Enfatiza que a partir de octubre de 1973 esta Compañía, incluidos Oviedo, demás suboficiales y conscriptos, se despliegan en Santiago para custodiar antenas de Televisión Nacional y de algunas radios. Este viaje a Santiago se prolonga desde octubre hasta diciembre 1973. Luego detalla las evidencias testimoniales, documentales y fotográficas que acreditan todo lo señalado. Acentúa que ningún otro integrante de la compañía andina está procesado. Esto se debe a que todos ellos estaban en Santiago. A todos les creyó el ministro sustanciador, menos a Oviedo. En línea con los hechos que postula, recuerda que hay testigos de la Compañía Cazadores que señalan que fueron reemplazados por la compañía Andina. Menciona los testigos que así lo aseveran.



Afirma que la sentencia de primera instancia niega la existencia de esta comisión de Oviedo en Santiago porque no está en la hoja de vida. Objeta esa conclusión porque en los formularios de instrucción de hoja de vida se indican las destinaciones. Por el contrario, las comisiones de servicio no se colocan. Solo se registran las felicitaciones y los deméritos durante aquellas comisiones de servicios. Destaca que ninguno de los demás testigos tiene expresado en su hoja de vida esta comisión de servicio.

Por último, analiza uno a uno los testimonios en que se funda la sentencia recurrida. Evidencia que prácticamente ninguna de ellas menciona a Oviedo. Por ello, concluye, las pruebas no logran derrumbar la presunción de inocencia. Ni siquiera hay presunciones judiciales, según estima. Y aunque se hubiera acreditado que estaba en Temuco, no se menciona ningún hecho que indique que realizó alguna acción vinculada con los hechos delictivos investigados.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Pretensiones de la defensa de Libardo Schwartenski Rubio. La defensa de Libardo Schwartenski recuerda que este condenado era soldado conscripto a la época de los hechos. Destaca que esto está acreditado en la causa y lo refrenda el considerando 43 de la sentencia impugnada. Añade que primero formó parte de la compañía cazadores, y luego se incorporó a la compañía de caza mayor.

A modo de contexto, hace presente que Schwartenski vio detenidos en el regimiento. Sin embargo, destaca que era profesor normalista por lo que hacía labores administrativas. También hizo turnos de guardia en la puerta de acceso al regimiento. Reconoce que sabía que se aplicaban tormentos en el recinto militar mencionado. Se le acusó como autor de 7 apremios ilegítimos, no por los homicidios calificados, a 10 años de privación de libertad.

Señala que en los elementos de cargo no hay ninguna prueba en contra de este condenado. Analiza las diversas declaraciones y careos citados por la sentencia para justificar la condena del inculpado. Pone



de manifiesto las vaguedades e imprecisiones de aquellas y estos, en orden a establecer la participación de Libardo Schwartenski. Entre otras, destaca que el testigo José Inzunza dice que había interrogatorios, en que participaba el conscripto Schwartenski. No obstante, en ninguno de los cuatro que participó vio a este condenado. Por su parte el testigo Jorge Godoy dice que existía una patrulla que integraba por conscriptos, incluido este apelante, pero no dice qué hacen. Otro testigo menciona que se utilizaban soldados para trasladar detenidos, pero no dice que ellos aplicaran apremios ilegítimos. Este traslado no puede hacerlo autor, sino cómplice, según concluye.

Por lo expuesto pide absolución. En subsidio, recalificación como cómplice, por lo que procede pena sustitutiva a su favor; Por último, y en subsidio de las dos pretensiones anteriores, pide que se aplique presidio menor en su grado máximo si se le condena como autor, pena que también puede cumplirse en libertad vigilada.

TRIGÉSIMO TERCERO: Pretensiones de la defensa de Raimundo Ignacio García Covarrubias. La defensa de Raimundo Covarrubias ofrece, en esencia, las mismas alegaciones que propuso para sostener la ya analizada casación en la forma. Esas alegaciones se sintetizan en dos líneas de argumentación.

Por una parte, se refiere a la exigencia normativa de la complicidad. Señala que la complicidad debe implicar colaboración en un hecho ajeno para que este se realice, es decir, cooperación de delito de otro. Por tanto, enfatiza, se debe conocer y querer el delito de otro. La sentencia imputa al condenado ser oficial y por tanto tener conocimiento de lo que ocurría en el regimiento. El análisis no realizado por la sentencia se refiere a que el acusado debe haber cooperado a la realización típica de otro. Por tanto, se debe analizar si el dolo del acusado era para colaborar en el delito del otro. La complicidad requiere un aporte que sea tomado en cuenta por el autor. Por tanto, no puede ser cualquier cosa una colaboración. La complicidad es real y no personal.



Por otra parte, aplica esas nociones al caso de su representado. Declara que en la sentencia recurrida no hay elementos de cargo contra el acusado. No hay referencia a conducta de colaboración, según destaca. Precisa que el testigo Arnoldo Aedo, único cómplice beneficiado con la atenuante del artículo 11, número 9, del Código Penal, no ubica al imputado en las ejecuciones. Luego revisa otras declaraciones de testigos, explicitando que ninguno de ellos describe una conducta de colaboración con los apremios ilegítimos por parte de Raimundo García.

Concluye recordando que no se puede castigar por ser, sino por hacer, porque el derecho penal es de actos y no de autor. Además, la calificación de cómplice fue declarada en la sentencia y no en la acusación. Solicita se revoque la sentencia y se absuelva a este condenado.

TRIGÉSIMO CUARTO: Pretensiones de la defensa de Pedro Guillermo Tichauer Salcedo. La defensa inicia recordando que fue condenado como cómplice de siete delitos de apremios ilegítimos y de siete delitos de homicidio calificado. Afirma que Pedro Tichauer era apodado “pistola de palo” porque tenía labores administrativas, específicamente de intendencia.

En su declaración indica que en su departamento, contiguo al regimiento, escuchó los estruendos y corrió al regimiento. Se le ordenó volver a su departamento. En otra declaración sumarial afirmó que no estaba en el lugar de los hechos porque había sido interventor de una empresa de Temuco. Acompañó cuatro bandos que dan cuenta de dónde se encontraba. Se trata de los bandos números 5, 130, 146 y 147.

El bando N° 5, de 11.9.1973, señala que designa a Pedro Tichauer Salcedo interventor de la empresa Armar de Temuco. El bando N° 130, de 16.11.1973, lo nombra interventor del instituto indígena. Luego el bando 146 da cuenta que desde el 10.12.1973 se deja sin efecto el bando 130 que lo nombró como interventor del



INDAP. Por último, el bando N° 147 dispone que desde el 13.12.1973 Tichauer era interventor y fiscalizador.

Destaca que el condenado había olvidado esas comisiones. Por ello solo lo recordó en los interrogatorios posteriores. Los citados bandos, con sus respectivas certificaciones de autenticidad, fueron acompañados en segunda instancia y se tuvieron presente. Explica que la calidad de interventor implicaba jornada completa y asistían al regimiento cada 15 días o una vez al mes a rendir cuenta.

Agrega que Tichauer no detenía, no interrogaba, ni participó en los hechos. Destaca que ninguno de los testigos (García, Vallejos, Matus, Villablanca, Inzunza, etcétera) nombra a este condenado. Alega porque estos son los elementos de cargo para atribuir complicidad en siete apremios ilegítimos y siete homicidios calificados.

Concluye solicitando la absolución de su representado.

TRIGÉSIMO QUINTO: Pretensiones de la defensa de Orlando Moreno Vásquez y Raúl Binaldo Schonherr Frías. La defensa de Orlando Moreno y de Raúl Schonherr recuerda que ambos fueron condenados a 10 años por apremios ilegítimos y a presidio perpetuo por los homicidios calificados. Se refiere a los recursos de ambos condenados conjuntamente.

Comienza afirmando que los antecedentes probatorios no permiten condenar. Los hechos acreditados evidencian que las víctimas fueron detenidas por carabineros, interrogados por funcionarios de la policía de investigaciones y ejecutados por personal del ejército. Sin embargo, no se indica cuándo ni dónde se produjeron los apremios ilegítimos contra las víctimas. Tampoco se menciona cómo participaron los dos imputados en esos apremios ilegítimos o en los homicidios calificados. La sentencia se fundó solo en que Moreno y Schonherr estaban cumpliendo funciones en el regimiento Tucapel. Además, ambos cumplían funciones de criptógrafos.

Refiriéndose específicamente al caso contra Moreno, explica que la sentencia menciona 11 testigos. Analizando sus declaraciones, hace



presente que cinco de ellos ni siquiera señalan a Moreno y a Schonherr. Otros tres testigos, por su parte, solo mencionan sus nombres porque los recuerdan como parte de la unidad de inteligencia. Los últimos tres testigos, que son víctimas en esta causa, solo formulan declaraciones insuficientes contra Moreno. En efecto, uno de ellos solo dice haber visto a Moreno en el regimiento y que habría sido interrogado por un capitán de la misma unidad de este último. Pero no menciona a Moreno entre las personas que lo interrogaron. Una segunda víctima también dice haber sido detenido, y reconoce la voz de Quilodrán y la risa de Moreno. La tercera víctima declara haber sido detenido por carabineros y habría sufrido los apremios ilegítimos en la comisaría, de modo que no menciona a Moreno.

Refiriéndose luego específicamente al caso de Schonherr, señala que la sentencia menciona siete testigos. Cuatro lo recuerdan como miembro de inteligencia, pero no lo vinculan con los hechos investigados. Enfatiza que se limitan a señalar funciones que desempeñaba este condenado, las que en todo caso este último siempre ha reconocido. En dos declaraciones el testigo Carrasco solo dice que lo vio en el regimiento. y Una víctima recuerda un careo con Schonherr y dice que no la torturó. Un último testigo no menciona a Schonherr.

Por último, destaca que ambos acusados pertenecían al departamento segundo del regimiento, pero no se acredita nada más. No se acreditó conducta alguna que pudiera vincularse con los hechos. No se indica cuál fue la cooperación anterior o coetánea a los ilícitos investigados.

Indica que ambos condenados declaran que no estaban en el regimiento el día de los hechos. Moreno señala que en noviembre 1973 estaba casado por lo que no pernoctaba en el regimiento. Como criptógrafo le correspondió encriptar el bando en que se difundió la noticia del supuesto ataque al polvorín. Schonherr, por su parte, declara que estaba casado por lo que estaba en su casa la noche de los



hechos. Llegó a la mañana siguiente al regimiento y ahí se les informó que un grupo de terroristas intentó atacar el polvorín del regimiento y los habían abatido.

Enfatiza que ninguno de los condenados participó en interrogatorios. Eso correspondía a la fiscalía militar, con apoyo de funcionarios de la policía de investigaciones.

Concluye solicitando se revoque la sentencia impugnada y que se dicte sentencia absolutoria debido a la falta de prueba de la participación de Moreno y Schonherr.

En subsidio pide recalificar la participación a encubridores porque no hay forma de acreditar la complicidad en los apremios ilegítimos. En cuanto a los homicidios calificados, no tuvieron participación alguna, no colaboraron de modo alguno como cómplices. La unidad denominada “Departamento Segundo” se vincula con los apremios ilegítimos y como los dos condenados pertenecían a dicho Departamento, podrían ser encubridores porque se enteraron al día siguiente. También subsidiariamente pide rebajar las penas porque la sentencia aplicó presidio perpetuo tanto a los autores como a los cómplices de los homicidios calificados. No se puede aplicar pena máxima si no hay agravantes, que es el caso de los dos condenados. Por último, solicita se les aplique la atenuante del artículo 11, número 9, y la media prescripción del artículo 103 del Código Penal.

TRIGÉSIMO SEXTO: Pretensiones de la defensa de Oscar Alfonso Podlech Michaud. La defensa de Oscar Podlech recuerda que este último fue condenado por siete homicidios calificados y siete apremios ilegítimos.

Su alegato lo inicia dando lectura a una extensa parte de la sentencia recurrida en que se alude a la necesidad de verdad como condición de la justicia. También da lectura a parte del mensaje con el que el Presidente de la República envía al Congreso Nacional el proyecto de ley de Código de Procedimiento Penal, en lo relativo a las objeciones al sistema inquisitivo que se propone en el mismo.



Cuestiona la sentencia porque aplica la agravante de ser funcionario público, pese a que este condenado solo tuvo tal calidad desde marzo de 1974, cuando fue nombrado fiscal militar. Destaca que esto está acreditado en la causa, por lo que antes no era funcionario público.

Enfatiza que, de los 81 testimonios, 20 mencionan a Podlech. Algunos para decir que nunca lo vieron. Otros para decir que no lo conocían.

Por otra parte, afirma que hay inconstitucionalidad en la aplicación de los tratados de derechos humanos porque iniciaron su vigencia en Chile con posterioridad a los hechos investigados.

Por último, sostiene que existe una duda razonable respecto de la participación activa del condenado Podlech, respecto de la posibilidad de evitar el acaecimiento de los hechos investigados.

Concluye pidiendo la absolución de este acusado.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Pretensiones de la defensa de Juan Carlos Concha Belmar. La defensa de Juan Carlos Concha recuerda que este último fue condenado como cómplice de siete homicidios calificados.

Inicia sosteniendo que Concha no participa de manera clara, ni directa ni indirecta, de los hechos. No hay prueba que acredite complicidad en los siete homicidios calificados. Enfatiza que la sentencia no cumple las exigencias del artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal. Se funda en conjeturas, no en hechos probados. Agrega que vulnera el debido proceso y el principio de contradicción. Indica que las presunciones son construidas en la sentencia. En definitiva, según sostiene, las pruebas acreditan la falta de participación del acusado.

Relata que Concha estaba en el sector del polvorín el 10 de noviembre de 2023. Precisa que era soldado conscripto y por ello su función era realizar labores de guardia en el polvorín ubicado en el interior del regimiento. Expone que hay declaraciones en el expediente



que así lo acreditan, específicamente respecto de la noche de los hechos. Por tanto, concluye, esa noche no estaba en el sector Isla Cautín. Hace presente que al día siguiente salió de franco y ahí se enteró por los periódicos de lo que había ocurrido. Destaca que el día 11 de noviembre de 1973 no estuvo de guardia.

A continuación, analiza las declaraciones que sostienen la incriminación en la sentencia impugnada. Destaca que los integrantes de la patrulla chacal solo participaron de la custodia, pero no de las ejecuciones. Y no se menciona a Concha entre ellos. Refiere que incluso uno de los testigos señaló que Concha no era uno de los preferidos del teniente Espinoza, quien lideraba aquella patrulla. Otra testimonial expresa que el 10 de noviembre de 1973 supo de los hechos por comentarios de compañeros. Sin embargo, no estaba el día de los hechos por lo que no pudo saber si Concha estaba en el regimiento ese día. Un testigo dice que pudo haber sido miembro de la patrulla de Espinoza, pese a que otros cuatro testigos dicen que no era de los preferidos de dicho teniente.

Refiriéndose a la sentencia, señala que no hay imputación de hechos. Solo fue sindicado como miembro de una patrulla. Por otra parte, explica que el ahora condenado primero fue procesado como autor en los homicidios calificados y en los apremios ilegítimos. Luego fue condenado como cómplice.

En definitiva, y a partir del referido análisis, alega que no hay prueba para vincular a este condenado con los hechos que se le atribuyen. Por tanto, no fue cómplice de los mismos.

Por otra parte, se refiere a las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. En cuanto a la acción de custodiar a los detenidos, pide aplicar el artículo 10, número 9, del Código Penal porque era solo un conscripto, es decir, hacía el servicio militar y, en la situación de anomalía institucional y social de la época, no tenía posibilidad de resistirse. Alega que tampoco tenía cómo prever la ejecución de las víctimas.



Concluye solicitando la revocación de la sentencia recurrida y la absolución del condenado. En subsidio, la aplicación de la media prescripción del artículo 103.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Pretensiones de la defensa de Sergio Orlando Vallejos Garcés. La defensa de Sergio Vallejos indica que estaba realizando el servicio militar. Contó todo lo que supo en sus declaraciones. Acentúa que fue condenado por un crimen que no cometió. Recalca que todos los soldados conscriptos fueron obligados a cumplir un servicio militar que no deseaban hacer.

Recuerda que este condenado develó que hubo una ejecución. Sin este relato no hay causa. Por lo anterior, pide que se acojan las atenuantes de los números 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal. Además, solicita que se aplique la media prescripción del artículo 103 del Código Penal y que no cumpla la condena en la cárcel.

TRIGÉSIMO NOVENO: Pretensiones de la defensa de Arnoldo Aedo Matus. La defensa de Arnoldo Aedo recuerda que este condenado era sargento de la compañía de Cazadores a la época de los hechos.

Señala que se le ordenó disparar hacia los árboles. Fue condenado como cómplice, pero la sentencia no indica la forma en que se produjo la cooperación. Hace presente que su acto, consistente en disparar hacia los arbustos, no es típico y si se suprime mentalmente ese acto no se evita el resultado. De este modo, argumenta que no se cumple principio de legalidad. Por otra parte, enfatiza que no hay antecedentes que permitan suponer que, al ser llevado por el capitán Vargas hasta el sector en que ocurrieron los hechos, sabía que se asesinaría a otras personas. Por tales argumentos, solicita que se revoque la sentencia y se absuelva a este acusado.

En subsidio pide que se disminuya la pena al mínimo legal. En cuanto a la agravante del artículo 12, número 8, del Código Penal, pide se excluya porque no se ha “servido” de su calidad de funcionario público. Cita la causa rol 361-2020 de la Corte Suprema que aprobó el



razonamiento de la Corte de Apelaciones de Temuco. En esta causa un coronel y un capitán tenían dominio del hecho. Expone, además, que no se puede considerar una misma circunstancia como agravante y como calificante al mismo tiempo. Por último, pide calificar la atenuante del artículo 11, número 9, del Código Penal.

En suma, solicita revocación de la sentencia impugnada y la absolución del condenado. En subsidio, que se rebaje la pena al mínimo legal. En cualquier caso, pide que no se condene en costas porque este acusado es representado judicialmente por la Corporación de Asistencia Judicial, todo ello de acuerdo con el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales.

CUADRAGÉSIMO: Pretensiones de la defensa de Omar Burgos Dejea. La defensa de Omar Burgos recuerda que era suboficial de Carabineros de Chile. Afirma que se le atribuye calidad de autor de siete homicidios calificados, por lo que se le condena a presidio perpetuo. También se le condena por siete apremios ilegítimos.

Cuestiona la sentencia condenatoria porque este acusado solo cumplía funciones administrativas en el regimiento Tucapel. No hay prueba que indique que lo vieron torturando o disparando. Tampoco se indica a quién torturó, a quién disparó. En dicho sentido, la sentencia no cumple las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Por último, explica que participó en detenciones en cumplimiento de un decreto de la fiscalía militar.

Por otra parte, pide que se apliquen las atenuantes de los números 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal. Además, solicita como muy calificada la del número 6 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 bis del mismo texto normativo.

Invoca el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos de los adultos mayores.

En definitiva, pide que se acoja el recurso de apelación, que se enmiende la sentencia recurrida y se declare la falta de participación en



los hechos. En subsidio, que Omar Burgos sea condenado a la menor pena posible.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Pretensiones de la defensa de Juan Bautista Labraña Luvecce. La defensa de Juan Labraña ofrece varias líneas de argumentación.

En primer lugar, solicita la prescripción de la acción penal. Funda esta pretensión en que habrían transcurrido más de 30 años entre el acaecimiento de los hechos a los que se le vincula y el inicio de la persecución penal en su contra. Por tanto, sostiene que se ha superado el máximo establecido por la ley para la prescripción de la acción penal. Alega que esta institución debe ser aplicada de oficio por el tribunal. Añade que sería aplicable, además, porque es discutible que los hechos investigados sean constitutivos de delitos de *lesa humanidad*, ya que no estaban vigentes los Convenios de Ginebra.

En segundo lugar, expresa que en la causa no se encuentra acreditada la participación del acusado Juan Labraña. En este sentido, concluye solicitando que se declare que el inculpado no tuvo participación en los hechos atribuidos. Precisa que la sentencia utiliza la noción de complicidad de manera expansiva y contraria a lo sostenido tanto por el Código Penal como por la jurisprudencia.

Como defensa subsidiaria solicita que se imponga el mínimo de la pena establecida por la ley a los delitos atribuidos. En dicho sentido solicita se le reconozca la atenuante del artículo 11, número 9, del Código Penal. Recuerda también que cuenta con la atenuante del número 6 del artículo recién mencionado. Por último, solicita la aplicación de la media prescripción contemplada en el artículo 103 del mismo texto normativo.

En cuarto lugar, se refiere a la agravante del artículo 12, número 8, del Código Penal. Citando a Cury, recuerda que esta circunstancia modificatoria requiere que el acusado debe “servirse, valerse de la calidad que posee”. Y en la sentencia recurrida no se señala de manera



alguna cómo se sirvió de su calidad de funcionario público para cometer los ilícitos.

Por último, solicita ser eximido de la condena en costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales. Al respecto recuerda que su representación judicial está a cargo de la Corporación de Asistencia Judicial.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Pretensiones de la defensa de Daniel San Juan Clavería y de Hernán Raúl Quiroz Barra. Los acusados Daniel San Juan y Hernán Quiroz, ex funcionario de la Policía de Investigaciones, dedujeron un mismo escrito de apelación.

En primer lugar, indica que no se ha acreditado la participación en los hechos investigados en esta causa. Funda esta afirmación en el tiempo transcurrido, en la existencia de contradicciones en las evidencias y en que ningún medio de prueba coloca a estos acusados en el lugar de los supuestos ilícitos. Ni en el tiempo, ni en el lugar de comisión, según precisa. Alega que la sentencia no señala cuáles son los actos en que habrían incurrido respecto de las supuestas víctimas. Insiste en que la detención y custodia de los detenidos estuvo a cargo de personal militar, y no de estos dos condenados. Adiciona que no es posible atribuir grado de participación alguna a estos ex detectives en los homicidios calificados investigados. En fin, objeta el uso de las presunciones judiciales porque en realidad se tienen meras conjeturas.

En subsidio pide recalificación de la participación de Hernán Quiroz y de Daniel San Juan en los hechos. Destaca que ellos solo se enteraron de los homicidios al día siguiente de su acaecimiento. En concreto, solicita que se les califique de encubridores y no de cómplices.

En tercer lugar, solicita aplicar la prescripción de la pena de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 del Código Penal. Recuerda que esta institución debe ser aplicada de oficio por el



tribunal. También solicita que se aplique la media prescripción contemplada en el artículo 103 del Código Penal.

Por otra parte, alega que no es posible aplicar los Convenios de Ginebra al presente caso. Estima que no resulta pertinente la aplicación de estas normas del derecho humanitario porque no se cumplen los supuestos fácticos que permiten su vigencia. En particular no se estaba en un estado de conflicto bélico. Adiciona que tampoco es aplicable el Estatuto de Roma, porque no estaba vigente al año 1973 y porque solo rige los crímenes de guerra. Ni, por último, no son aplicables el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En definitiva, sostiene que los investigados en esta causa no son delitos de *lesa humanidad*.

En cuanto a las circunstancias modificatorias, alega que existe error al aplicar la agravante del artículo 12, número 8, del Código Penal. Esto se debe a que en delitos de *lesa humanidad* el elemento consistente en ser funcionario público está incorporado en el tipo penal.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Síntesis de las pretensiones de los acusados. En los precedentes considerandos se detallaron las alegaciones y pretensiones de cada uno de los acusados. Sin perjuicio de ello, en el presente considerando se sintetizan los aspectos recurridos, de acuerdo con la categorización que se propone. Dicha categorización facilitará el posterior análisis y pronunciamiento sobre cada una de las cuestiones sometidas a la decisión de esta Ilustrísima Corte.

Recurrieron de la calificación jurídica de los hechos siete acusados. Romilio Lavín y Noorberto Uribe reclaman contra el uso de la expresión “tortura”. Manuel Campos y Héctor Villablanca, por su parte, piden que no se les comunique la calificante del homicidio calificado y se les considere cómplices de homicidio simple. Por último, Oscar Podlech, Hernán Quiroz y Daniel San Juan piden que no se califique como delitos de *lesa humanidad* los investigados, porque no



estaban vigentes en Chile los Convenios de Ginebra ni otros tratados o leyes que aplican esta categoría. Y lo hacen para solicitar la aplicación de una o más de las siguientes instituciones: amnistía, prescripción y media prescripción.

Recurrieron derechamente de la amnistía, la prescripción o la media prescripción los siguientes acusados: Manuel Vásquez, Gabriel Dittus, Orlando Moreno, Sergio Vallejos, Juan Concha y Juan Labraña..

Recurrieron de la participación, sosteniendo que no se acreditó la participación, que no se detalla en qué consistió la participación o que existe una duda razonable de la participación, los siguientes acusados: Manuel Vásquez, Jaime García, Pablo Grant, Romilio Lavín, Gabriel Dittus, Manuel Campos, Héctor Villablanca, José Inzunza, Carlos Oviedo, Raimundo García, Norberto Uribe, Pedro Tichauer, Omar Burgos, Orlando Moreno, Raúl Schonherr, Oscar Podlech, Libardo Schwartenski, Juan Concha, Arnoldo Aedo, uan Labraña, Hernán Quiroz y Daniel San Juan.

Recurrieron del grado de participación los siguientes acusados: Orlando Moreno, Raúl Schonherr, Libardo Schwartenski, Hernán Quiroz y Daniel San Juan.

Recurrieron de las circunstancias eximentes o modificatorias de la responsabilidad penal los siguientes acusados: Gabriel Dittus, Manuel Campos, Héctor Villablanca, José Inzunza, Omar Burgos, Orlando Moreno, Raúl Schonherr, Sergio Vallejos, Oscar Podlech, Juan Concha, Arnoldo Aedo,, Juan Labraña, Hernán Quiroz y Daniel San Juan.

Recurrieron del otorgamiento de pena sustitutiva los siguientes acusados: José Inzunza, Sergio Vallejos y Libardo Schwartenski.

Recurrieron pidiendo corrección de la pena impuesta los siguientes acusados: Orlando Moreno y Raúl Schonherr.



Recurrió pidiendo la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores el acusado Omar Burgos.

Recurrieron solicitando que no se les condenara en costas, por contar con representación de la Corporación de Asistencia Judicial, dos condenados: Juan Labraña y Arnoldo Aedo.

2. Pretensiones de los querellantes.

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Pretensiones de los querellantes. En la presente causa se presentó recurso de apelación por uno de los querellantes. Además, alegaron TRES querellantes durante la vista de la causa. A continuación se señala concisamente cuáles fueron sus alegaciones.

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Pretensión del querellante Programa Continuación de la ley N°19.123 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El querellante del Gobierno pide confirmación, en todas sus partes, de la sentencia recurrida.

Inicia indicando que la sección segunda, la fiscalía militar y la patrulla Chacal se organizaron para desarrollar un plan común. Ese plan común lo manejaban todos los condenados. El testigo Soto Cerda señala que es imposible que los oficiales del regimiento no supieran lo que iba a ocurrir porque mantenían reuniones periódicas. Ninguno podría decir que no sabían de las detenciones, torturas y asesinatos.

Afirma que el criterio general de imputación desmiente que se condena por ser y no por hacer. En el grupo de autores Chahuán y Podlech son autores por el artículo 15, número 1, del Código Penal, pues definían el destino de los detenidos. El testigo Gayoso Molina explica la forma de operación: el retiro de detenidos de la cárcel y su ejecución.

Aclara que son cómplices aquellos que habitualmente interrogaban o custodiaban a los detenidos. Esto se debe a que tenían



menor dominio del hecho, pero su función de colaboración es relevante para la ejecución de los tipos penales.

La sentencia ve una organización entre los condenados y un plan. Las apelaciones de los condenados solo se fijan en los tipos penales individuales. No consideran que cada uno contribuye funcionalmente a la ejecución del plan criminal. Recuerda que así lo ha entendido la Corte Suprema en la causa rol 24.683-2018. En ella se miran los delitos de *lesa humanidad* desde la óptica de entender que hay aparatos organizados de poder, con distribución de funciones. Destaca que en esa distribución de funciones puede existir autoría, complicidad y encubrimiento.

A continuación se pronuncia sobre la evidencia disponible en contra de algunos de los condenados, para desvirtuar sus recursos de casación en la forma y de apelación.

Respecto de Carlos Oviedo, menciona las testificaciones que lo colocan en el lugar de los hechos, golpeando a los detenidos interrogados. Otro testigo señala que Oviedo a las 23:30 horas de día de los hechos comienza, junto a otros condenados, a buscar sus fusiles. El testigo añade que la patrulla Andina fue a Santiago en septiembre por un mes y cinco días. El 10 noviembre él estaba en el regimiento. No recuerda que Oviedo se haya ausentado y lo ve en las ejecuciones. Un video invocado por la defensa respecto de Televisión Nacional no muestra ni menciona a este condenado.

En cuanto a Jaime García, recuerda que está condenado en otro caso de derechos humanos. Enfatiza que la persona que entrega el bando en que se comunicó el supuesto asalto al polvorín y se contacta con los medios de comunicación también es partícipe de los homicidios. Hace presente que, en cualquier caso, el rol administrativo que señala García es compatible con los tipos penales. Es parte de un aparato organizado de poder dedicado a la represión. Por último, señala que Jaime García tenía mando sobre líder de la patrulla Chacal.



En relación con Libardo Schwartenski, acentúa que hay al menos tres testigos que aluden a su participación en las detenciones. Uno de ellos dice que los detenidos tenían fuerte vigilancia y Libardo Schwartenski era uno de esos custodios.

Respecto de Raimundo García, el testigo Oscar Inostroza declara que los hermanos Jaime y Raimundo García Covarrubias estaban con bazucas al momento de los homicidios calificados. Señala que, además, seis testigos aluden a su rol en el regimiento.

Recuerda que Pablo Grant sostiene que estaba en Curarrehue el día de los hechos. Empero, hay una testimonial que lo ubica cargando cuerpos. Se trata de Juan Manuel Contreras Salazar. Luego se hace un careo entre Grant y Contreras y este último declara que participó en la carga de los cuerpos. También analiza el peritaje de las fotografías aportadas por Grant en segunda instancia para acreditar que habría estado en Curarrehue a la época de los hechos. Enfatiza que la conclusión del peritaje no solo indica que se habrían tomado entre el 5 y el 21 de noviembre de 1973, sino también que podrían haberse tomado en enero de 1974. Incluso agrega que no existe peritaje que permita acreditar cuándo fueron tomadas.

A continuación se refiere a Pedro Tichauer, quien estaba como interventor, según afirma. Hace presente que esta función se cumple desde el 11 de noviembre de 1973. Además, no eran funciones de dedicación exclusiva. El testigo Mancilla Gatica dice que, mientras se torturaba, Tichauer estaba presente. El mismo testigo afirma que fue a informar a Tichauer que lo estaban requiriendo en otro lugar del regimiento y lo fue a buscar a la sala de torturas.

En cuanto a Romilio Lavín y a Norberto Uribe, sostiene que participan en las torturas. Señala los testigos que declaran en tal sentido. Añade que también hay declaraciones que vieron al segundo de estos condenados utilizando la bazuca el día de los hechos.

Por último, se refiere a la patrulla “Chacal” para aportar dos datos. Primero, Jorge Godoy declaró que los conscriptos que formaron



parte de ella son los que se ofrecieron voluntariamente. Segundo, solo 7 personas participaron en la dicha patrulla.

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Pretensión de los querellantes Ricardo Montero, Luis Chávez Rivas y Aníbal Chávez Rivas. El representante de los querellantes Montero, Chávez y Chávez pide la confirmación de la sentencia recurrida y el rechazo de las apelaciones deducidas por las defensas.

Afirma que las pruebas incriminatorias son las de los sobrevivientes. Uno de ellos declara que Moreno lo llevó y también lo torturó con corriente. Otro detenido recuerda a Jaime García por su trato inhumano.

En segundo lugar, las pruebas también provienen de los entonces soldados conscriptos. Uno de ellos explica cómo se torturaba en el regimiento. Otro afirma que es imposible que los oficiales no supieran lo que ocurría. Lo mismo declaran dos conscriptos más. Otro soldado reconoce a Chávez Rivas, a los hermanos García Covarrubias y a Orlando Moreno. Otro testigo menciona a Grant López, a Espinoza, a Moreno Vásquez, y señala que era de público conocimiento que los oficiales trataban con detenidos. Un siguiente testigo nombra a Vásquez, a Schwartenski y a los García. Otro conscripto señala a Valladares, a Ubilla y a los hermanos García. Concluye sosteniendo que es inverosímil pretender que los soldados conscriptos sabían lo que ocurría, pero los oficiales lo ignoraban.

A continuación detalla las evidencias que permiten precisar cómo se ejecutaron los homicidios calificados y los testimonios que obran en dicho sentido. Expresa que las declaraciones disponibles permiten confirmar que los integrantes de la patrulla Chacal eran los encargados de resguardar que las personas no se escaparan. También es posible concluir que la compañía Andina (y no solo la compañía Cazadores) fue llevada al polígono sin saber para qué. Les hicieron disparar hacia un lugar determinado y luego se los llevaron del lugar. El testigo Aedo Matus señala cómo se ordenó realizar la ejecución y cómo un capitán



ya fallecido ordena rematarlos. La información proveniente de la prueba rendida evidencia que solo un oficial se opuso.

Añade que existen dos testificaciones que permiten confirmar que a soldados conscripto se le ordenan limpiar el camión, pues tenía sangre de los cuerpos transportados en aquél, luego de las ejecuciones. Y que todos los oficiales iban al gimnasio a ver lo que ocurría.

A partir de los hechos relatados, solicita mantener el monto de la indemnización por daño moral otorgada por la sentencia de primera instancia.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Pretensión de los querellantes Encarnación Alarcón Muñoz, Lidia del Carmen Molina Alarcón, Luis Alberto Molina Alarcón, María Petronila Molina Alarcón, Yuri Alejandro Molina Alarcón, María Elena Ruiz Mancilla, Alejandra Andrea Elina Chávez, Clemente Cirilo Mardones Jofré, Cosme Damián Mardones Jofré, Casilda Inés Mardones Jofré, Catalina Erasma Mardones Jofré, Ana Aillañir Antiman y Pamela del Carmen Coche Aillañir. La representante de Encarnación Alarcón Muñoz, Lidia del Carmen Molina Alarcón, Luis Alberto Molina Alarcón, María Petronila Molina Alarcón, Yuri Alejandro Molina Alarcón, María Elena Ruiz Mancilla, Alejandra Andrea Elina Chávez, Clemente Cirilo Mardones Jofré, Cosme Damián Mardones Jofré, Casilda Inés Mardones Jofré, Catalina Erasma Mardones Jofré, Ana Aillañir Antiman y Pamela del Carmen Coche Aillañir, se refiere a diversos aspectos.

En primer lugar, pide confirmación de la sentencia recurrida, con declaración de elevar la participación de cómplices a autores del artículo 15, número 3, del Código Penal, respecto de los condenados que indica. En dicho sentido, hace presente que la citada disposición penal alude a concierto previo. Esto permite hablar de coautoría y que el conjunto de acciones individuales forma parte de un plan común. De este modo, un hecho que parece irrelevante, como disparar a arbustos,



es parte de un plan común. Lo relevante es que haya colaboración funcional en la comisión del delito.

En segundo lugar, recuerda que la Corte Suprema señala que los delitos de *lesa humanidad* tienen dos requisitos. Primero, la comisión de delitos. Segundo, un contexto de violación masiva y sistemática de parte de la población civil. Esto mismo lo establece el estatuto de Roma al definir delitos de *lesa humanidad*.

En tercer lugar, se refiere a la participación funcional en los hechos de este caso. Destaca que Juan Carlos Figueroa, soldado, dice que todos sabían lo que ocurría. Además, la fiscalía militar decidía a quién se detenía y qué se hacía con ellos. En ese contexto fueron detenidas siete personas y asesinadas. Enfatiza que la víctima Gajardo Palma dice que fue detenido por los inculpados que menciona. Añadió que reconoció a suboficial Moreno cuando era torturado. El mismo testigo rememora haber visto a Jaime García en el regimiento.

Por otra parte, señala que Burgos participó en secuestros y torturas en múltiples casos desde 1973. Fue adscrito al regimiento Tucapel donde trabajó con la sección segunda. Por su parte, enfatiza que está acreditado en la causa que Podlech era fiscal militar de facto en el regimiento. Agrega que los dos funcionarios de la Policía de Investigaciones, oficiales y algunos suboficiales participaban en las acciones de detención, torturas y asesinato. Cita la causa rol 21.337-2019, de 2023, en que la Corte Suprema acogió un recurso de casación en el fondo y se condenó a múltiples agentes del Estado. En este caso el máximo tribunal destaca el conocimiento del plan superior. Toda esa actividad colaboraba al resultado. En otras palabras, todos aportaron desde sus funciones, a la realización de los hechos, según la citada Corte.

Luego analiza la participación de Jaime García. Sintetiza las diversas declaraciones prestadas por este condenado, todas exculpativas. Citando la sentencia de primera instancia, concluye afirmando que no resulta razonable que no tenía conocimiento de lo



que estaba ocurriendo en el regimiento. Se paseaba en el regimiento. Recuerda que el testigo Luis Humberto Llamunao dice que ese García salía con Espinoza a patrullar, con la patrulla Chacal. Otro testigo con el que fue careado Jaime García dice que lo vio entrar a la sala en que se torturaba. Concluye citando la declaración del conscripto Schwartenski, quien menciona que vio a los dos hermanos García en la sala de torturas.

Por último, analiza la participación de los funcionarios de la policía de investigaciones Quiroz y Barra. Ellos reconocen haber sido destinados al regimiento. Indica que un testigo declaró que Quiroz trabajaba con el militar Ubilla.

Concluye solicitando que se confirme la sentencia recurrida en lo relativo a la acción civil. Acentúa que las leyes de reparación no excluyen reparaciones por la vía judicial.

3. Análisis de la calificación jurídica de los hechos.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Hechos delictivos objeto de la presente causa y su calificación jurídica. Los hechos ilícitos por los que se ha iniciado la presente causa son los siguientes:

a) Homicidios calificados, en su carácter de *lesa humanidad*, de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973.

b) Apremios ilegítimos en las personas de las mismas víctimas recién indicadas, cometidos en la comuna de Temuco en el mes de noviembre de 1973.

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Síntesis de las alegaciones respecto de los hechos. Respecto de los hechos ilícitos investigados en



la presente causa, ninguno de los acusados ha controvertido su existencia.

QUINCUAGÉSIMO: Síntesis de las alegaciones respecto de la calificación jurídica de los hechos. Según se expresó más arriba, siete condenados apelan en contra de la calificación jurídica de los hechos:

a) Romilio Lavín y Noorberto Uribe reclaman contra el uso de la expresión “tortura”.

b) Manuel Campos y Héctor Villablanca, por su parte, piden que no se les comunique la calificante del homicidio calificado y se les considere cómplices de homicidio simple.

c) Hernán Quiroz, Daniel San Juan y Alfonso Podlech, piden que no se califique como delitos de *lesa humanidad* los investigados, porque no estaban vigentes en Chile los Convenios de Ginebra ni otros tratados o leyes que aplican esta categoría. Presentan esta alegación para viabilizar la aplicación de una o más de las siguientes instituciones jurídicas: la amnistía, la prescripción y la media prescripción. Por su parte, también pidieron la aplicación de una o más de dichas instituciones los siguientes acusados: Manuel Vásquez, Gabriel Dittus, Orlando Moreno, Sergio Vallejos, Juan Concha y Juan Labraña. Por tanto, estas pretensiones de los nueve acusados serán analizadas conjuntamente.

En definitiva, a continuación se analizarán esas tres líneas de peticiones, en el mismo orden en que han sido mencionadas.

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Análisis del uso de la voz “tortura”. Romilio Lavín y Norberto Uribe alegan que la sentencia califica los actos como “tortura”. Expresan que esa denominación no se encontraba vigente a la época de acaecimiento de los hechos.

Aciertan los acusados recurrentes al señalar que la expresión “tortura” no se utilizaba en el Código Penal chileno a la época de los ilícitos a que se refiere esta causa. Es correcto, además, porque desde la Ley N° 20.968 (2016) la legislación chilena hace una tajante separación



entre los delitos de tortura, por una parte, y de apremios ilegítimos, por otra (Mario Durán Migliardi (2020): “Nociones para la interpretación y delimitación del nuevo delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, *Revista de Derecho* (Universidad Católica del Norte), Vol. 27, p. 6).

Pese a lo señalado, el solo uso del término “tortura” no es jurídicamente relevante si aquello no incide en la decisión del asunto. En efecto, el tipo penal por el que se sanciona en la sentencia impugnada es el de apremios ilegítimos, previsto en el artículo 150, número 1, del Código Penal, en su texto vigente a la fecha de los hechos investigados.

En consecuencia, y, en definitiva, esta alegación deberá ser desestimada.

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: Análisis de la comunicabilidad de la calificación de los homicidios. Manuel Campos y Héctor Villablanca, por su parte, piden que no se les comunique la calificante del homicidio calificado y se les considere cómplices de homicidio simple.

Para resolver la comunicabilidad de la calificación del homicidio a los condenados como cómplices de los homicidios calificados, es necesario considerar dos elementos. El primero de ellos es de carácter normativo. El segundo de esos elementos es de carácter fáctico. Ambos serán inmediatamente revisados.

QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Elementos normativos para analizar la comunicabilidad. El artículo 64 del Código Penal ha tratado escuetamente el problema de la comunicabilidad de las circunstancias que agravan o que atenúan el reproche penal de un sujeto determinado. Al respecto expresa lo siguiente:

“Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en la disposición moral del delincuente, en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal, servirán para atenuar o agravar la



responsabilidad de sólo aquellos autores, cómplices o encubridores en quienes concurren.

Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarlo, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad únicamente de los que tuvieron conocimiento de ellas antes o en el momento de la acción o de su cooperación para el delito”.

A partir de esta regulación, la doctrina penal se ha dividido esencialmente en tres posiciones dogmáticas a través de las cuales se pretende definir cómo se debe aplicar la comunicabilidad. Así lo sostiene Alejandro Leiva, quien al respecto explica:

“En este sentido, se distinguen tres grandes tesis: la primera, conocida como la de los comunicantes extremos, fundados principalmente en el denominado principio de indivisibilidad del título de imputación, en virtud de la cual todos los partícipes deben ser sancionados por la misma figura pues se trata de un hecho único que no puede ser considerado jurídicamente de diferente manera para cada uno de los que intervienen conjuntamente”.

“Una segunda tesis, denominada como la de los incommunicantes limitados, la cual distingue casos de incommunicabilidad, principalmente por la separación entre delitos especiales propios e impropios. En los delitos especiales propios el tipo penal designa como autor a sujetos que poseen una calidad especial, sin que se contemple un tipo penal aplicable a los sujetos que no la posean, como es el caso del delito de prevaricación. En estos casos, se comunica la calidad especial exigida en el tipo pues no existe una figura residual aplicable al extraneus, evitándose así lagunas de punibilidad.

“En cambio, son delitos especiales impropios, aquellos que pueden ser cometidos por cualquiera, pero en los cuales la calidad especial del sujeto agrava la penalidad, existiendo un tipo base o residual aplicable a los que no la posean, como sería el caso del delito de fraude al Fisco en relación al de estafa. En estos casos y en



aplicación del artículo 64, la calidad especial no se comunica al extraneus, quien responde por el tipo residual que fuere aplicable”.

“Finalmente se encuentran los denominados incommunicantes extremos, tesis en virtud de la cual cada partícipe debe ser castigado según la naturaleza del injusto que cometen, por lo que nunca procede extender el injusto de otro” (Alejandro Leiva López (2017): “La comunicabilidad en el Derecho penal chileno a partir de su interpretación práctica. Mirada crítica a su formulación como “principio del Derecho””, en *Revista de Derecho* (PUC de Valparaíso), N° IL, pp. 230-233).

QUINCUAGÉSIMO CUARTO: Fundamentos para optar por la incommunicabilidad. Entre las tres perspectivas doctrinarias expuestas, esta Ilustrísima Corte estima que debe aplicarse la tercera, es decir, la posición de incommunicabilidad extrema. Una tal decisión se sostiene sobre cuatro argumentos.

En primer lugar, por una razón de texto: el artículo 64 del Código Penal ha establecido la incommunicabilidad de las circunstancias personales y materiales que solo concurren en uno o algunos de los hechos.

En segundo lugar, por exigencia del principio de legalidad penal. En efecto, no existe delito, ni agravación, sin ley previa, escrita y en la que la conducta esté precisamente descrita.

En tercer lugar, porque los factores de agravación y atenuación han sido establecidos por el legislador para aquellos en quienes concurren las respectivas circunstancias, por lo que no corresponde extenderlo a aquellos en quienes no concurren.

Y, en cuarto lugar, por una razón de seguimiento del precedente. Al respecto se debe recordar que esta Ilustrísima Corte se pronunció en el mismo sentido que ahora se sostiene, en la causa rol 1125-2023, de 23 de julio de 2024.

QUINCUAGÉSIMO QUINTO: Elementos fácticos para analizar la comunicabilidad. La sentencia de primera instancia



estableció que los siguientes condenados tuvieron la calidad de cómplices en los siete homicidios calificados investigados en esta causa: Jaime García, Pablo Gran, Romilio Lavín, Gabriel Dittus, Manuel Campos, Héctor Villablanca, Carlos Oviedo, Raimundo García, Norberto Uribe, Pedro Tichauer, Juan Labraña, Omar Burgos, Orlando Moreno, Raúl Schonherr, Hernán Quiroz, Daniel San Juan, Sergio Vallejos, Juan Concha y Arnoldo Aedo.

Según se analizará más adelante, no existe evidencia suficiente para acreditar la participación en los homicidios calificados de algunos de los recién mencionados.

Respecto de los demás, en el proceso no existen antecedentes que permitan sostener que los cómplices compartieron el dolo calificante de los autores de tales delitos. En otras palabras, no existen evidencias que permitan sostener fundadamente que conocían y quería la premeditación y la alevosía que agravó los homicidios de las siete personas que fueron víctimas de aquellos.

Por tanto, no resulta jurídicamente admisible extenderles el injusto de los autores, debiendo responder únicamente del injusto en el que incurrieron.

QUINCUAGÉSIMO SEXTO: Conclusión respecto de la comunicabilidad de la calificante de los homicidios. De acuerdo con las precedentes consideraciones, no debe comunicarse a los condenados como cómplices la calificación de los homicidios en los que intervinieron con tal grado de participación.

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO: Análisis del carácter de delitos de *lesa humanidad* de los hechos investigados. Según se expresó más arriba, no se ha cuestionado la existencia de los ilícitos a que se refiere esta causa. Sí se ha controvertido, en cambio, su carácter de delitos de *lesa humanidad*. Tal planteamiento ha sido formulado por Hernán Quiroz, Daniel San Juan y Alfonso Podlech. Su finalidad ha sido hacer procedente la amnistía, la prescripción y la media prescripción. Por su parte, Manuel Vásquez, Gabriel Dittus, Orlando



Moreno, Sergio Vallejos, Juan Concha y Juan Labraña.piden la aplicación de estas mismas instituciones jurídicas. Por ello, se emitirá pronunciamiento respecto de todas ellas conjuntamente a continuación.

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO: Síntesis de las alegaciones relativas a la calidad de los delitos. Los seis acusados referidos en el considerando precedente han solicitado la aplicación de una o más de las siguientes instituciones jurídicas: la amnistía establecida por el Decreto Ley N° 2191, de 1978, la prescripción de la acción penal conforme a los artículos 94 y 102 del Código Penal y la media prescripción (o prescripción gradual) del artículo 103 del Código penal.

Fundan estas alegaciones esencialmente en tres líneas de argumentación, según se ha expresado más arriba.

En primer lugar, en que los Convenios de Ginebra no son pertinentes al presente caso. Esta afirmación se funda en que no se cumplen los supuestos fácticos exigidos en aquellos para su aplicación. Recuerdan que dichos Convenios suponen el enfrentamiento entre fuerzas armadas de diversos Estados. Y dicho conflicto bélico no existía en Chile a la época de comisión de los ilícitos.

En segundo lugar, en que los tratados de derechos humanos, y particularmente la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no se encontraban vigentes en Chile a la época en que se produjeron los ilícitos investigados.

En tercer lugar, en que la Ley N° 20.357, de 2009, rige únicamente las vulneraciones a derechos humanos cometidas desde su vigencia. En consecuencia, no se aplica a los delitos perpetrados con anterioridad al año 2009.

QUINCUAGÉSIMO NOVENO: El carácter de normas de *ius cogens* de la regulación de los delitos de *lesa humanidad*. En lo que sigue corresponde pronunciarse respecto de la procedencia de las tres instituciones mencionadas. En concreto, la amnistía, la prescripción y la media prescripción.



Con todo, y previo a dicho análisis, conviene recordar que la regulación de los delitos de *lesa humanidad* constituye normas de *ius cogens*. Las normas de *ius cogens* son normas imperativas de derecho internacional general. La expresión “imperativas” alude a que no admiten tratado ni conducta en contrario, de modo que son nulas las que las contradigan. Que son “de derecho internacional general” significa que son admitidas por la generalidad de la comunidad internacional.

Las normas de *ius cogens* se encuentran expresamente reconocidas en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados. Esa disposición la explica del siguiente modo: *es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho internacional general que tenga el mismo carácter.*

Pues bien, precisamente en dicho sentido se pronunció esta misma Ilustrísima Corte en la sentencia recaída en la causa rol 1125-2023, de 23 de julio de 2024. En su considerando cuadragésimo quinto expresó: *“Al efecto se debe tener presente que los delitos de lesa humanidad constituyen no solo parte del derecho internacional convencional. Como se ha señalado por la doctrina y por la jurisprudencia internacional, se trata de normas de ius cogens y del derecho internacional consuetudinario. Por tanto, la violación de los derechos humanos se encuentra reprochado por el derecho internacional aun antes de su consagración en instrumentos internacionales”.*

Esta sola aseveración permitiría descartar las pretensiones de aplicar la amnistía, la prescripción y la media prescripción. Sin embargo, y a mayor abundamiento, a continuación se analizará la procedencia de cada una de esas tres instituciones jurídicas.

SEXAGÉSIMO: Procedencia de la amnistía y la prescripción. De acuerdo con la doctrina, la jurisprudencia chilena



rechaza la aplicación de la amnistía y de la prescripción en casos de violación a los derechos humanos al menos desde el año 2005. En particular, desde el caso relativo a la desaparición forzada de Miguel Ángel Sandoval (Liliana Galdámez Zelada (2010): “Tutela judicial de graves violaciones a los derechos humanos: las actuaciones del juez y las omisiones del legislador chileno”, en *Estudios Constitucionales*, Vol. 8, N° 2, p. 202).

Pero es desde el año 2007, en que se dictan una serie de sentencias relativas a homicidios y a desapariciones forzadas, que la jurisprudencia se consolida en dicho sentido. En palabras de X, *“Durante el transcurso del año 2007, la Corte Suprema, en concordancia con la más acreditada doctrina y jurisprudencia del sistema internacional de protección de los derechos humanos, reconoció en una serie de fallos vinculados a las violaciones de tales derechos, particularmente, casos de homicidios y secuestros, que dichos crímenes, en razón de su envergadura y especial carácter, son imprescriptibles e inamnistiables”* (Karina Fernández Neira y Pietro Sferrazza Taibi (2009): “La aplicación de la prescripción gradual en casos de violaciones de derechos humanos”, *Estudios Constitucionales*, Vol. 7, N° 1, p. 300).

En ese sentido se puede citar la sentencia recaída en la causa rol 3125-2004, de fecha 13 de marzo de 2007, considerando octavo, en la que el Excelentísimo Tribunal, sostuvo: *“la prohibición de autoexoneración que recae sobre los responsables de crímenes de lesa humanidad, no atañe sólo a situaciones tan obvias, como las amnistías autoconcedidas, sino que implica también una suspensión de la vigencia de instituciones preexistentes, como la prescripción de la acción penal, que fueron concebidas para operar en un estado de paz social al cual estaban llamados a servir, pero no en situaciones de vulneración de todas las instituciones sobre las cuales dicho Estado se erigía, y en beneficio precisamente de quienes provocaron dicho quebrantamiento”*.



Y en la sentencia recaída en la causa rol 3452-2006, de fecha 10 de mayo de 2007, considerando 74°, añadió: *“que la evolución y progresividad del derecho internacional de los derechos humanos ya no autorizan al Estado a tomar decisiones cuya consecuencia sea la renuncia a la persecución penal de delitos de lesa humanidad, en pos de una convivencia social pacífica apoyada en el olvido de hechos que, por su entidad y significación para la comunidad humana, no dejan de ser vivenciados como gravísimos por el transcurso del tiempo ni por sus protagonistas ni por los afectados ni, en fin, por la sociedad toda”*.

Todos estos antecedentes y argumentos establecidos por la jurisprudencia consolidada serán seguidas por esta Ilustrísima Corte. Por tal motivo, las pretensiones de aplicar al presente caso la amnistía y la prescripción deberán ser rechazadas.

SEXAGÉSIMO PRIMERO: La prescripción en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Sin perjuicio de lo recién señalado, y a mayor abundamiento, conviene recordar lo establecido por el derecho internacional de los derechos humanos respecto de la prescripción.

El derecho internacional de los derechos humanos establece la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Precisamente en dicho sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile, mediante sentencia de 29 de noviembre de 2018 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 76 y 77. Al efecto textualmente sostuvo lo siguiente:

“76. En reiterada jurisprudencia, este Tribunal se ha referido al amplio contenido y alcances del derecho de acceso a la justicia, en el marco de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma.

77. En particular, en casos de graves violaciones de derechos humanos y de manifiesta obstrucción de justicia, este Tribunal ha considerado que “en ciertas circunstancias el Derecho Internacional



considera inadmisible e inaplicable la prescripción[penal,] así como las disposiciones de amnistía y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, a fin de mantener vigente en el tiempo el poder punitivo del Estado sobre conductas cuya gravedad hace necesaria su represión para evitar que vuelvan a ser cometidas” . Tales institutos jurídicos o disposiciones son inadmisibles cuando “pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

De este modo, contrariar al Derecho Internacional de los Derechos Humanos aplicando la prescripción de la acción penal a delitos de lesa humanidad importaría que el Estado de Chile incurra en responsabilidad internacional.

SEXAGÉSIMO SEGUNDO: La prescripción y el control de convencionalidad. Esta Ilustrísima Corte, al igual que todos los tribunales del país, se encuentra obligada a realizar el control de convencionalidad al resolver sus casos. Este control de convencionalidad significa que al decidirlos se debe atender no solo al derecho interno, sino también a lo prescrito por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a al modo en que tales disposiciones han sido interpretadas por la Corte Interamericana.

Precisando lo que acaba de decirse, es necesario recordar que el artículo 1 de dicho instrumento internacional textualmente prescribe: *“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna”.*

La Corte Interamericana ha explicado el significado de esta norma al declarar que, de acuerdo con la disposición recién transcrita, *“todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la*



Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención” (sentencia recaída en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, de fecha 29 de julio de 1988, párrafo 164 y siguientes, Fondo).

Pues bien, para asegurar el efectivo respeto del artículo 1 de la Convención Americana en los términos recién explicados, la Corte Interamericana ha establecido el ya mencionado control de convencionalidad.

La profesora Juana Ibáñez explica este mecanismo en los siguientes términos: “a través del denominado “control de convencionalidad” la Corte ha hecho notar a los Estados que, independientemente de las reformas legales que deban adoptar para compatibilizar determinadas disposiciones y prácticas con la Convención Americana y los estándares internacionales que correspondan, en principio, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles deben actuar inmediatamente y de oficio en el sentido de adecuar sus decisiones a dichas disposiciones y estándares, frente al conocimiento de los casos que se les sometan” (Juana María Ibáñez Rivas (2012): “Control de convencionalidad: precisiones para su aplicación desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en *Anuario de Derechos Humanos*, p. 105).

La profesora citada se encuentra en lo cierto si se consideran las expresas declaraciones de la Corte Interamericana sobre el punto. En efecto, fue precisamente en el caso Almonacid Arellano y otros contra Chile que el máximo órgano jurisdiccional del continente declaró estar “consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, (...) obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico”. No obstante, agregó que “cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención



Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos” (sentencia recaída en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, de fecha 26 de septiembre de 2006, Excepciones, fondo, reparaciones y costas, párrafo 123).

De acuerdo con lo que se ha expresado, los tribunales del respectivo Estado, los chilenos en el presente caso, están obligados a considerar no solo su derecho interno, sino también la Convención Americana y la interpretación dada a sus disposiciones por la Corte Interamericana. Entre aquellas interpretaciones se encuentra la consignada en el considerando anterior, que impide aplicar la prescripción de la acción penal a los delitos de lesa humanidad.

SEXAGÉSIMO TERCERO: Procedencia de la media prescripción. El citado artículo 103 del Código Penal alude a lo que se conoce como “media prescripción”. Dicho precepto establece textualmente lo siguiente:

“Si el responsable se presentare o fuere habido antes de completar el tiempo de la prescripción de la acción penal o de la pena, pero habiendo ya transcurrido la mitad del que se exige, en sus respectivos casos, para tales prescripciones, deberá el tribunal considerar el hecho como revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante y aplicar las reglas de los arts. 65, 66, 67 y 68, sea en la imposición de la pena, sea para disminuir la ya impuesta”.

Para resolver la pertinencia de aplicar esta disposición, conviene recordar que el mencionado problema interpretativo ha sido planteado reiteradamente a los tribunales superiores de justicia.

Pues bien, la jurisprudencia muy mayoritaria ha rechazado aplicar la media prescripción a los delitos de *lesa humanidad*. En ese sentido puede citarse, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema



recaída en la causa rol 316-2020, de fecha 14 de diciembre de 2022. En aquella decisión precisamente se revocó una sentencia de esta Corte de Temuco, que había decidido acogerla.

Una justificación de aquella decisión puede encontrarse en otra sentencia de la Corte Suprema, de fecha 31 de octubre de 2018, recaída en la causa rol 39.628-2017, considerando décimo, en la que sostuvo lo siguiente:

“Décimo: Que sin perjuicio de lo razonado por la sentencia, cabe recordar que el artículo 103 del Código Penal no sólo está contemplado en el mismo título que la prescripción, sino que se desarrolla luego de aquélla, lo que revela la estrecha vinculación entre ambos institutos.

Como en el caso se trata de delitos de lesa humanidad, lo que condujo a proclamar la imprescriptibilidad de la acción persecutoria, cabe sostener que por aplicación de las normas del Derecho Internacional y dado que tanto la media prescripción como la causal de extinción de la responsabilidad penal se fundan en el transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicarla prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, pues no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, dado que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que ninguno de tales institutos resulta procedente en ilícitos como el de la especie”.

Esta Corte seguirá el criterio jurisprudencial mencionado, en el sentido que no resulta aplicable el artículo 103 del Código Penal en el caso de los delitos que constituyen vulneración a los derechos humanos.

4. Análisis de la participación.

SEXAGÉSIMO CUARTO: Síntesis de las alegaciones de los acusados respecto de la participación. Respecto de la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LETUXZMWJWX

participación en los hechos delictivos, han cuestionado su injerencia en los mismos los siguientes acusados: Manuel Vásquez, Jaime García, Pablo Grant, Romilio Lavín, Gabriel Dittus, Manuel Campos, Héctor Villablanca, José Inzunza, Carlos Oviedo, Raimundo García, Norberto Uribe, Pedro Tichauer, Omar Burgos, Orlando Moreno, Raúl Schonherr, Oscar Podlech, Libardo Schwartenski, Juan Concha, Arnoldo Aedo, Juan Labraña, Hernán Quiroz y Daniel San Juan

La esencia de sus argumentos es que no se acreditó la participación, que no se detalla en qué consistió la participación o que existe una duda razonable de la participación.

SEXAGÉSIMO QUINTO: Requisitos de las presunciones judiciales. El artículo 488 del Código de Procedimiento Penal dispone lo siguiente, en relación con las presunciones judiciales:

“Para que las presunciones judiciales puedan constituir la prueba completa de un hecho, se requiere:

1° Que se funden en hechos reales y probados y no en otras presunciones, sean legales o judiciales;

2° Que sean múltiples y graves;

3° Que sean precisas, de tal manera que una misma no pueda conducir a conclusiones diversas;

4° Que sean directas, de modo que conduzcan lógica y naturalmente al hecho que de ellas se deduzca; y

5° Que las unas concuerden con las otras, de manera que los hechos guarden conexión entre sí, e induzcan todas, sin contraposición alguna, a la misma conclusión de haber existido el de que se trata”.

De este modo, para que las presunciones judiciales puedan constituir plena prueba de un hecho, se requiere que se funden en hechos probados. Además, deben ser múltiples, graves, precisas, directas y concordantes.

La cuestión, por tanto, se reconduce a determinar si en el presente caso existen presunciones judiciales en los términos exigidos



por el artículo 488 para tener por probados los hechos investigados y la participación de los acusados en los mismos.

SEXAGÉSIMO SEXTO: Evaluación de la participación en los apremios ilegítimos y en los homicidios calificados. En lo relativo a las muertes de Florentino Alberto Molina Ruíz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, ocurridos en la comuna de Temuco en noviembre de 1973, se debe evaluar si se ha probado que fueron víctimas de apremios ilegítimos y posteriormente de homicidio calificado.

A partir de la revisión de las probanzas aportadas a la presente causa, esta Ilustrísima Corte estima que resulta posible generar presunciones judiciales, en los términos exigidos por el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, respecto de los siguientes hechos:

a) Que las siete víctimas ya mencionadas fueron detenidas en diversos momentos del mes de noviembre de 1973 por personal militar o de la policía de investigaciones, y conducidas al Regimiento Tucapel de Temuco.

b) Que las siete víctimas fueron sometidas a una o más de las siguientes modalidades de apremios ilegítimos en el Regimiento Tucapel de Temuco: les vendaban los ojos, les amaraban los brazos y los colgaban, les ubicaban en un camarote metálico y les aplicaban electricidad, les aplicaban electricidad directamente en los cuerpos desnudos, les desnudaban, les golpeaban con una fusta, con la culata de las armas, con puños y con pies, y les obligaban a mantenerse de rodillas con los brazos en alto sujetando ladrillos mientras los golpeaban, entre otras prácticas violentas e ilícitas.

c) Que en la comisión de los mencionados apremios ilegítimos tuvieron participación Jaime García Covarrubias, Pablo Grant López, Romilio Lavín Muñoz, José Inzunza Reyes, Carlos Oviedo Arriagada, Raimundo García Covarrubias, Norberto Uribe Moroni, Pedro



Tichauer Salcedo, Omar Burgos Dejea, Orlando Moreno Vásquez, Raúl Schonherr Frías, Oscar Podlech Michaud, Juan Labraña Luvecce, Hernán Quiroz Barra, Daniel San Juan y Libardo Schwartenski Rubio.

d) Que las siete víctimas fueron conducidas a un sector denominado Isla Cautín, específicamente en la zona llamada “El Polígono” del Regimiento Tucapel, el día 10 de noviembre de 1973.

e) Que la muerte de las mencionadas víctimas fue producto de respectivos homicidios con arma de fuego.

f) Que los homicidios de las siete víctimas fueron premeditados y con alevosía, de modo que a su respecto se configuran homicidios calificados. En dicho contexto se intentó disimular los asesinatos bajo la apariencia de un enfrentamiento de aquellas víctimas con miembros del ejército, el que por cierto no existió.

g) Que en los homicidios calificados de las víctimas ya mencionadas tuvieron participación, como autores, cómplices o encubridores, Manuel Vásquez Chahuán, Jaime García Covarrubias, Pablo Grant López, Romilio Lavín Muñoz, Gabriel Dittus Marín, Manuel Campos Ceballos, Héctor Villablanca Huenulao, Carlos Oviedo Arriagada, Raimundo García Covarrubias, Norberto Uribe Moroni, Pedro Tichauer Salcedo, Orlando Moreno Vásquez, Raúl Schonherr Frías, Sergio Vallejos Garcés, Oscar Podlech Michaud, Juan Cocha Belmar, Juan Labraña Luvecce y Arnoldo Aedo Matus.

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO: Participación en un plan delictivo común. Esta Ilustrísima Corte hace suya la doctrina asentada por la Excelentísima Corte Suprema en la sentencia recaída en la causa rol 36.979-2020, conocida como “Caso Colombo”, de fecha 20 de septiembre de 2023. En la oportunidad el tribunal vértice de la jurisdicción ordinaria sostuvo lo siguiente en el considerando 42º:

“Estas acciones dan cuenta que los encartados en examen, ejecutaron, voluntariamente, conductas que no sólo encuadran en los verbos rectores del tipo penal de secuestro calificado, sino que además lo hicieron bajo los parámetros de la coautoría funcional y sucesiva,



que implica que todos ellos efectuaron dentro de su esfera de actuación y en un contexto grupal, individualmente, un aporte funcional necesario para llevar a cabo la operación delictiva, mediante una determinada función y cuya ejecución implica la continuidad del tipo penal, sin que sea dable exigir el conocimiento particular de la identidad de las personas que detuvieron a las víctimas, quienes los interrogaron y quienes los sacaron del lugar en que se hallaban ilegalmente reclusas, de suerte que su calidad de coautores establecida en la sentencia en alzada es indesmentible”.

En particular, esta Ilustrísima Corte hace suya la noción de plan común, al que adscribían los diversos partícipes de los ilícitos de que trata esta causa. De tal suerte, un hecho que parece irrelevante desde el punto de vista de los tipos penales analizados, como disparar a los árboles, o custodiar a los detenidos, forma parte de un plan delictivo al que colaboran los diversos partícipes.

SEXAGÉSIMO OCTAVO: Situación particular de Omar Burgos, Hernán Quiroz y Daniel San Juan. Omar Burgos, Hernán Quiroz y Daniel San Juan eran funcionarios de la policía de Carabineros, el primero, y de la policía de investigaciones, los dos últimos, al tiempo en que ocurrieron los hechos. A ellos resulta aplicable lo señalado en los precedentes considerandos, en lo relativo a la aplicación de apremios ilegítimos, pues participaron de estos hechos.

Con todo, en opinión de esta Ilustrísima Corte, en la causa no existen antecedentes que permitan vincular a estos acusados con los siete homicidios calificados. Tampoco existen antecedentes que permitan inferir que conocían el plan homicida de los oficiales del Regimiento Tucapel. Al respecto ni siquiera resulta posible generar presunciones judiciales en los términos establecidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. En consecuencia, respecto de tales delitos deberán ser absueltos y así se dirá en lo resolutive.



En definitiva, a partir de la evidencia disponible resulta posible concluir que su participación dolosa se contrajo a la detención y aplicación de apremios ilegítimos a los detenidos.

SEXAGÉSIMO NOVENO: Conclusión respecto de la participación. Lo expresado en los considerandos precedentes permite descartar las alegaciones de las defensas respecto de la participación de los acusados en los ilícitos investigados. Se exceptúan únicamente los acusados Omar Burgos, Hernán Quiroz y Daniel San Juan, pero solo respecto de los homicidios calificados por los que fueron acusados.

En todo caso, algo más debe decirse sobre el grado de injerencia de determinados partícipes en los ilícitos investigados en esta causa. Sobre esta cuestión se volverá inmediatamente al tratar del grado de participación.

5. Análisis del grado de participación.

SEPTUAGÉSIMO: Pretensiones relativas al grado de participación. En relación con el grado de participación, han presentado pretensiones tanto dos de las defensas como uno de los querellantes.

Los condenados Orlando Moreno, Raúl Schonherr, Hernán Quiroz, Daniel San Juan y Libardo Schwartenski apelaron en contra del grado de participación que se les atribuyó en la sentencia de primera instancia. Los cuatro primeros para ser considerados encubridores, y no cómplices. El último de ellos para que se le tuviera por cómplice y no por autor.

Uno de los querellantes, por su parte, ha solicitado elevar la participación de cómplices a autores del artículo 15, número 3, del Código Penal, respecto de los condenados que indica.

Por último, resulta pertinente pronunciarse respecto de la complicidad atribuida a Gabriel Dittus, Manuel Campos, Héctor



Villablanca, Sergio Vallejos y Juan Concha en los homicidios calificados investigados en la presente causa.

A continuación se analizarán sucesivamente todas estas cuestiones.

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO: Análisis de la participación de Orlando Moreno y Raúl Schonherr. En el caso Orlando Moreno y Raúl Schonherr fueron condenados como cómplices de los siete homicidios calificados y autores de los siete apremios ilegítimos investigados. Respecto de los homicidios calificados solicitan se les considere encubridores.

Esta Ilustrísima Corte coincide con el parecer de la sentencia recurrida, en cuanto al grado de participación de los dos condenados en los referidos ilícitos. Para acceder a una tal conclusión se tiene presente especialmente lo señalado en el considerando 141°, secciones C.2.5 y C.2.6, y en el considerando 142°, secciones C.2.2 y C.2.4 de la sentencia recurrida. Y, además, la noción de plan común a que se refiere la jurisprudencia de la Corte Suprema, más arriba citada, y del que participaban los oficiales del Regimiento Tucapel.

En consecuencia, se desestimaré la analizada pretensión de Orlando Moreno y Raúl Schonherr.

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO: Análisis de la participación de Hernán Quiroz y Daniel San Juan. En el caso Hernán Quiroz y Daniel San Juan fueron condenados como cómplices de los siete homicidios calificados y autores de los siete apremios ilegítimos investigados. Respecto de los homicidios calificados solicitan se les considere encubridores.

Al respecto se recuerda que más arriba se declaró que estos dos condenados debían ser absueltos de los siete homicidios calificados. Por dicha razón, no resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud formulada por los mismos, respecto de su participación en tales delitos de *lesa humanidad*.



SEPTUAGÉSIMO TERCERO: Análisis de la participación de Libardo Schwartenski. En el caso Libardo Schwartenski fue condenado como autor de los siete apremios ilegítimos investigados. Solicita que se le considere cómplice de los mismos.

Esta Ilustrísima Corte coincide con el parecer de la sentencia recurrida, en cuanto al grado de participación de este condenado en los referidos ilícitos. Para acceder a una tal conclusión se tiene presente especialmente lo señalado en el considerando 146°, sección C.2.6 de la sentencia recurrida. Y, además, la noción de plan común a que se refiere la jurisprudencia de la Corte Suprema, más arriba citada, y del que participaban los integrantes de la patrulla “Brava” o “Chacal”.

En consecuencia, se desestimaré la analizada pretensión de Libardo Schwartenski.

SEPTUAGÉSIMO CUARTO: Análisis de la calificación de los cómplices como autores. Según se indicó, uno de los querellantes pide elevar la participación de cómplices a autores del artículo 15, número 3, del Código Penal, respecto de los condenados que indica.

La sentencia de primera instancia, por su parte, condenó como cómplices de homicidio calificado y/o de apremios ilegítimos a los siguientes acusados: Jaime García, Pablo Gran, Romilio Lavín, Gabriel Dittus, Manuel Campos, Héctor Villablanca, Carlos Oviedo, Raimundo García, Norberto Uribe, Pedro Tichauer, Juan Labraña, Omar Burgos, Orlando Moreno, Raúl Schonherr, Hernán Quiroz, Daniel San Juan, Sergio Vallejos, Juan Concha y Arnoldo Aedo.

SEPTUAGÉSIMO QUINTO: Autoría del artículo 15, número 3, del Código Penal. El artículo 15, número 3, del Código Penal textualmente dispone: “*Se consideran autores: 3.º Los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él*”.

La investigación que concluye con la sentencia de primera instancia no ha encontrado elementos que permitan calificar la



participación de los cómplices, ya mencionados, como autores en los términos expresados por el transcrito artículo 15, número 3.

Esta Ilustrísima Corte coincide con aquel parecer. Entre los antecedentes aportados no se encuentran evidencias suficientes para sustituir la calificación jurídica que se les atribuye y reemplazarla por la de autores del artículo 15, número 3, del Código Penal. En efecto, no existe prueba suficiente que permita formar convicción o generar presunciones judiciales en dicho sentido.

En consecuencia, la pretensión del querellante deberá ser desestimada respecto de todos aquellos que han sido condenados en calidad de cómplices y que fueron individualizados en el considerando anterior.

Precisamente al contrario, respecto de tres de ellos no existen elementos que permitan verificar su participación en los homicidios calificados, según se expresó más arriba. Y otros deben ser considerados encubridores, según se analiza en el siguiente considerando.

SEPTUAGÉSIMO SEXTO: Situación particular de Gabriel Dittus, Manuel Campos, Héctor Villablanca, Sergio Vallejos y Juan Concha. Gabriel Dittus, Manuel Campos, Héctor Villablanca, Sergio Vallejos y Juan Concha se encontraban realizando su servicio militar al tiempo en que ocurrieron los hechos.

En opinión de esta Ilustrísima Corte, en la causa no existen antecedentes que permitan sostener que participaron como cómplices en los siete homicidios calificados. Tampoco existen evidencias que permitan inferir que conocían el plan homicida de los oficiales del Regimiento Tucapel. Por el contrario, sí existen elementos que permiten generar presunciones judiciales en los términos establecidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, respecto de su colaboración como encubridores. En consecuencia, respecto de los delitos de homicidios calificados, estos cinco conscriptos deberán ser condenados como encubridores.



En el caso particular de Sergio Vallejos, la evidencia disponible permite coincidir con la sentencia recurrida en que tuvo participación como cómplice de los siete apremios ilegítimos a los detenidos. Por tanto, deberá ser sancionado tanto por el encubrimiento de los homicidios calificados, como por su complicidad en tales apremios ilegítimos.

6. Análisis de las circunstancias eximentes y modificatorias de la responsabilidad penal.

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO: Síntesis de las alegaciones de los acusados respecto de las circunstancias eximentes y modificatorias. Invocaron eximentes de responsabilidad Gabriel Dittus, Juan Concha, Manuel Campos, Héctor Villablanca y José Inzunza. Los dos primeros solicitaron la aplicación de la contemplada en el artículo 10, número 9, del Código Penal. Los tres últimos alegaron la expresada en el número 10 del mismo artículo.

Por su parte, han invocado atenuantes de responsabilidad Gabriel Dittus, Manuel Campos, Héctor Villablanca, José Inzunza, Omar Burgos, Orlando Moreno, Raúl Schonherr, Sergio Vallejos, Oscar Podlech, Juan Concha, Arnoldo Aedo,, Juan Labraña, Hernán Quiroz y Daniel San Juan.

Por último, han solicitado la no aplicación de la agravante del artículo 12, número 8, del Código Penal, Manuel Campos, Héctor Villablanca, Juan Labraña, Hernán Quiroz, Daniel San Juan, Oscar Podlech y Arnoldo Aedo.

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO: Análisis de la eximente de responsabilidad del artículo 10, número 9. El artículo 10, número 9, del Código Penal expresa: *“Están exentos de responsabilidad criminal: “El que obra violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un miedo insuperable”.*



Para que se configure esta causal es necesario que existan en la causa evidencias de un riesgo cierto y actual de ser víctima de un mal grave en la persona de quien alega esta eximente. En palabras de la Corte Suprema, se requiere acreditar “*que los enjuiciados procedieron en cumplimiento de una orden de su superior, amenazados de graves represalias y castigos en caso de desobediencia*” (Corte Suprema, sentencia recaída en la causa rol 361-2020, de fecha 14 de diciembre de 2022, considerando décimo).

Las defensas de Gabriel Dittus y Juan Concha no han aportado probanzas que permitan acreditar la concurrencia de esta causal. Aquello no significa desconocer la existencia de un rígido sistema de mando-obediencia a la época de acaecimiento de los hechos investigados. Sin embargo, las graves represalias y castigos, es decir, el grave mal cierto y actual en la persona de estos acusados, no ha sido acreditado. Y es tal circunstancia cuya concurrencia debe verificarse para que la eximente en cuestión resulte procedente.

En consecuencia, no resulta posible estimar la concurrencia de la eximente de responsabilidad invocada respecto de los acusados Gabriel Dittus y Juan Concha.

SEPTUAGÉSIMO NOVENO: Análisis de la eximente de responsabilidad del artículo 10, número 10. El artículo 10, número 10, del Código Penal dispone: “*Están exentos de responsabilidad criminal: El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo*”.

Para el análisis de esta circunstancia, se tiene presente lo que esta misma Ilustrísima Corte sostuvo en la sentencia recaída en la causa rol 1125-2023, de fecha 23 de julio de 2024, considerando cuadragésimo noveno: “*no es posible considerar la vulneración de derechos humanos como parte del cumplimiento de un deber, ni como el legítimo ejercicio de un derecho o cargo. La aplicación de apremios ilegítimos y el homicidio calificado de personas desarmadas y por la espalda, constituyen graves manifestaciones de aquella vulneración*”.



En consecuencia, no resulta posible estimar la concurrencia de la eximente de responsabilidad invocada respecto de los acusados Manuel Campos, Héctor Villablanca y José Inzunza.

OCTOGÉSIMO: Análisis de la atenuante del artículo 11, número 1. El único acusado que invocó la atenuante del artículo 11, número 1, del Código Penal fue Gabriel Dittus. Esta disposición preceptúa: *“Son circunstancias atenuantes: Las expresadas en el artículo anterior, cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos”*. Y relaciona esta atenuante con la eximente del artículo 10, número 9, del mismo Código.

Atendido lo expresado en el considerando anterior al precedente, no resulta posible acoger esta eximente incompleta. En efecto, no se han aportado evidencias que permitan tener por configurada la eximente del artículo 10, número 9, alegada por este mismo condenado. Tampoco existen antecedentes que permitan advertir la existencia de estímulos suficientes para tener por configurada la eximente en forma incompleta. En efecto, no se han aportado elementos que permitan acreditar la amenaza de un mal grave, cierto y actual.

Por lo expresado, esta atenuante de responsabilidad deberá ser desestimada.

OCTOGÉSIMO PRIMERO: Análisis de la atenuante del artículo 11, número 6. La sentencia recurrida ha reconocido la atenuante de irreprochable conducta anterior, contemplada en el artículo 11, número 6, del Código Penal. En particular, a todos los partícipes que carecían de anotaciones penales anteriores a los ilícitos investigados en esta causa.

Sin perjuicio de ello, algunos acusados han solicitado que se les considere como muy calificada.

Al respecto esta Ilustrísima Corte estima que no existen antecedentes para calificar la atenuante en cuestión respecto de la



generalidad de los condenados. No obstante, y siguiendo a la Excelentísima Corte Suprema, debe hacerse una distinción respecto de quienes se encontraban haciendo el servicio militar a la época de los hechos aquí enjuiciados.

Es un hecho no controvertido en la presente causa que Gabriel Dittus, Manuel Campos, Héctor Villablanca, José Reyes, Sergio Vallejos, Libardo Schwartenski y Juan Concha tenían la calidad de conscriptos a la época de acaecimiento de los hechos.

Constituye un hecho igualmente acreditado en la causa que los acusados recién mencionados carecen de antecedentes penales en sus extractos de filiación. Por lo mismo, a su respecto procede reconocerles la atenuante del artículo 11, número 6, del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta anterior. Así lo ha hecho, según se indicó, la sentencia de primera instancia.

Por otra parte, recientemente la Corte Suprema ha establecido una doctrina en relación con la minorante señalada en el caso de conscriptos. En particular, estableció la pertinencia de calificar la atenuante de irreprochable conducta anterior respecto de los acusados que se encontraban haciendo el servicio militar.

Así, en la causa rol 36.743-2021, mediante sentencia de fecha 2 de mayo de 2024, emitida por la Sala Penal del Excelentísimo Tribunal, expresó lo siguiente en su considerando 4º: *“Que, en lo referente a la atenuante del numeral 6º del artículo 11 del Código Penal, planteada en favor de todos los sentenciados, la misma ha de reconocérseles por carecer de anotaciones prontuariales pretéritas al hecho delictivo.*

Empero, en lo que respecta a los sentenciados Lobos y Castro, dicha minorante ha de serles reconocida de una mayor preeminencia, es decir, ella tiene la calidad de muy calificada pues, a su respecto, no solo les favorece la corta edad que ellos tenían al momento de ejecutar el ilícito - 19 años - sino que, además, en esos momentos se encontraban haciendo el servicio militar obligatorio, siendo solo



soldados conscriptos y, para el caso de ellos, se evidencia una escasa preparación castrense que ha de ser considerada y que, en el caso del sentenciado Castro, se acentúa ya que ni siquiera había completado sus estudios medios, antecedentes que repercuten en este plano y es por ello que se le considera dicha atenuante en carácter de muy calificada”.

En igual sentido se pronunció la misma Segunda Sala del máximo tribunal en la causa rol 22.276-2022, mediante sentencia de reemplazo de fecha 5 de enero de 2024, en cuyo considerando 4º sostuvo: *“Que, respecto de los sentenciados Leonardo Antonio Riquelme Alarcón, Walter Ronny Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco y Pedro Patricio Franco Rivas, al momento de la comisión de los hechos se trataba de conscriptos que habían terminado recientemente su servicio militar obligatorio, de manera que, no tenían un mayor conocimiento de la actividad militar, las posibilidades de oponerse a órdenes indebidas, sumado a que a la fecha de los hechos la edad de los condenados rondaba los 20 años de edad, siendo que la mayoría de edad civil se alcanzaba a los 21 años de edad”.*

Pues bien, y según se expresó, siguiendo la referida línea jurisprudencial, esta Ilustrísima Corte calificará la irreprochable conducta anterior de quienes se encontraban haciendo el servicio militar. En particular, a los condenados Gabriel Dittus, Manuel Campos, Héctor Villablanca, José Reyes, Sergio Vallejos, Libardo Schwartenski y Juan Concha.

OCTOGÉSIMO SEGUNDO: Análisis de la atenuante del artículo 11, número 8. El condenado Gabriel Dittus solicitó el reconocimiento de la atenuante de responsabilidad del artículo 11, número 8, del Código Penal. Este precepto dispone literalmente: *“Son circunstancias atenuantes: Si pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de la fuga u ocultándose, se ha denunciado y confesado el delito”.*

Como se puede apreciar, dos son las exigencias que deben cumplirse para configurar esta minorante de responsabilidad. Primero,



que el inculpado se encuentre en situación fáctica de eludir la acción de la justicia, mediante la fuga u ocultándose. Y segundo, que el inculpado se haya denunciado y confesado el delito.

La sola revisión de las declaraciones prestadas por Gabriel Dittus permiten confirmar que no se cumplen los requisitos de esta atenuante. En sus declaraciones el acusado nunca se denunció ni confesó el delito. Por el contrario, señaló que no supo de la existencia de detenidos en el Regimiento Tucapel. Tampoco escuchó nada la noche en que se produjo el supuesto asalto al polvorín del mismo Regimiento.

Tales antecedentes son por sí solos suficientes para rechazar la pertinencia de la circunstancia modificatoria del artículo 11, número 8, del Código Penal respecto de Gabriel Dittus.

OCTOGÉSIMO TERCERO: Análisis de la atenuante del artículo 11, número 9. Han solicitado el reconocimiento de la atenuante de responsabilidad del artículo 11, número 9, del Código Penal los siguientes acusados: Gabriel Dittus, Juan Labraña, Omar Burgos, Orlando Moreno, Raúl Schonherr y Sergio Vallejos.

La citada minorante se expresa del siguiente modo en el Código punitivo: *“Son circunstancias atenuantes: Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos”*. De este modo, se exige una colaboración, un auxilio, una ayuda a la labor judicial. Pero no basta cualquier forma de colaboración. Debe ser sustancial, es decir, relevante o significativa para el esclarecimiento de los hechos. Estos hechos, por su parte, pueden referirse al ilícito mismo o a la participación en su comisión.

En ese entendido, corresponde analizar si los acusados que invocan esta atenuante prestaron un auxilio significativo para aclarar qué ocurrió y quiénes participaron.

a) En el caso de Gabriel Dittus, debe rechazarse la procedencia de esta atenuante de responsabilidad. Para así decidirlo se tiene presente lo expresado en el considerando precedente, respecto de la orientación de sus declaraciones en el proceso. Su testificación de



ignorancia acerca de los hechos impide considerar que colaboró en forma alguna al esclarecimiento de los mismos.

b) Respecto de Juan Labraña, la conclusión debe ser similar. En sus declaraciones sostuvo que solo se enteró del supuesto asalto al polvorín por dichos de sus compañeros. Añadió que esto se debió a que a fines de septiembre de 1973 habría sido enviado a cumplir funciones en un sector cordillerano. De este modo, por parte de este acusado no existe colaboración alguna al esclarecimiento de los hechos.

c) En lo relativo a Omar Burgos, la atenuante reclamada tampoco podrá ser acogida. El acusado afirmó que era un comentario generalizado que el asalto al polvorín fue un montaje. Añadió que las personas que participaron en ese hecho estaban detenidas en el Regimiento Tucapel. Reconoció que le correspondió detener a dos de esas personas, las que menciona. Concluyó que sería imposible que los detenidos burlaran la seguridad que había en el recinto militar. Negó participación en los hechos, afirmando que nunca tuvo contacto con aquellos, ni sabe si se practicaron interrogatorios a los mismos. Tales testificaciones no son, a juicio de esta Ilustrísima Corte, suficientes para configurar la minorante del artículo 11, número 9, del Código Penal. Esto se debe a que en ellas no se encuentra información relevante para esclarecer los ilícitos ni la participación, que es lo exigido por la disposición penal.

d) Respecto de Orlando Moreno, igualmente se debe desestimar la procedencia de la atenuante en cuestión. En sus declaraciones admitió que se llevaban personas detenidas al Regimiento Tucapel. No obstante, aseveró que carecía de información sobre los interrogatorios y respecto de las circunstancias en que estos se realizaban. Adicionó que nunca tuvo conocimiento que se diera muerte a algún detenido por cuanto no participó en esos hechos, ni le consta que aquello haya ocurrido. En fin, señaló que nunca escuchó que alguien hubiere sido torturado en el Regimiento.



e) En cuanto a Raúl Schonherr, idéntica debe ser la conclusión. Respecto del supuesto asalto al polvorín, declaró que se enteró de tales hechos a la mañana siguiente. Sostuvo, además, que no vio los cuerpos de las víctimas, ni inspeccionó el lugar del supuesto enfrentamiento. Por último, en careo con una de las víctimas, alegó que no la conocía y que nunca le había vendado los ojos.

f) En el caso de Sergio Vallejos, la conclusión debe ser diversa de las anteriores.

Este acusado reconoció que le correspondió vigilar a los detenidos e identificó a dos de las víctimas del supuesto asalto al polvorín. Afirmó que la información de prensa, relativa a que se había intentado hacer estallar el polvorín, era falsa. Detalló que los supuestos terroristas eran personas que se encontraban detenidas en el Regimiento la noche del 10 de noviembre de 1973. Reiteró que a él le correspondió custodiarlas.

En dicho contexto, señala los nombres de los oficiales que retiraron a esos detenidos (Vásquez y Espinoza) y los nombres de los integrantes de la patrulla Chacal. Además, precisó que esos oficiales ordenaron subir a los detenidos a un camión que se había estacionado frente al gimnasio en que se encontraban estos últimos. Se le ordenó retirarse a su cuadra, en el mismo Regimiento, desde dónde escuchó los disparos y el estallido de las granadas una hora y media más tarde. Afirmó que en ese simulacro de ataque fueron eliminados los prisioneros que custodiaba. Negó haber participado de esas ejecuciones.

Por último, declaró que el teniente Espinoza le había señalado que los prisioneros serían ejecutados. Además, el mismo oficial le habría compartido lo que le dijo uno de los ejecutados cuando se le consultó por su último deseo.

Todos estos antecedentes aportados por Sergio Vallejos permiten estimar que ha colaborado con el esclarecimiento de los hechos, y que dicha cooperación ha sido sustancial. El hecho de negar su participación en los homicidios no se relaciona con la alegada



atenuante del número 9, que en este acto se reconoce. Más bien se vincula con la del número 8 del artículo 11 del Código Penal, la que por cierto no ha sido invocada. De este modo, corresponde reconocerle la atenuante solicitada.

g) En cuanto a Juan Concha, no resulta posible otorgarle la minorante del artículo 11, número 9. En sus declaraciones respecto del supuesto asalto al polvorín, señala que estuvo de guardia la noche del 10 de noviembre de 1973. Sin embargo, no pudo ver nada. Por cierto, niega participación en los hechos. Tampoco apreció si se produjo movimiento de vehículos. En cuanto al ilícito de apremios ilegítimos, no entrega información. Sabe que llegaban detenidos al regimiento, pero ignora antecedentes sobre estas personas.

OCTOGÉSIMO CUARTO: Conclusión respecto de la atenuante del artículo 11, número 9. A partir de lo expuesto, resulta inconcuso que no es procedente reconocer la atenuante del artículo 11, número 9, respecto de los acusados que la han solicitado. Se exceptúa de esta conclusión únicamente Sergio Vallejos, de conformidad con lo expuesto en el considerando precedente.

OCTOGÉSIMO QUINTO: Análisis de la aplicación de la agravante del artículo 12, número 8, del Código Penal. Según ya se expresó, han solicitado la no aplicación del artículo 12, número 8, los siguientes condenados por la sentencia de primera instancia: Manuel Campos, Héctor Villablanca, Juan Labraña, Hernán Quiroz, Daniel San Juan, Oscar Podlech y Arnoldo Aedo.

Al respecto se debe recordar que dicho precepto dispone lo siguiente: “*Son circunstancias agravantes: prevalerse del carácter público que tenga el culpable*”.

Igualmente se debe recordar el artículo 63 del mismo Código, que prescribe:

“No producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí mismas constituyen un delito especialmente penado por la ley, o que ésta haya expresado al describirlo y penarlo.



Tampoco lo producen aquellas circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no puede cometerse”.

OCTOGÉSIMO SEXTO: Interpretación de la Corte Suprema respecto de la agravante del artículo 12, número 8. La Excelentísima Corte Suprema ha sostenido que la agravante del artículo 12, número 8, del Código Penal no resulta aplicable a delitos de *lesa humanidad*, cuando el condenado es un agente del Estado.

En dicho sentido se pronunció en las sentencias recaídas en las causas rol N° 28.214-2019, de fecha 14 de marzo de 2023, y rol 84.187-2021, de fecha 10 de octubre de 2023. En ambas decisiones fundó tal interpretación en dos líneas de argumentación.

En primer lugar, y con respaldo en la doctrina y en sus propios precedentes, sostuvo que el condenado debe prevalecerse de su calidad de funcionario público. En otras palabras, debe servirse de dicha calidad para sus propios fines. Al respecto sostuvo, en el considerando noveno de la primera sentencia mencionada, que la agravante en cuestión se configura si el agente del Estado “*ha puesto la función pública al servicio de sus propios y particulares fines (entre otras, en SCS 4.240-2014, de 30 de septiembre de 2014)*”. En idéntico sentido, en el considerando noveno de la segunda de aquellas sentencias, precisó que “*la finalidad es un beneficio para el funcionario o un tercero*”.

En segundo lugar, sostuvo que los delitos de *lesa humanidad* suponen, precisamente, que el hecho ha sido cometido por un agente del Estado. Al respecto, en el considerando décimo de la primera decisión declaró que las calidades de agentes del Estado de los hechores “*ya han sido tenidos en cuenta para calificar el injusto como homicidio calificado (...) y como delito de lesa humanidad*”. En el considerando undécimo de la segunda de las decisiones mencionadas, por su parte, afirmó que “*al tratarse en la especie de un ilícito de lesa humanidad, en el que el abuso de la calidad de agente estatal constituye un elemento integrante del tipo penal, no resulta posible tener por*



concurrente dicha circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal, por expresa disposición del artículo 63, inciso 2º, del Código Penal, precepto que expresamente dispone que no producen el efecto de aumentar la pena, las circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no puede cometerse, cuyo es el caso de autos”.

OCTOGÉSIMO SÉPTIMO: El carácter de agente del Estado como elemento de los delitos de *lesa humanidad*. Como se sabe, los delitos de homicidio calificado y de apremios ilegítimos investigados en la presente causa constituyen delitos de *lesa humanidad*. En tal carácter fueron sancionados en la sentencia de primera instancia.

Por otra parte, y como acertadamente señala la Excelentísima Corte, el carácter de agente del Estado es un elemento inherente a dicha clase de delitos. De este modo, a la agravante del artículo 12, número 8, le resulta plenamente aplicable el artículo 63, inciso segundo, del Código Penal.

La ineludible conclusión de ambas premisas es que la agravante en cuestión no puede ser aplicada respecto de los acusados en la presente causa, todos agentes del Estado a la época de comisión de los ilícitos. De este modo, resulta improcedente aplicar el artículo 10, número 12, en la presente causa. No solo a quienes solicitaron su exclusión, sino a todos aquellos a quienes participaron de estos delitos de *lesa humanidad*.

7. Delitos, grado de participación y circunstancias modificatorias de los acusados.

OCTOGÉSIMO OCTAVO: Precisión de delitos, grado de participación y circunstancias modificatorias. En esta causa recurrieron pidiendo corrección de la pena impuesta los siguientes acusados: Orlando Moreno y Raúl Schonherr. Por otra parte, en la



presente decisión se han acogido ciertas pretensiones de algunos de los condenados por la sentencia de primera instancia. Además, se ha modificado el grado de participación en los homicidios calificados por parte de quienes realizaban el servicio militar. Por último, hay circunstancias modificatorias que han sido reformadas por esta sentencia, respecto de lo decidido en primera instancia.

En virtud de lo recién expresado, a continuación se procederá a precisar los delitos en que han intervenido, grado de participación y circunstancias modificatorias de cada uno de los acusados. Todo ello de conformidad con lo que se ha expuesto precedentemente.

OCTOGÉSIMO NOVENO: Responsabilidad penal de Oscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud. Para determinar la responsabilidad penal de Oscar Alfonso Podlech Michaud, se deben recordar los delitos atribuidos, el grado de participación que tuvo en los mismos y las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que le son aplicables. Todo ello de conformidad con lo expresado en la presente sentencia y, en lo no modificado, en la sentencia de primera instancia.

Este acusado ha sido considerado:

a) Autor de homicidios calificados en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*; y

b) Autor de apremios ilegítimos respecto de las mismas víctimas recién mencionadas, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*.

Respecto de las atenuantes, le beneficia la del artículo 11, número 6, del Código Penal.

No le perjudica agravante alguna.



A partir de tales antecedentes, se debe determinar la pena aplicable respecto de los siete homicidios calificados y de los siete apremios ilegítimos.

(1) El homicidio calificado tiene una pena compuesta de dos grados para los autores: presidio mayor en su grado máximo y presidio perpetuo (artículo 391, número 1, del Código penal).

Sin embargo, le favorece una atenuante y no le perjudica ninguna agravante. De acuerdo con el artículo 68 del Código penal, no se puede aplicar la pena en su grado máximo. Eso significa, en el caso concreto, que solo le resulta aplicable la pena de presidio mayor en su grado máximo.

En el presente caso se trata de siete homicidios, por lo que resultan aplicables tanto el artículo 74 del Código Penal como el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. Si se aplica el artículo 74, la pena a imponer oscilaría entre 105 años y siete días, y 140 años. Si se aplica el artículo 509, tratándose de delitos de la misma especie y en especial delitos de lesa humanidad, la pena debe aumentarse al menos en dos grados, quedando la pena para todos los efectos en presidio perpetuo.

En la práctica, al condenado le resulta indiferente la aplicación de una u otra disposición. Por lo mismo se aplicará la pena única de presidio perpetuo, más las accesorias legales.

(2) A la época de la comisión de los ilícitos, el delito de apremios ilegítimos tenía establecida la pena de presidio menor en su grado mínimo para los autores (artículo 150, número 1, del Código Penal).

Le favorece una atenuante y no le perjudica ninguna agravante. De acuerdo con el artículo 67 del Código penal, corresponde aplicar la pena en su *mínimum*. El *mínimum* del presidio menor en su grado mínimo corre de 61 días a 270 días.

En el presente caso se trata de siete apremios ilegítimos, por lo que resultan aplicables tanto el artículo 74 del Código Penal como el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. Si se aplica el artículo



74, la pena a imponer oscilaría entre 427 días y 1890 días de privación de libertad. Si se aplica el artículo 509, tratándose de delitos de la misma especie y en especial delitos de lesa humanidad, la pena debe aumentarse al menos en dos grados, quedando la pena para todos los efectos en presidio menor en su grado máximo, pero dentro del *mínimum*, es decir, de tres años y un día a cuatro años.

Para determinar cuál es la pena más favorable, corresponde atender al artículo 69 del Código Penal. De conformidad con la parte final de aquella disposición, al efecto se debe considerar la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. En el caso concreto, la extensión del mal causado es máxima, por tratarse de delitos de *lesa humanidad*. En consecuencia, se deberá fijar la mayor pena posible dentro de las opciones disponibles.

Bajo tales parámetros, la aplicación del artículo 74 del Código penal conduciría a la imposición de siete penas de 270 días de presidio menor en su grado mínimo, cada una, totalizando 1890 días. La aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, por su parte, conduciría a la imposición de una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, lo que equivale a 1461 días.

Por lo expresado, a este condenado le resulta más favorable la aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. De este modo, corresponde imponerle la pena única de cuatro años de presidio menor en su grado máximo.

NONAGÉSIMO: Responsabilidad penal de Manuel Abraham Vásquez Chahuán. Para determinar la responsabilidad penal de Manuel Abraham Vásquez Chahuán, se deben recordar los delitos atribuidos, el grado de participación que tuvo en los mismos y las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que le son aplicables. Todo ello de conformidad con lo expresado en la presente sentencia y, en lo no modificado, en la sentencia de primera instancia.

Este acusado ha sido considerado autor de los delitos de homicidios calificados en las personas de Florentino Alberto Molina



Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la Comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*.

Respecto de las atenuantes, le beneficia la del artículo 11, número 6, del Código Penal.

No le perjudica agravante alguna.

El homicidio calificado tiene una pena compuesta de dos grados para los autores: presidio mayor en su grado máximo y presidio perpetuo.

Sin embargo, le favorece una atenuante y no le perjudica ninguna agravante. De acuerdo con el artículo 68 del Código penal, no se puede aplicar la pena en su grado máximo. Eso significa, en el caso concreto, que solo le resulta aplicable la pena de presidio mayor en su grado máximo.

En el presente caso se trata de siete homicidios, por lo que resultan aplicables tanto el artículo 74 del Código Penal como el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. Si se aplica el artículo 74, la pena a imponer oscilaría entre 105 años y siete días, y 140 años. Si se aplica el artículo 509, tratándose de delitos de la misma especie y en especial delitos de lesa humanidad, la pena debe aumentarse al menos en dos grados, quedando la pena para todos los efectos en presidio perpetuo.

En la práctica, al condenado le resulta indiferente la aplicación de una u otra disposición. Por lo mismo se aplicará la pena única de presidio perpetuo, más las accesorias legales.

NONAGÉSIMO PRIMERO: Responsabilidad penal de Orlando Moreno Vásquez y Raúl Binaldo Schonherr Frías. Para determinar la responsabilidad penal de Orlando Moreno Vásquez y Raúl Binaldo Schonherr Frías, se deben recordar los delitos atribuidos, el grado de participación que tuvieron en los mismos y las



circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que les son aplicables. Todo ello de conformidad con lo expresado en la presente sentencia y, en lo no modificado, en la sentencia de primera instancia.

Estos acusados han sido considerados:

a) Cómplices de homicidios calificados en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*; y

b) Autores de apremios ilegítimos respecto de las mismas víctimas recién mencionadas, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*.

Respecto de las atenuantes, les beneficia la del artículo 11, número 6, del Código Penal.

No les perjudica agravante alguna.

Por tratarse de cómplices, no se les comunican las calificantes del homicidio calificado y, por tanto, deben ser condenados como cómplices de homicidios simples.

A partir de tales antecedentes, se debe determinar la pena aplicable respecto de los siete homicidios calificados y de los siete apremios ilegítimos.

(1) El homicidio simple tiene una pena compuesta de dos grados para los autores: presidio mayor en su grado mínimo y presidio mayor en su grado medio (artículo 391, número 2, del Código penal). Por tratarse de cómplices, corresponde la inmediatamente inferior en un grado al mínimo designado por la ley (artículo 51 del Código Penal). En consecuencia, en principio, correspondería aplicar la pena de presidio menor en su grado máximo.

Además, les favorece una atenuante y no les perjudica ninguna agravante. De acuerdo con el artículo 67 del Código penal,



corresponde aplicar la pena en su *mínimum*. El *mínimum* del presidio menor en su grado máximo corre de tres años y un día a cuatro años.

En el presente caso se trata de siete homicidios simples, por lo que resultan aplicables tanto el artículo 74 del Código Penal como el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. Si se aplica el artículo 74, la pena a imponer oscilaría entre 21 años y siete días, y 28 años. Si se aplica el artículo 509, tratándose de delitos de la misma especie y en especial delitos de lesa humanidad, la pena debe aumentarse al menos en dos grados, quedando la pena para todos los efectos en presidio mayor en su grado medio.

A los condenados les resulta más favorable el artículo 509. Por tanto, corresponde imponerles la pena de presidio mayor en su grado medio, en su *mínimum*, más las accesorias legales.

(2) A la época de la comisión de los ilícitos, el delito de apremios ilegítimos tenía establecida la pena de presidio menor en su grado mínimo para los autores (artículo 150, número 1, del Código Penal).

Les favorece una atenuante y no les perjudica ninguna agravante. De acuerdo con el artículo 67 del Código penal, corresponde aplicar la pena en su *mínimum*. El *mínimum* del presidio menor en su grado mínimo corre de 61 días a 270 días.

En el presente caso se trata de siete apremios ilegítimos, por lo que resultan aplicables tanto el artículo 74 del Código Penal como el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. Si se aplica el artículo 74, la pena a imponer oscilaría entre 427 días y 1890 días de privación de libertad. Si se aplica el artículo 509, tratándose de delitos de la misma especie y en especial delitos de lesa humanidad, la pena debe aumentarse al menos en dos grados, quedando la pena para todos los efectos en presidio menor en su grado máximo, pero dentro del *mínimum*, es decir, de tres años y un día a cuatro años.

Para determinar cuál es la pena más favorable, corresponde atender al artículo 69 del Código Penal. De conformidad con la parte final de aquella disposición, al efecto se debe considerar la mayor o



menor extensión del mal producido por el delito. En el caso concreto, la extensión del mal causado es máxima, por tratarse de delitos de *lesa humanidad*. En consecuencia, se deberá fijar la mayor pena posible dentro de las opciones disponibles.

Bajo tales parámetros, la aplicación del artículo 74 del Código penal conduciría a la imposición de siete penas de 270 días de presidio menor en su grado mínimo, cada una, totalizando 1890 días. La aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, por su parte, conduciría a la imposición de una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, lo que equivale a 1461 días.

Por lo expresado, a estos condenados les resulta más favorable la aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. De este modo, corresponde imponerles la pena única de cuatro años de presidio menor en su grado máximo a cada uno.

NONAGÉSIMO SEGUNDO: Responsabilidad penal de Omar Burgos Dejea, Hernán Raúl Quiroz Barra y Daniel San Juan Clavería. Para determinar la responsabilidad penal de Omar Burgos Dejea, Hernán Raúl Quiroz Barra y Daniel San Juan Clavería, se deben recordar los delitos atribuidos, el grado de participación que tuvieron en los mismos y las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que les son aplicables. Todo ello de conformidad con lo expresado en la presente sentencia y, en lo no modificado, en la sentencia de primera instancia.

Estos acusados han sido considerados autores de apremios ilegítimos en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*.

Respecto de las atenuantes, les beneficia la del artículo 11, número 6, del Código Penal.



No les perjudica agravante alguna.

A partir de tales antecedentes, se debe determinar la pena aplicable respecto de los siete apremios ilegítimos.

A la época de la comisión de los ilícitos, el delito de apremios ilegítimos tenía establecida la pena de presidio menor en su grado mínimo para los autores (artículo 150, número 1, del Código Penal).

Les favorece una atenuante y no les perjudica ninguna agravante. Por ello, y de conformidad con el artículo 67 del Código Penal, se debe imponer la pena en su *mínimum*. El *mínimum* de la reclusión menor en su grado mínimo oscila entre 61 días y 270 días.

En el presente caso se trata de siete apremios ilegítimos, por lo que resultan aplicables tanto el artículo 74 del Código Penal como el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. Si se aplica el artículo 74, la pena a imponer oscilaría entre 427 días y 1890 días de privación de libertad. Si se aplica el artículo 509, tratándose de delitos de la misma especie y en especial delitos de lesa humanidad, la pena debe aumentarse al menos en dos grados, quedando la pena para todos los efectos en presidio menor en su grado máximo, pero dentro del *mínimum*, es decir, de tres años y un día a cuatro años.

Para determinar cuál es la pena más favorable, corresponde atender al artículo 69 del Código Penal. De conformidad con la parte final de aquella disposición, al efecto se debe considerar la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. En el caso concreto, la extensión del mal causado es máxima, por tratarse de delitos de *lesa humanidad*. En consecuencia, se deberá fijar la mayor pena posible dentro de las opciones disponibles.

Bajo tales parámetros, la aplicación del artículo 74 del Código penal conduciría a la imposición de siete penas de 270 días de presidio menor en su grado mínimo, cada una, totalizando 1890 días. La aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, por su parte, conduciría a la imposición de una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, lo que equivale a 1461 días.



Por lo expresado, a estos tres condenados les resulta más favorable la aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. De este modo, corresponde imponerles la pena única de cuatro años de presidio menor en su grado máximo a cada uno.

NONAGÉSIMO TERCERO: Responsabilidad penal de Libardo Hernán Schwartenski Rubio. Para determinar la responsabilidad penal de Libardo Schwartenski Rubio, se deben recordar los delitos atribuidos, el grado de participación que tuvo en los mismos y las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que le son aplicables. Todo ello de conformidad con lo expresado en la presente sentencia y, en lo no modificado, en la sentencia de primera instancia.

Este acusado ha sido considerado autor de los delitos de apremios ilegítimos en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*.

Respecto de las atenuantes, le beneficia la del artículo 11, número 6, del Código Penal, la que ha sido considerada como muy calificada.

No le perjudica agravante alguna.

A la época de la comisión de los ilícitos, el delito de apremios ilegítimos tenía establecida la pena de presidio menor en su grado mínimo (artículo 150, número 1, del Código Penal).

Además, le favorece una atenuante muy calificada. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 bis del Código penal, resulta procedente imponer la pena inferior en un grado al mínimo establecido para el delito. Esto significa, en concreto, que la pena a imponer es la de prisión en su grado máximo.



En el presente caso se trata de siete apremios ilegítimos, por lo que resultan aplicables tanto el artículo 74 del Código Penal como el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. Si se aplica el artículo 74, la pena a imponer oscilaría entre 287 días y 420 días de privación de libertad. Si se aplica el artículo 509, tratándose de delitos de la misma especie y en especial delitos de lesa humanidad, la pena debe aumentarse al menos en dos grados, quedando la pena para todos los efectos en presidio menor en su grado medio, es decir, de 541 días a tres años.

A este condenado le resulta más favorable la aplicación del artículo 74 del Código Penal. Por tanto, corresponde imponerle siete penas de 60 días de prisión en su grado máximo.

NONAGÉSIMO CUARTO: Responsabilidad penal de José Raúl Inzunza Reyes. Para determinar la responsabilidad penal de José Raúl Inzunza Reyes, se deben recordar los delitos atribuidos, el grado de participación que tuvo en los mismos y las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que le son aplicables. Todo ello de conformidad con lo expresado en la presente sentencia y, en lo no modificado, en la sentencia de primera instancia.

Este acusado ha sido considerado autor de apremios ilegítimos en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*.

Respecto de las atenuantes, le benefician las de los números 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal. Además, la primera de ellas ha sido catalogada como muy calificada.

No le perjudica agravante alguna.

A partir de tales antecedentes, se debe determinar la pena aplicable respecto de los siete apremios ilegítimos.



A la época de la comisión de los ilícitos, el delito de apremios ilegítimos tenía establecida la pena de presidio menor en su grado mínimo para los autores (artículo 150, número 1, del Código Penal).

Además, le favorecen dos atenuantes, una de ellas muy calificada, y no le perjudica ninguna agravante. De acuerdo con el artículo 68 del Código penal, el tribunal podrá imponer la pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo de los señalados por la ley. Considerando la entidad de las atenuantes, y singularmente su colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, se rebajará en dos grados, quedando la pena en prisión en su grado medio.

En el presente caso se trata de siete apremios ilegítimos, por lo que resultan aplicables tanto el artículo 74 del Código Penal como el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. Si se aplica el artículo 74, la pena a imponer oscilaría entre 147 días y 280 días de privación de libertad. Si se aplica el artículo 509, tratándose de delitos de la misma especie y en especial delitos de lesa humanidad, la pena debe aumentarse al menos en dos grados, quedando la pena para todos los efectos en presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 días a 540 días.

A este condenado le resulta más favorable la aplicación del artículo 74 del Código Penal. Por tanto, corresponde imponerle siete penas de 40 días de prisión en su grado medio.

NONAGÉSIMO QUINTO: Responsabilidad penal de Jaime Guillermo García Covarrubias, Pablo Domingo Gran López, Romilio Osvaldo Lavín Muñoz, Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, Raimundo Ignacio García Covarrubias, Norberto Francisco Uribe Moroni, Pedro Guillermo Tichauer Salcedo y Juan Bautista Labraña Luvecce. Para determinar la responsabilidad penal de Jaime Guillermo García Covarrubias, Pablo Domingo Gran López, Romilio Osvaldo Lavín Muñoz, Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, Raimundo Ignacio García Covarrubias, Norberto Francisco Uribe Moroni, Pedro Guillermo Tichauer Salcedo y Juan Bautista



Labraña Luvecce, se deben recordar los delitos atribuidos, el grado de participación que tuvieron en los mismos y las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que les son aplicables. Todo ello de conformidad con lo expresado en la presente sentencia y, en lo no modificado, en la sentencia de primera instancia.

Estos acusados han sido considerados:

a) Cómplices de homicidios calificados en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*; y

b) Cómplices de apremios ilegítimos respecto de las mismas víctimas recién mencionadas, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*.

Respecto de las atenuantes, les beneficia la del artículo 11, número 6, del Código Penal.

No les perjudica agravante alguna.

Por tratarse de cómplices, no se les comunican las calificantes del homicidio calificado y, por tanto, deben ser condenados como cómplices de homicidios simples.

A partir de tales antecedentes, se debe determinar la pena aplicable respecto de los siete homicidios calificados y de los siete apremios ilegítimos.

(1) El homicidio simple tiene una pena compuesta de dos grados para los autores: presidio mayor en su grado mínimo y presidio mayor en su grado medio (artículo 391, número 2, del Código penal). Por tratarse de cómplices, corresponde la inmediatamente inferior en un grado al mínimo designado por la ley (artículo 51 del Código Penal). En consecuencia, en principio, correspondería aplicar la pena de presidio menor en su grado máximo.



Además, les favorece una atenuante y no les perjudica ninguna agravante. De acuerdo con el artículo 67 del Código penal, corresponde aplicar la pena en su *mínimum*. El *mínimum* del presidio menor en su grado máximo corre de tres años y un día a cuatro años.

En el presente caso se trata de siete homicidios simples, por lo que resultan aplicables tanto el artículo 74 del Código Penal como el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. Si se aplica el artículo 74, la pena a imponer oscilaría entre 21 años y siete días, y 28 años. Si se aplica el artículo 509, tratándose de delitos de la misma especie y en especial delitos de lesa humanidad, la pena debe aumentarse al menos en dos grados, quedando la pena para todos los efectos en presidio mayor en su grado medio.

A los condenados les resulta más favorable el artículo 509. Por tanto, corresponde imponerles la pena de presidio mayor en su grado medio, en su *mínimum*, más las accesorias legales.

(2) A la época de la comisión de los ilícitos, el delito de apremios ilegítimos tenía establecida la pena de presidio menor en su grado mínimo (artículo 150, número 1, del Código Penal).

Por sus calidades de cómplices se les debe aplicar el artículo 51 del Código Penal. En conformidad con aquel, se debe imponer la pena inferior en un grado a la que señala la ley para el crimen o simple delito de que se trata. De este modo, la pena se rebaja a prisión en su grado máximo, esto es, de 41 a 60 días de privación de libertad.

Les favorece una atenuante y no les perjudica ninguna agravante. De acuerdo con el artículo 67 del Código penal, corresponde aplicar la pena en su *mínimum*. El *mínimum* de la prisión mayor corre de 41 días a 50 días.

En el presente caso se trata de siete apremios ilegítimos, por lo que resultan aplicables tanto el artículo 74 del Código Penal como el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. Si se aplica el artículo 74, la pena a imponer oscilaría entre 287 días y 350 días de privación de libertad. Si se aplica el artículo 509, tratándose de delitos de la



misma especie y en especial delitos de lesa humanidad, la pena debe aumentarse al menos en dos grados, quedando la pena para todos los efectos en presidio menor en su grado medio, pero dentro del *mínimum*, es decir, de 541 días a 818 días.

Para determinar cuál es la pena más favorable, corresponde atender al artículo 69 del Código Penal. De conformidad con la parte final de aquella disposición, al efecto se debe considerar la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. En el caso concreto, la extensión del mal causado es máxima, por tratarse de delitos de *lesa humanidad*. En consecuencia, se deberá fijar la mayor pena posible dentro de las opciones disponibles.

Bajo tales parámetros, la aplicación del artículo 74 del Código penal conduciría a la imposición de siete penas de 50 días de prisión en su grado máximo, cada una, totalizando 350 días. La aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, por su parte, conduciría a la imposición de una pena de 818 días de presidio menor en su grado medio.

Por lo expresado, a estos ocho condenados les resulta más favorable la aplicación del artículo 74 del Código Penal. De este modo, a cada uno de ellos corresponde imponerles siete penas de 50 días de prisión en su grado máximo, cada una.

NONAGÉSIMO SEXTO: Responsabilidad penal de Arnoldo Aedo Matus. Para determinar la responsabilidad penal de Arnoldo Aedo Matus, se deben recordar los delitos atribuidos, el grado de participación que tuvo en los mismos y las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que le son aplicables. Todo ello de conformidad con lo expresado en la presente sentencia y, en lo no modificado, en la sentencia de primera instancia.

Este acusado ha sido considerado cómplice de homicidios calificados en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro



Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*.

Respecto de las atenuantes, le benefician las de los números 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal.

No le perjudica agravante alguna.

Por tratarse de cómplices, no se les comunican las calificantes del homicidio calificado y, por tanto, deben ser condenados cómo cómplices de homicidios simples.

El homicidio simple tiene una pena compuesta de dos grados para los autores: presidio mayor en su grado mínimo y presidio mayor en su grado medio (artículo 391, número 2, del Código penal). Por tratarse de un cómplice, corresponde la inmediatamente inferior en un grado al mínimo designado por la ley (artículo 51 del Código Penal). En consecuencia, en principio, procedería aplicar la pena de presidio menor en su grado máximo.

Además, le favorecen dos atenuantes y no le perjudica ninguna agravante. De acuerdo con el artículo 68 del Código penal, el tribunal podrá imponer la pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo de los señalados por la ley. Considerando la entidad de las atenuantes, y singularmente su colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, se rebajará en dos grados, quedando la pena en presidio menor en su grado mínimo.

En el presente caso se trata de siete homicidios simples, por lo que resultan aplicables tanto el artículo 74 del Código Penal como el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. Si se aplica el artículo 74, la pena a imponer oscilaría entre 427 días y 3780 días. Si se aplica el artículo 509, tratándose de delitos de la misma especie y en especial delitos de lesa humanidad, la pena debe aumentarse al menos en dos grados, quedando la pena para todos los efectos en presidio menor en su grado máximo.



Para determinar cuál es la pena más favorable, corresponde atender al artículo 69 del Código Penal. De conformidad con la parte final de aquella disposición, al efecto se debe considerar la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. En el caso concreto, la extensión del mal causado es máxima, por tratarse de delitos de *lesa humanidad*. En consecuencia, se deberá fijar la mayor pena posible dentro de las opciones disponibles.

Bajo tales parámetros, la aplicación del artículo 74 del Código penal conduciría a la imposición de siete penas de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, cada una, totalizando 3780 días. La aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, por su parte, conduciría a la imposición de una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo.

A este condenado le resulta más favorable el artículo 509. Por tanto, corresponde imponerle la pena única de cinco años de presidio menor en su grado máximo.

NONAGÉSIMO SÉPTIMO: Responsabilidad penal de Gabriel Alfonso Dittus Marín, Manuel Rafael Campos Ceballos, Héctor Mauricio Villablanca Huenulao y Juan Carlos Concha Belmar. Para determinar la responsabilidad penal de Gabriel Alfonso Dittus Marín, Manuel Rafael Campos Ceballos, Héctor Mauricio Villablanca Huenulao y Juan Carlos Concha Belmar, se deben recordar los delitos atribuidos, el grado de participación que tuvieron en los mismos y las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que les son aplicables. Todo ello de conformidad con lo expresado en la presente sentencia y, en lo no modificado, en la sentencia de primera instancia.

Estos acusados han sido considerados encubridores de homicidios calificados en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la



comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*; y

Respecto de las atenuantes, les beneficia la del artículo 11, número 6, del Código Penal, la que ha sido considerada como muy calificada.

No les perjudica agravante alguna.

Por tratarse de encubridores, no se les comunican las calificantes del homicidio calificado y, por tanto, deben ser condenados cómo encubridores de homicidios simples.

A partir de tales antecedentes, se debe determinar la pena aplicable respecto de los siete homicidios calificados.

El homicidio simple tiene una pena compuesta de dos grados para los autores: presidio mayor en su grado mínimo y presidio mayor en su grado medio (artículo 391, número 2, del Código penal). Por tratarse de encubridores, corresponde la inferior en dos grados al mínimo designado por la ley (artículo 52 del Código Penal). En consecuencia, en principio, correspondería aplicar la pena de presidio menor en su grado medio.

Además, a todos ellos les favorece una atenuante muy calificada. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 bis del Código penal, resulta procedente imponer la pena inferior en un grado al mínimo establecido para el delito. Esto significa, en concreto, que la pena a imponer es la de presidio menor en su grado mínimo.

En el presente caso se trata de siete homicidios simples, por lo que resultan aplicables tanto el artículo 74 del Código Penal como el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. Si se aplica el artículo 74, la pena a imponer oscilaría entre 427 días, y 3780 días. Si se aplica el artículo 509, tratándose de delitos de la misma especie y en especial delitos de lesa humanidad, la pena debe aumentarse al menos en dos grados, quedando la pena para todos los efectos en presidio menor en su grado máximo.



Para determinar cuál es la pena más favorable, corresponde atender al artículo 69 del Código Penal. De conformidad con la parte final de aquella disposición, al efecto se debe considerar la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. En el caso concreto, la extensión del mal causado es máxima, por tratarse de delitos de *lesa humanidad*. En consecuencia, se deberá fijar la mayor pena posible dentro de las opciones disponibles.

Bajo tales parámetros, la aplicación del artículo 74 del Código penal conduciría a la imposición de siete penas de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, cada una, totalizando 3780 días. La aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, por su parte, conduciría a la imposición de una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo.

A estos cuatro condenados les resulta más favorable el artículo 509. Por tanto, corresponde imponerles la pena única de cinco años de presidio menor en su grado máximo a cada uno de ellos.

NONAGÉSIMO OCTAVO: Responsabilidad penal de Sergio Orlando Vallejos Garcés. Para determinar la responsabilidad penal de Sergio Orlando Vallejos Garcés, se deben recordar los delitos atribuidos, el grado de participación que tuvo en los mismos y las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que le son aplicables. Todo ello de conformidad con lo expresado en la presente sentencia y, en lo no modificado, en la sentencia de primera instancia.

Este acusado ha sido considerado:

Encubridor de homicidios calificados en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*; y



Respecto de las atenuantes, le benefician las de los números 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal. Además, la primera de ellas ha sido catalogada como muy calificada.

No le perjudica agravante alguna.

Por tratarse de encubridores, no se le comunican las calificantes del homicidio calificado y, por tanto, debe ser condenados cómo encubridores de homicidios simples.

A partir de tales antecedentes, se debe determinar la pena aplicable respecto de los siete homicidios calificados y de los siete apremios ilegítimos.

El homicidio simple tiene una pena compuesta de dos grados: presidio mayor en su grado mínimo y presidio mayor en su grado medio (artículo 391, número 2, del Código penal). Por tratarse de un encubridor, corresponde la inferior en dos grados al mínimo designado por la ley (artículo 52 del Código Penal). En consecuencia, en principio, correspondería aplicar la pena de presidio menor en su grado medio.

Además, le favorecen dos atenuantes, una de ellas muy calificada, y no le perjudica ninguna agravante. De acuerdo con el artículo 68 del Código penal, el tribunal podrá imponer la pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo de los señalados por la ley. Considerando la entidad de las atenuantes, y singularmente su colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, se rebajará en dos grados, quedando la pena en prisión mayor.

En el presente caso se trata de siete homicidios calificados, por lo que resultan aplicables tanto el artículo 74 del Código Penal como el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal. Si se aplica el artículo 74, la pena a imponer oscilaría entre 287 días y 420 días. Si se aplica el artículo 509, tratándose de delitos de la misma especie y en especial delitos de lesa humanidad, la pena debe aumentarse al menos en dos grados, quedando la pena para todos los efectos en presidio menor en su grado medio.



Por lo expresado, a este condenado le resulta más favorable la aplicación del artículo 74 del Código Penal. De este modo, corresponde imponerle siete penas de 60 días de prisión mayor.

8. Imposición de penas sustitutivas y pago de costas.

NONAGÉSIMO NOVENO: Imposición de penas sustitutivas. Algunos recurrentes han solicitado la aplicación de las penas sustitutivas reguladas en la Ley N° 18.216. Antes de pronunciarse respecto de tal petición, deberá analizarse si resulta jurídicamente admisible conceder estas penas sustitutivas en el caso de condenados por delitos de *lesa humanidad*.

CENTÉSIMO: Análisis de la admisibilidad de penas sustitutivas en caso de delitos de *lesa humanidad*. Para resolver la petición a que se refiere el considerando precedente, es necesario determinar la admisibilidad de las penas sustitutivas respecto de condenados por delitos de *lesa humanidad*.

Al respecto es conveniente destacar que el otorgamiento de penas sustitutivas no se encuentra prohibido por el derecho nacional ni por el derecho internacional, cuando se trata de delitos de *lesa humanidad*.

Es efectivo que las vulneraciones a los derechos humanos constituyen ilícitos de la mayor gravedad. De ahí que existan ciertas restricciones a su respecto, como la expresa prohibición de aplicar la prescripción a favor de quienes los hayan vulnerado. Del mismo modo, y de acuerdo con la jurisprudencia nacional, es igualmente imprescriptible la acción civil destinada a perseguir la reparación del daño patrimonial derivado de los mismos ilícitos. Sin embargo, la aplicación de las penas sustitutivas no se encuentra vedada, cuando sea jurídicamente procedente su aplicación.

Sin perjuicio de esa referencia general, se deben analizar las jurisprudencias de la Corte Interamericana y de la Corte Suprema de Chile.



CENTÉSIMO PRIMERO: Pena sustitutiva en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En primer lugar, es necesario revisar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la procedencia de pena sustitutiva. Tal exigencia deriva del control de convencionalidad, al que se aludió más arriba en esta misma sentencia.

Al respecto parece posible asentar que no existe pronunciamiento alguno sobre la materia por parte del citado órgano jurisdiccional. Las restricciones en materia de delitos de *lesa humanidad* se relacionan con la prescripción, la amnistía y cualquier otra forma de exclusión de la responsabilidad penal que impidan la investigación y sanción de los responsables.

Así se manifestó, por ejemplo, en el caso Barrios Altos versus Perú, mediante sentencia de 14 de marzo de 2001, párrafo 41. En este párrafo estableció la improcedencia de la amnistía. Además, sostuvo que el Estado debe investigar los delitos, sancionar con las penas correspondientes y garantizar el acceso a un mecanismo judicial efectivo.

Dicha doctrina fue reiterada por la Corte Interamericana en el caso Almonacid Arellano versus Chile, mediante sentencia de 26 de septiembre de 2006. En el párrafo 111 recordó que los delitos de *lesa humanidad* no pueden quedar impunes. Reiteró, además, la obligación de los Estados de llevar adelante la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables.

Las penas sustitutivas no se contraponen a la doctrina interamericana recién expuesta. En efecto, son la consecuencia de la investigación, persecución y enjuiciamiento de los responsables. Y constituyen una forma de sanción procedente cuando se cumplen las exigencias establecidas por la legislación.

CENTÉSIMO SEGUNDO: Pena sustitutiva en la jurisprudencia de la Corte Suprema. La Corte Suprema de Chile, por su parte, ha admitido la aplicación de penas sustitutivas respecto de



quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad. Así lo ha decidido, por ejemplo, en la sentencia recaída en la causa rol 22.276-2022, de fecha 5 de enero de 2024, en la que resolvió precisamente en ese sentido. En efecto, en la sentencia de reemplazo dictada en dicha causa decidió textualmente lo siguiente:

“II.- Se confirma la sentencia en cuanto condenó a Leonardo Antonio Riquelme Alarcón, Walter Ronny Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco y Pedro Patricio Franco Rivas como cómplices del homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri y del homicidio calificado en grado de frustrado de Carmen Gloria Quintana ocurrido el 2 de julio de 1986 en la ciudad de Santiago, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa;

Por reunirse los requisitos del artículo 15 bis de la Ley 18.216, se concede la pena alternativa de la libertad vigilada intensiva, estableciéndose para ellos como plazo de tratamiento y observación ante la autoridad administrativa correspondiente el plazo de sus respectivas condenas y debiendo cumplir además, las otras exigencias a que se refiere el artículo 17 de la misma ley”.

De acuerdo con los mencionados antecedentes, resulta admisible el otorgamiento de penas sustitutivas respecto de aquellos imputados que cumplan los requisitos establecidos por la ley para dicho efecto.

CENTÉSIMO TERCERO: Condenados respecto de los cuales se debe evaluar la procedencia de pena sustitutiva. Han solicitado expresamente que se conceda pena sustitutiva los siguientes acusados: José Inzunza, Sergio Vallejos y Libardo Schwartenski.

Además, y aunque no lo solicitaron, deberá analizarse también la procedencia de pena sustitutiva respecto de otros condenados. En particular, respecto de quienes pueden encontrarse en alguno de los supuestos de hecho de las disposiciones que las regulan. A una tal



decisión conduce lo dispuesto en el artículo 527, inciso primero, del Código de Procedimiento Penal. Este precepto autoriza al tribunal de alzada para pronunciarse sobre dicha materia al disponer: *“El tribunal de alzada tomará en consideración y resolverá las cuestiones de hecho y las de derecho que sean pertinentes y se hallen comprendidas en la causa, aunque no haya recaído discusión sobre ellas ni las comprenda la sentencia de primera instancia”*.

CENTÉSIMO CUARTO: Otorgamiento de pena sustitutiva. De acuerdo con las penas asignadas a los delitos por los que han sido acusados, el grado de participación que se les ha atribuido, las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurren en sus casos, y la regulación establecida por la Ley N° 18.216, es posible otorgar las penas sustitutivas que en cada caso se señalan a los siguientes condenados:

a) A Omar Burgos Dejea: se le concede la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 15 bis de la Ley N° 18.216. El condenado deberá permanecer sujeto a esta pena sustitutiva por el plazo de cuatro años. Además, deberá fijar domicilio y quedará sujeto al control administrativo y a la sujeción y vigilancia de un delegado por el plazo mencionado, todo ello en los términos establecidos en el artículo 17 de la misma Ley.

b) A Arnoldo Aedo Matus, a Héctor Mauricio Villablanca Huenulao y a Juan Carlos Concha Belmar: se les concede la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 15 bis de la Ley N° 18.216. Los condenados deberán permanecer sujetos a esta pena sustitutiva por el plazo de cinco años. Además, deberán fijar domicilios y quedarán sujetos al control administrativo y a la sujeción y vigilancia de un delegado por el plazo mencionado, todo ello en los términos establecidos en el artículo 17 de la misma Ley.

c) A Libardo Hernán Schwartenski Rubio y a José Raúl Inzunza Reyes: se les concede la pena sustitutiva de remisión condicional de la



pena, por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 4° de la Ley N° 18.216. Los condenados deberán permanecer sujetos a esta pena sustitutiva por el plazo de un año. Además, deberán fijar domicilio y quedarán sujetos al control administrativo y a la asistencia de Gendarmería de Chile en los términos establecidos en el artículo 5° de la misma Ley.

d) A Sergio Orlando Vallejos Garcés: se le concede la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena, por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 4° de la Ley N° 18.216. El condenado deberá permanecer sujetos a esta pena sustitutiva por el plazo de 420 días. Además, deberá fijar domicilio y quedará sujeto al control administrativo y a la asistencia de Gendarmería de Chile en los términos establecidos en el artículo 5° de la misma Ley.

Los demás condenados no cumplen los requisitos para el otorgamiento de alguna pena sustitutiva de las establecidas en la Ley N° 18.216. En el caso de Daniel San Juan Clavería, por contar con un informe desfavorable del Centro de Reinserción Social, según consta a fojas 10.096 del tomo XVII. En el caso de Hernán Quiroz Barra, por contar con un informe igualmente desfavorable del mismo Centro, según consta a fojas 11.216 y siguientes, del tomo XXX. En el caso de Gabriel Dittus Marín y de Manuel Campos Ceballos, porque no cuentan con informe favorable del referido Centro. En el caso de los demás condenados, porque sus penas exceden las establecidas por la Ley N° 18.216 para el otorgamiento de pena sustitutiva.

CENTÉSIMO QUINTO: Aplicación de la Convención Interamericana de las Personas Mayores. Recurrió pidiendo la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores el acusado Omar Burgos.

Esta Convención no establece ninguna medida específica en el cumplimiento de las penas ni penas sustitutivas respecto de las personas mayores. Se limita a prohibir la aplicación de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículos 4° y 10).



De esta manera, no resulta posible modificar en sentido alguno lo decidido en esta sentencia en virtud de la aplicación del referido instrumento internacional.

CENTÉSIMO SEXTO: Condena en costas. Algunos de los representantes de los acusados han solicitado que se les exima del pago de las costas. Para resolver esta pretensión resulta conveniente recordar lo dispuesto en el artículo 504, incisos primero y segundo, del Código de Procedimiento Penal, que prescribe:

“Toda sentencia condenatoria expresará la obligación del condenado de pagar las costas de la causa.

Estas comprenden tanto las procesales como las personales y además los gastos ocasionados por el juicio y que no se incluyen en las costas”.

En ese entendido, debe existir una razón normativa que justifique exceptuar la aplicación de la disposición transcrita. Una razón normativa se puede encontrar en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, que establece lo siguiente: *“La parte que sea vencida totalmente en un juicio o en un incidente, será condenada al pago de las costas. Podrá con todo el tribunal eximirla de ellas, cuando aparezca que ha tenido motivos plausibles para litigar, sobre lo cual hará declaración expresa en la resolución”.* Como se sabe, este artículo está ubicado en el Libro I del citado Código, cuyo epígrafe es “Disposiciones comunes a todo procedimiento”.

El artículo 144 recién mencionado es aplicable al presente caso por expresa disposición del artículo 43 del Código de Procedimiento Penal, que dispone: *“Son aplicables al procedimiento penal, en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Código o en leyes especiales, las disposiciones comunes a todo procedimiento, contenidas en el Libro I del Código de Procedimiento Civil”.*

Pues bien, y de acuerdo con lo expuesto en los considerandos precedentes de esta sentencia, todos los acusados y ahora recurrentes



han sido condenados. Por lo demás, en opinión de esta Ilustrísima Corte, no han tenido motivo plausible para litigar.

Se exceptúan de esta declaración únicamente Juan Bautista Labraña Luvecce y Arnoldo Aedo Matus, por encontrarse judicialmente representados por la Corporación de Asistencia Judicial. Esto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales.

CENTÉSIMO SÉPTIMO: Informe del Fiscal Judicial. En su informe el Sr. Fiscal Judicial (S) de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, don Germán Varas Cicarelli, ha propuesto confirmar en todas sus partes la sentencia recurrida, dictada por el Sr. Ministro en Visita don Álvaro Mesa Latorre. Funda este parecer en los antecedentes que obran en la causa y que han servido de fundamento a la referida decisión.

Al respecto la Corte declara que coincide con el análisis efectuado por el Sr. Fiscal Judicial, con las solas excepciones que se han expresado a lo largo de la presente sentencia. Todo ello por las motivaciones expuestas precedentemente a lo largo de la misma.

IV. CONSULTA RESPECTO DE SOBRESEIMIENTO.

CENTÉSIMO OCTAVO. Situaciones elevadas en consulta. El Sr. Ministro en Visita elevó en consulta el sobreseimiento definitivo parcial de los siguientes inculpados: Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez, Aquiles Alfonso Poblete Muller, Juan Humberto Carrillo Rebolledo, Benjamín Farías Lavín, Mario Hernán Arias Díaz y Anacleto Aguirre Rivera

CENTÉSIMO NOVENO: Fundamentación de las propuestas de sobreseimiento. Las consultas referidas en el considerando precedente se han formulado en las fojas y con la fundamentación que a continuación se detallan:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LETUXZMWJWX

a) A fojas 6063 (Tomo XVII) el tribunal a quo dictó el sobreseimiento definitivo y parcial de Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez teniendo en consideración el certificado de defunción emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación que da cuenta del fallecimiento de este inculpaado. Dicho fallecimiento consta en el respectivo certificado que rola a foja 6060, tomo XVII.

b) A fojas 6064 (Tomo XVII) el tribunal a quo dictó el sobreseimiento definitivo y parcial de Aquiles Alfonso Poblete Muller teniendo en consideración el certificado de defunción emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación que da cuenta del fallecimiento de este inculpaado. Dicho fallecimiento consta en el respectivo certificado que rola a foja 6061, tomo XVII.

c) A fojas 6065 (Tomo XVII) el tribunal a quo dictó el sobreseimiento definitivo y parcial de Juan Humberto Carrillo Rebolledo teniendo en consideración el certificado de defunción emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación que da cuenta del fallecimiento de este inculpaado. Dicho fallecimiento consta en el respectivo certificado que rola a fojas 6062, tomo XVII.

d) A fojas 6080 (Tomo XVII) el tribunal a quo dictó el sobreseimiento definitivo y parcial de Benjamín Farías Lavín fundado en que estaba en la Escuela de Infantería, en Santiago, y solo fue destinado al regimiento Tucapel en 12 de febrero de 1974. Estas destinaciones constan en certificados de fojas 5883 y 5885, tomo XVII.

e) A fojas 7.941 (Tomo XXII) el tribunal a quo dictó el sobreseimiento definitivo y parcial de Mario Hernán Arias Díaz teniendo en consideración el certificado de defunción emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación que da cuenta del fallecimiento de este inculpaado. Dicho fallecimiento consta en el respectivo certificado que rola a foja 7531, tomo XXI.

f) A fojas 10.245 (Tomo XXIX) el tribunal a quo dictó el sobreseimiento definitivo y parcial de Anacleto Aguirre Rivera teniendo en consideración el certificado de defunción emitido por el Servicio de



Registro Civil e Identificación que da cuenta del fallecimiento de este inculpado. Dicho fallecimiento consta en el respectivo certificado que rola a fojas 10.243, tomo XXIX.

CENTÉSIMO DÉCIMO: Decisión respecto de las situaciones elevadas en consulta. Atendido el mérito de los antecedentes detallados en el precedente considerando y lo dispuesto en los artículos 93, número 1, del Código Penal y artículos 408, número 5, y 410 del Código de Procedimiento Penal, se procederá a aprobar la resolución consultada, escrita a fojas fs. 8.259 (Tomo XXIV) de estos autos.

V. EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN DEDUCIDO CONTRA LO DECIDIDO RESPECTO DE LA ACCIÓN CIVIL.

CENTÉSIMO UNDÉCIMO: Orden de las consideraciones relativas a la acción civil. Para efectos de analizar las pretensiones de las partes en lo relativo a las acciones civiles deducidas en esta causa, en los siguientes considerandos se revisarán, sucesivamente (1) las alegaciones del Fisco, (2) pretensiones de los demandantes civiles, (3) análisis de las excepciones opuestas por el Fisco y (4) distinción entre las clases de víctimas por repercusión.

CENTÉSIMO DUODÉCIMO: Alegación del Fisco de Chile. El Fisco de Chile solicita se revoque la sentencia o en subsidio se rebajen sustancialmente los montos de las indemnizaciones. Además, alega la improcedencia de reajustes e intereses con anterioridad a la fecha en la que la sentencia definitiva quede firme o ejecutoriada. Por último, pide no ser condenado en costas.

Al efecto, y, por una parte, opone excepción de reparación total y excepción de prescripción. En cuanto a la reparación total, recuerda la dictación de diversas leyes de reparación pecuniaria. Destaca también las reparaciones simbólicas por parte del Estado, como la



construcción del memorial de las víctimas de la dictadura, día del detenido desaparecido y el Museo de la Memoria. En cuanto a la prescripción, opone la excepción de prescripción extintiva de las acciones, atendiendo al tiempo transcurrido desde el acaecimiento de los hechos delictivos.

En cuanto a los demandantes, explica que son 20, en calidades de víctimas por repercusión: 11 como hermanos, dos como cónyuges (una de ellas además es hermana de otra de las víctimas), seis hijos y una nieta.

En cuanto a los montos, se otorga una indemnización por un total de \$2.780 millones. Detalla que a cada hermano la sentencia recurrida le concede \$130 millones. A una cónyuge se otorgan \$150 millones y a la otra \$200 millones debido a su doble calidad de cónyuge y hermana. Por último, a cada uno de los hijos les confiere \$150 millones y a la nieta \$100 millones.

Para fundar su pretensión de rebaja cita tres sentencias. Primero, una sentencia de la Corte Suprema del año 2024, que fija criterios a los tribunales para efectos de regular el *quántum* indemnizatorios en causas de derechos humanos, otorgando \$30 millones para la hermana de un ejecutado político. Segundo, otra sentencia de la Corte Suprema del año 2024, en la que a la madre de un detenido desaparecido otorgó \$100 millones. Tercero, una sentencia de esta Corte de Temuco, también del año 2024, que otorgó 40 millones para los hermanos, 70 millones para los hijos y 100 millones a las cónyuges.

Enfatiza que la Excelentísima Corte Suprema ha rechazado el pago de indemnizaciones a favor de supuestas víctimas por repercusión que no han conocido a su pariente que es víctima directa.

Por último, destaca los dos elementos que la jurisprudencia de la Corte Suprema pide tener presente para determinar los montos indemnizatorios. Esos dos aspectos son los baremos judiciales y el vínculo de parentesco de la víctima por repercusión con la víctima directa. En ese contexto, indica que las dos cónyuges y los hijos han



sido beneficiados por las leyes de reparación. En particular, cada uno de los hijos ha recibido \$10 millones. Las dos cónyuges, por su parte, han recibido pensiones superiores a \$500 mil, lo que a diciembre de 2019 alcanzaba una suma superior a \$105 millones para cada una de ellas.

Concluye afirmando que, para graduar el monto, se debe considerar la extensión del daño y no la gravedad del hecho, porque la indemnización no es punitiva, sino reparatoria. También por dicha razón solicita una rebaja sustancial en el monto de las indemnizaciones otorgadas.

CENTÉSIMO DÉCIMO TERCERO: Síntesis de las pretensiones de los demandantes civiles. Los querellantes dedujeron, además, acciones civiles tendientes a exigir la reparación del daño moral provocado por los delitos investigados en esta causa, a favor de las víctimas por repercusión.

Según se ha expresado más arriba, todos ellos piden confirmación de la sentencia recurrida, en lo relativo a los montos otorgados por concepto de indemnización de perjuicios.

CENTÉSIMO DÉCIMO CUARTO: Análisis de las excepciones opuestas por el Fisco. Según se indicó en el considerando precedente, el Fisco de Chile ha opuesto las excepciones de reparación total y de prescripción extintiva frente a las indemnizaciones pretendidas.

Respecto de la excepción de reparación total, se hace presente que la reparación debe ser proporcional al daño padecido. En el caso del daño moral aquella valuación es evidentemente compleja. De ahí que deba ser satisfecha, en el particular caso de las violaciones a derechos humanos, no solo de manera patrimonial sino también simbólica. En ese sentido, la Corte reconoce que el Estado de Chile, mediante sucesivos gobiernos democráticos, ha implementado diversas y valiosas medidas de reparación simbólica para las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que gobernó



el país entre 1973 y 1990. Reconoce también que el Estado de Chile ha intentado reparar patrimonialmente aquel daño, tanto respecto de las víctimas directas de tales violaciones, como respecto de las víctimas por repercusión. Sin perjuicio de todo ello, admite que la extensión de los graves daños padecidos autoriza a demandar una indemnización que los compense adecuadamente.

Respecto de la excepción de prescripción, la jurisprudencia mayoritaria de los tribunales chilenos se ha inclinado por su rechazo, incluyendo, por cierto, a la Excelentísima Corte Suprema. Por lo demás, esta misma Corte, desde hace años, ha consolidado su jurisprudencia en el mismo sentido. Por todas puede citarse la sentencia recaída en la causa rol 674-2011. En dicha oportunidad esta Corte sostuvo una argumentación que, aunque algo extensa, merece la pena reproducir a continuación:

“CUARTO. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Derecho internacional de los derechos humanos, no existe duda alguna respecto de la imprescriptibilidad de las acciones penales derivadas de los delitos de lesa humanidad, como de hecho es expresamente reconocido por el propio demandado, Fisco de Chile, en el escrito de apelación deducido en contra de la sentencia definitiva dictada en la presente causa.

Respecto de las acciones civiles derivadas de esa misma clase de hechos no existe, sin embargo, disposición expresa en los tratados internacionales suscritos por Chile y vigentes. El problema, por tanto, consiste en determinar si frente a ese silencio resulta posible afirmar la prescriptibilidad o la imprescriptibilidad de estas acciones.

QUINTO. Que, careciéndose de disposición expresa que resuelva el problema, la prescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de los delitos contra la humanidad debe ser resuelta desde las fuentes y criterios del Derecho internacional de los derechos humanos, y no desde los principios del Derecho civil chileno.



Esta perspectiva conduce a desechar, desde luego, el supuesto del que parte la recurrente Fisco de Chile, relativo a que la prescripción opera en todos aquellos casos en los que no existe disposición expresa que la excluya.

En efecto, no existe indicio alguno en el Derecho internacional de los derechos humanos que permita aplicar dicho supuesto, ciertamente válido para el Derecho civil chileno, a las acciones de reparación del daño causado por delitos contra la humanidad.

SEXTO. Que el artículo 29 del Estatuto de la Corte Penal Internacional dispone lo siguiente: “los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán”. Como se puede advertir, lo que no prescribe es el hecho ilícito, de modo que debe entenderse que ninguna de las acciones derivadas del mismo puede ser afectada por la prescripción, sea que se trate de acciones penales o de acciones civiles.

En este mismo sentido, Gonzalo Aguilar destaca que “el Estatuto no distingue entre acción penal y acción civil, solamente reconoce la imprescriptibilidad del crimen internacional”, lo que le conduce a concluir que la acción civil es imprescriptible (Aguilar Cavallo, Gonzalo, Crímenes Internacionales y la imprescriptibilidad de la acción penal y civil. Referencia al caso chileno /en/ Revista Ius et Praxis, 2008, vol. 14, Núm. 2, p. 178).

SÉPTIMO. Que en el mismo sentido puede ser interpretada la Convención Americana de Derechos Humanos, usualmente denominada Pacto de San José de Costa Rica, cuyo artículo 63 dispone: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

Explicando el significado de dicha disposición, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido lo siguiente:



“Como lo ha señalado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención Americana recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Huilca Tecse, sentencia de 3 de marzo de 2005, párrafo 87; en el mismo sentido, Caso Tibi, sentencia de 7 de septiembre de 2004. párrafo 223; Caso Instituto de Reeducción del Menor, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, párrafo 258; y Caso Ricardo Canese, sentencia de 31 de agosto de 2004. párrafo 193).

Como se puede advertir, la Corte no establece excepción alguna, menos aún relativa a la prescripción, cuando explica que los deberes de reparar y de hacer cesar las consecuencias de la violación expresan una norma consuetudinaria fundamental del Derecho internacional. Lejos de ello, precisa en la misma sentencia: “La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere de la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior y en la reparación de las consecuencias que la infracción produjo, así como el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados”.

OCTAVO. Que, en la doctrina, la profesora de la Universidad Diego Portales, Mayra Feddersen, reconoce la ausencia de una norma específica que regule la imprescriptibilidad de las acciones civiles en el Derecho internacional. Sin embargo, precisa, afirmar la prescripción de las mismas mediante “la aplicación de las normas de derecho civil ante las graves violaciones a los derechos humanos violenta no sólo normas de ius cogens, sancionadas por toda la comunidad internacional, sino que también vulnera la conciencia universal del ser humano, al desconocer el principio fundamental de su existencia” (Mayra



Feddersen M., La prescripción de las acciones reparatorias en la jurisprudencia de la Corte Suprema, p. 6, disponible en http://www.icsoc.cl/images/Papers/prescripcion_ensayo.pdf.

NOVENO. Que, en igual sentido, el profesor de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Aguilar, sostiene que a “partir de un mismo hecho, emanan los mismos principios, son los mismos principios los que operan y rigen la misma situación”. De este modo, precisa, como tanto la acción penal como la acción civil emanan de un mismo hecho, el crimen internacional, los principios aplicables son los mismos”. Por lo mismo, concluye, si la acción penal es imprescriptible, la acción civil debe recibir el mismo tratamiento por parte de los jueces (Gonzalo Aguilar, obra citada, p. 182).

DÉCIMO. Que la interpretación del Derecho internacional de los derechos humanos conduce, como se puede advertir, a declarar la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de los delitos contra la humanidad.”.

De este modo, y de acuerdo con lo razonado, no resulta posible acoger las excepciones de reparación total ni de prescripción de la acción civil opuestas por el Fisco de Chile.

CENTÉSIMO DÉCIMO QUINTO: Distinción respecto de las clases de delitos y de víctimas. En subsidio de las excepciones señaladas, el Fisco de Chile ha solicitado una rebaja sustancial de las indemnizaciones otorgadas.

Para pronunciarse sobre dicha solicitud será necesario distinguir las diversas calidades que presentan las víctimas por repercusión: hermanos, cónyuges, hijos y nieta.

CENTÉSIMO DÉCIMO SEXTO: Análisis respecto de los hermanos de las víctimas. En relación con la reparación del daño extrapatrimonial padecido por los hermanos de las víctimas a que se refiere la presente causa, esta Corte desea formular dos líneas de observación.



Esta Ilustrísima Corte entiende que la evaluación del daño moral es siempre compleja. Esto se debe a que los daños extrapatrimoniales precisamente carecen de una evaluación objetiva que permita cuantificar el daño provocado a la víctima, sea directa o por repercusión. El dicho contexto, se estima que el mejor parámetro para fijar el monto de esta reparación se encuentra en los montos otorgados en otras oportunidades. En particular, a hermanos de víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En dicho contexto, para fundar el monto que más abajo se propondrá, se entregan tres líneas de argumentación:

Primero, un conjunto de sentencias pronunciadas por la Excelentísima Corte Suprema durante el año 2022. En ese sentido, la Corte Suprema en la causa rol 44.389-2020, mediante sentencia de 9 de noviembre de 2020, otorgó una indemnización de \$50 millones al hermano de un detenido desaparecido durante la dictadura militar. Por otra parte, en la causa rol 130.949-2020, mediante sentencia de 6 de junio de 2022, otorgó una indemnización de \$40 millones al hermano de la víctima, detenida desaparecida por agentes del Estado. En la causa rol 144.310-2020, mediante sentencia de 7 de junio de 2022, impuso una indemnización de \$20 millones para cada uno de los cuatro hermanos de una detenida desaparecida. Por su parte, en la sentencia de la causa rol 33.452-2019, de fecha 14 de junio de 2022, se otorgó una indemnización de \$50 millones a la hermana de una víctima secuestrada y asesinada por carabineros. En fin, en la sentencia recaída en la causa rol 361-2020, mediante sentencia de 14 de diciembre de 2022, se fijó una indemnización de \$50 millones a favor de cada una de las cuatro personas que tenían la doble calidad de hermanos e hijos de dos víctimas de homicidio por parte de agentes del Estado.

Segundo, el “Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2024”, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. La tabla 7, ubicada en las páginas 480 y



481 del citado Informe, se refiere a las indemnizaciones otorgadas por la Corte Suprema en la totalidad de las sentencias pronunciadas entre julio de 2023 y junio de 2024. Singularmente, respecto de las víctimas por repercusión de víctimas de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales. En dicha tabla se expresa que, respecto de los hermanos, los montos otorgados por la Corte Suprema oscilan entre los \$10 millones y los \$150 millones. El monto más usual, por su parte, es \$50 millones.

Y tercero, el precedente sentado por esta misma Ilustrísima Corte en la sentencia recaída en la causa rol 1125-2023, de 23 de julio de 2024. En aquella decisión, esta Ilustrísima Corte fijó una indemnización de \$40 millones para cada uno de los hermanos. Todos ellos, de simple o de doble conjunción, eran víctimas por repercusión de la ejecución extrajudicial de las víctimas directas.

Como se puede apreciar, los montos presentan un amplio rango. En dicho escenario, esta Ilustrísima Corte adoptará una posición intermedia, respetuosa de su propio precedente. En ese entendido, la indemnización del daño padecido por los hermanos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos será fijada prudencialmente en \$40 millones para cada uno de ellos.

Se exceptúa de esta decisión la hermana que, además, demandó como cónyuge de otra de las víctimas. Su pretensión será analizada en el siguiente considerando.

CENTÉSIMO DÉCIMO SÉPTIMO: Análisis respecto de la cónyuge e hijos de las víctimas. En relación con la reparación del daño extrapatrimonial de la cónyuge e hijos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos a que se refiere esta causa, la Corte desea hacer presente dos órdenes de consideraciones.

En primer lugar, que el dolor, la angustia, la impotencia, la soledad y la lesión al proyecto de vida padecido por la cónyuge e hijos de quien ha sido víctima de un delito de lesa humanidad difícilmente podrá ser reparado convenientemente. De ahí que las medidas de



reparación simbólica que las diversas autoridades del Estado y la sociedad en su conjunto han adoptado desde el retorno a la democracia, en 1990, resulten especialmente valiosas y relevantes. Son igualmente valiosas y relevantes las formas de reparación pecuniaria que desde hace más de 30 años han adoptado los Gobiernos democráticos, mediante pensiones, indemnizaciones u otras formas de compensación. Sin perjuicio de todo ello, aquella reparación pecuniaria debe ser complementada para compensar en toda su extensión el daño extrapatrimonial padecido.

En segundo lugar, la Corte reitera lo complejo de evaluar este daño. Por ello, y al igual que respecto de los hermanos, se tendrá a los precedentes jurisprudenciales como principal parámetro para objetivar la decisión. En ese entendido, se tendrán a la vista tres líneas de argumentación.

Primero, un conjunto de sentencias pronunciadas por la Corte Suprema durante el año 2022. La Corte Suprema, en la causa rol 16.939-2019, mediante sentencia de fecha 9 de mayo de 2022, confirmó la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que otorgó una indemnización del daño moral de \$50 millones para cada uno de los tres hijos de la víctima de delito de lesa humanidad. Por otra parte, en la causa rol 130.949-2020, mediante sentencia de 6 de junio de 2022, otorgó una indemnización de \$60 millones a cada uno de los dos hijos de la víctima, detenida desaparecida por agentes del Estado. En la causa rol 129.220-2020, mediante sentencia de 10 de junio de 2022, se otorgó una indemnización de \$40 millones a cada una de las cuatro hijas y a la cónyuge de una víctima que había sido ejecutada por agentes del estado. Por su parte, en la sentencia de la causa rol 33.452-2019, de fecha 14 de junio de 2022, se otorgó una indemnización de \$100 millones a la cónyuge de una víctima secuestrada y asesinada por carabineros. En fin, la sentencia de 14 de junio de 2022 recaída en la causa rol 149.250-2020, reparó con \$80 millones a cada uno de los seis



hijos y con \$100 millones a la cónyuge de una nueva víctima de homicidio cometido por agentes del Estado.

Segundo, el ya citado “Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2024”, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. La tabla 7, referida en el considerando anterior, se refiere tanto a cónyuges y convivientes, como a hijos. En el caso de cónyuges y convivientes, los montos otorgados por la Corte Suprema oscilan entre los \$15 millones y los \$200 millones. El monto más usual, por su parte, es \$100 millones. En el caso de hijos, los montos otorgados por la Corte Suprema oscilan entre los \$10 millones y los \$150 millones. El monto más usual, por su parte, es \$60 millones.

Y tercero, el precedente sentado por esta misma Ilustrísima Corte en la sentencia recaída en la causa rol 1125-2023, de 23 de julio de 2024. En aquella decisión, esta Ilustrísima Corte fijó una indemnización de \$100 millones para cada cónyuge y \$70 millones para cada uno de los hijos. Todos ellos serán víctimas por repercusión de la ejecución extrajudicial de las víctimas directas.

En este caso los montos también presentan un amplio rango. En dicho escenario, esta Ilustrísima Corte adoptará una posición intermedia y respetuosa de su propio precedente. En ese entendido, la indemnización del daño padecido por las cónyuges y los hijos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos será fijada prudencialmente en \$100 millones para la cónyuge que solo demandó como tal y de \$70 millones para cada hijo.

Respecto de la cónyuge que demandó, además, en su calidad de hermana de otra de las víctimas directas, se le otorgará prudencialmente una indemnización única y total de \$120 millones.

CENTÉSIMO DÉCIMO OCTAVO: Análisis respecto de la nieta de la víctima. En relación con la reparación del daño extrapatrimonial de Pamela del Carmen Coche Aillañir, nieta de la víctima Carlos Aillañir Huenchual, la Corte desea hacer presente dos órdenes de consideraciones.



En primer lugar, reconoce las complejidades que acarrea avaluar el perjuicio padecido por aquellos parientes que no presentan un vínculo tan estrecho con la víctima directa. Este es, por ejemplo, y como ocurre en el presente caso, la situación de la nieta de una de las personas ejecutadas ilícitamente.

En segundo lugar, y sin perjuicio de lo recién expresado, se debe reconocer que toda persona que ha sufrido un daño debe ser reparada. Todo ello de conformidad con el principio general del derecho conforme al cual todo daño debe ser reparado y dicha reparación debe ser íntegra. En el presente caso, agentes del Estado incurrieron en homicidios calificados en su carácter de *lesa humanidad*. Entre los ejecutados se encuentra la víctima, a quien su nieta no pudo conocer, con quien no pudo compartir ni pudo vivir la noción de familia ampliada.

Por lo expuesto, la indemnización del daño padecido por Pamela del Carmen Coche Aillañir, nieta de la víctima Carlos Aillañir Huenchual, será fijada prudencialmente en \$40 millones.

CENTÉSIMO DÉCIMO NOVENO: Pago de reajustes e intereses. E Fisco de Chile ha solicitado que, en caso de condenársele al pago de indemnizaciones de perjuicios, los reajustes e intereses se apliquen una vez que la sentencia se encuentre ejecutoriada.

Esta Ilustrísima Corte acogerá esta petición, por cuanto los reajustes e intereses solo se devengan desde que el deudor se encuentra en mora. Y aquello únicamente acaece una vez que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada y el demandado se encuentre en mora de pagar lo debido.

FALLO.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en las normas legales, jurisprudencia nacional, jurisprudencia internacional y doctrina citadas, SE RESUELVE:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LETUXZMWJWX

I. Que, en relación con las diligencias y solicitudes pendientes de resolución, se decide:

1) Que se tiene presente el informe pericial de fojas 11.042 y siguientes, del tomo XXX, en el que consta pericia psiquiátrica realizada a Libardo Hernán Schwartenski Rubio, evacuado por la médico psiquiatra del Servicio Médico Legal, Dra. Tamara Peldoza Neira.

2) Que se tiene presente el documento denominado “Sistemas de Hojas de Vida y Calificaciones para el Personal” del mes de enero de 1973, emitido por el Estado Mayor General del Ejército de Chile, y que se acompaña en el tercer otrosí de la presentación de fojas 11.101 y siguientes, del tomo XXX, por la defensa de Carlos Oviedo Arriagada.

3) Que se tienen por interpuestas las peticiones subsidiarias incluidas en el primer otrosí del escrito de apelación deducido a fojas 11.159 y siguientes, del tomo XXX, por la defensa de Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo en contra de la sentencia de primera instancia.

4) Que se tiene presente el Certificado de Beneficio de Asistencia Jurídica otorgado por la Corporación de Asistencia Judicial de Bío-Bío, acompañado por la defensa de Juan Bautista Labraña Luvecce, en el otrosí del escrito de foja 11.198 y siguientes, del tomo XXX.

5) Que se tiene presente el informe realizado al tenor de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 18.216, de fojas 11.216 y siguientes, del tomo XXX, realizado respecto del condenado Hernán Quiroz Barra, evacuado por la Jefa del Centro de Reinserción Social de Villarrica.

6) Que se tienen presentes los antecedentes que ya constan en la causa y que fueron acompañados en el tercer otrosí del escrito presentado por la defensa de Pablo Domingo Gran López, de fojas 11.541 y siguientes, del tomo XXXI, consistentes en copia de la prensa



escrita, diarios locales y circulación nacional y copia del sistema de hojas de vida para el personal.

7) Que se tienen presentes las observaciones a la sentencia de primera instancia formuladas por la defensa de Raimundo Ignacio García Covarrubias a foja 11.659 del tomo XXXI.

8) Que se tiene presente el informe pericial de fojas 11.769 y siguientes, del tomo XXXI, en el que consta pericia psiquiátrica realizada a Hernán Raúl Silva Quiroz, evacuado por la médico psiquiatra del Servicio Médico Legal, Dra. Tamara Peldoza Neira, rectificado a foja 11.774 mediante Ord. 1072-2023-SM, por el que corrige el nombre de la persona evaluada por la de Hernán Raúl Quiroz Barra.

II. Que se rechazan los recursos de casación en la forma deducidos por escrito por las defensas de los siguientes condenados: Jaime Guillermo García Covarrubias, Pablo Domingo Gran López, Carlos Eduardo Oviedo Arriagada y Raimundo Ignacio García Covarrubias.

III. Que, en lo relativo a la acción penal, SE CONFIRMA la sentencia apelada, con las siguientes declaraciones:

1) Se condena, con costas, a OSCAR ALFONSO ERNESTO PODLECH MICHAUD, cédula de identidad N° 3.085.228-1, ya individualizado:

a) En calidad de autor de homicidios calificados en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena de presidio perpetuo más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares por el tiempo de la



vida del penado y de la sujeción de la vigilancia a la autoridad por el máximo que establece el Código Penal.

b) En calidad de autor de apremios ilegítimos respecto de las mismas víctimas recién mencionadas, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena única de cuatro años de presidio menor en su grado máximo más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en los artículos 27, 29, 150 N°1 y 391 N°1, circunstancias 1° y 5° del Código Penal vigente a la época de los hechos.

2) Se condena, con costas, a MANUEL ABRAHAM VÁSQUEZ CHAHUÁN, cédula de identidad N° 5.090.301-K, ya individualizado:

En calidad de autor de homicidios calificados en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena de presidio perpetuo más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares por el tiempo de la vida del penado y de la sujeción de la vigilancia a la autoridad por el máximo que establece el Código Penal.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en los artículos 27 y 391 N°1, circunstancias 1° y 5° del Código Penal vigente a la época de los hechos.

3) Se condena, con costas, a OMAR BURGOS DEJEA, cédula de identidad N° 8.465.231-8, ya individualizado:



En calidad de autor de apremios ilegítimos en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena única de cuatro años de presidio menor en su grado máximo más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en los artículos 27, 29, 150 N°1 y 391 N°1, circunstancias 1° y 5° del Código Penal vigente a la época de los hechos.

4) Se condena, con costas, a ORLANDO MORENO VÁSQUEZ, cédula de identidad N° 4.647.511-9, ya individualizado:

a) En calidad de cómplice de homicidios simples en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena de 12 años y seis meses de presidio mayor en su grado medio más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

b) En calidad de cómplice de apremios ilegítimos respecto de las mismas víctimas recién mencionadas, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena única de cuatro años de presidio menor en su grado máximo más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación



absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en los artículos 28, 29, 150 N°1 y 391 N°2 del Código Penal vigente a la época de los hechos.

5) Se condena, con costas, a RAÚL BINALDO SCHONHERR FRÍAS, cédula de identidad N° 5.147.143-1, ya individualizado:

a) En calidad de cómplice de homicidios simples en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena de 12 años y seis meses de presidio mayor en su grado medio más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

b) En calidad de cómplice de apremios ilegítimos respecto de las mismas víctimas recién mencionadas, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena única de cuatro años de presidio menor en su grado máximo más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en los artículos 28, 29, 150 N°1 y 391 N°2 del Código Penal vigente a la época de los hechos.

6) Se condena, con costas, a HERNÁN RAÚL QUIROZ BARRA, cédula de identidad N° 4.808.199-1, ya individualizado:

En calidad de autor de apremios ilegítimos en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor



Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena única de cuatro años de presidio menor en su grado máximo más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en los artículos 29 y 150 N°1 del Código Penal vigente a la época de los hechos.

7) Se condena, con costas, a DANIEL SAN JUAN CLAVERÍA, cédula de identidad N° 5.534.207-5, ya individualizado:

En calidad de autor de apremios ilegítimos en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena única de cuatro años de presidio menor en su grado máximo más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en los artículos 29 y 150 N°1 del Código Penal vigente a la época de los hechos.

8) Se condena, con costas, a LIBARDO HERNÁN SCHWARTENSKI RUBIO, cédula de identidad N° 7.305.965-8, ya individualizado:

En calidad de autor de apremios ilegítimos en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador



Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a siete penas de 60 días de prisión en su grado máximo.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en el artículo 150 N°1 del Código Penal vigente a la época de los hechos.

9) Se condena, con costas, a JOSÉ RAÚL INZUNZA REYES, cédula de identidad N° 7.283.223-K, ya individualizado:

En calidad de autor de apremios ilegítimos en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a siete penas de 40 días de prisión en su grado medio.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en el artículo 150 N°1 del Código Penal vigente a la época de los hechos.

10) Se condena, con costas, a JAIME GUILLERMO GARCÍA COVARRUBIAS, cédula de identidad N°5.413.831-8, ya individualizado:

a) En calidad de cómplice de homicidios simples en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena de doce años y seis meses de presidio mayor en su grado medio más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

b) En calidad de cómplice de apremios ilegítimos respecto de las mismas víctimas recién mencionadas, perpetrados en la comuna de



Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a siete penas de 50 días de prisión en su grado máximo.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en los artículos 28, 150 N°1 y 391 N°2 del Código Penal vigente a la época de los hechos.

11) Se condena, con costas, a PABLO DOMINGO GRAN LÓPEZ, cédula de identidad N°5.137.570-K, ya individualizado:

a) En calidad de cómplice de homicidios simples en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena de 12 años y seis meses de presidio mayor en su grado medio más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

b) En calidad de cómplice de apremios ilegítimos respecto de las mismas víctimas recién mencionadas, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a siete penas de 50 días de prisión en su grado máximo.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en los artículos 28, 150 N°1 y 391 N°2 del Código Penal vigente a la época de los hechos.

12) Se condena, con costas, a ROMILIO OSVALDO LAVÍN MUÑOZ, cédula de identidad N° 6.352.155-8, ya individualizado:

a) En calidad de cómplice de homicidios simples en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena de 12



años y seis meses de presidio mayor en su grado medio más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

b) En calidad de cómplice de apremios ilegítimos respecto de las mismas víctimas recién mencionadas, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a siete penas de 50 días de prisión en su grado máximo.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en los artículos 28, 150 N°1 y 391 N°2 del Código Penal vigente a la época de los hechos.

13) Se condena, con costas, a CARLOS EDUARDO OVIEDO ARRIAGADA, cédula de identidad N° 6.457.235-0, ya individualizado:

a) En calidad de cómplice de homicidios simples en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena de 12 años y seis meses de presidio mayor en su grado medio más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

b) En calidad de cómplice de apremios ilegítimos respecto de las mismas víctimas recién mencionadas, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a siete penas de 50 días de prisión en su grado máximo.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en los artículos 28, 150 N°1 y 391 N°2 del Código Penal vigente a la época de los hechos.



14) Se condena, con costas, a RAIMUNDO IGNACIO GARCÍA COVARRUBIAS, cédula de identidad N° 5.482.807-1, ya individualizado:

a) En calidad de cómplice de homicidios simples en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena de 12 años y seis meses de presidio mayor en su grado medio más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

b) En calidad de cómplice de apremios ilegítimos respecto de las mismas víctimas recién mencionadas, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a siete penas de 50 días de prisión en su grado máximo.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en los artículos 28, 150 N°1 y 391 N°2 del Código Penal vigente a la época de los hechos.

15) Se condena, con costas, a NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI, cédula de identidad N° 5.688.959-0, ya individualizado:

a) En calidad de cómplice de homicidios simples en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena de 12 años y seis meses de presidio mayor en su grado medio más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para cargos



y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

b) En calidad de cómplice de apremios ilegítimos respecto de las mismas víctimas recién mencionadas, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a siete penas de 50 días de prisión en su grado máximo.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en los artículos 28, 150 N°1 y 391 N°2 del Código Penal vigente a la época de los hechos.

16) Se condena, con costas, a PEDRO GUILLERMO MANUEL TICHAHUER SALCEDO, cédula de identidad N° 5.166.731-K, ya individualizado:

a) En calidad de cómplice de homicidios simples en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena de 12 años y seis meses de presidio mayor en su grado medio más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

b) En calidad de cómplice de apremios ilegítimos respecto de las mismas víctimas recién mencionadas, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a siete penas de 50 días de prisión en su grado máximo.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en los artículos 28, 150 N°1 y 391 N°2 del Código Penal vigente a la época de los hechos.

17) Se condena, SIN costas, a JUAN BAUTISTA LABRAÑA LUVECCE, cédula de identidad N° 5.791.623-0, ya individualizado:



a) En calidad de cómplice de homicidios simples en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena de 12 años y seis meses de presidio mayor en su grado medio más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

b) En calidad de cómplice de apremios ilegítimos respecto de las mismas víctimas recién mencionadas, perpetrados en la comuna de Temuco, en el mes de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a siete penas de 50 días de prisión en su grado máximo.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en los artículos 28, 150 N°1 y 391 N°2 del Código Penal vigente a la época de los hechos.

18) Se condena, SIN costas, a ARNOLDO AEDO MATUS, cédula de identidad N° 4.371.753-7, ya individualizado:

En calidad de cómplice de homicidios simples en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en los artículos 29 y 391 N°2, del Código Penal vigente a la época de los hechos.



19) Se condena, con costas, a GABRIEL ALFONSO DITTUS MARÍN, cédula de identidad N° 7.423.441-0, ya individualizado:

En calidad de encubridor de homicidios simples en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en los artículos 28 y 391 N°2 del Código Penal vigente a la época de los hechos.

20) Se condena, con costas, a MANUEL RAFAEL CAMPOS CEBALLOS, cédula de identidad N° 7.594.068-8, ya individualizado:

En calidad de encubridor de homicidios simples en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en los artículos 28 y 391 N°2 del Código Penal vigente a la época de los hechos.



21) Se condena, con costas, a HÉCTOR MAURICIO VILLABLANCA HUENULAO, cédula de identidad N° 7.115.097-6, ya individualizado:

En calidad de encubridor de homicidios simples en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en los artículos 28 y 391 N°2 del Código Penal vigente a la época de los hechos.

22) Se condena, con costas, a JUAN CARLOS CONCHA BELMAR, cédula de identidad N° 7.598.549-5, ya individualizado:

En calidad de encubridor de homicidios simples en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo más las accesorias legales, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en los artículos 28 y 391 N°2 del Código Penal vigente a la época de los hechos.



23) Se condena, con costas, a SERGIO ORLANDO VALLEJOS GARCÉS, cédula de identidad N° 6.544.827-0, ya individualizado:

En calidad de encubridor de homicidios simples en las personas de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, perpetrados en la comuna de Temuco, el 10 de noviembre de 1973, en su carácter de *lesa humanidad*, a siete penas de 60 días de prisión en su grado máximo cada una de ellas.

Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal vigente a la época de los hechos.

IV. Que, en lo relativo a la acción penal, SE REVOCA la sentencia apelada en cuanto rechazó otorgar penas sustitutivas a OMAR BURGOS DEJEA, a ARNOLDO AEDO MATUS, a HÉCTOR MAURICIO VILLABLANCA HUENULAO, a JUAN CARLOS CONCHA BELMAR, a LIBARDO HERNÁN SCHWARTENSKI RUBIO, a JOSÉ RAÚL INZUNZA REYES y a SERGIO ORLANDO VALLEJOS GARCÉS. En su lugar, SE DECLARA que:

a) A OMAR BURGOS DEJEA, a ARNOLDO AEDO MATUS, a HÉCTOR MAURICIO VILLABLANCA HUENULAO y a JUAN CARLOS CONCHA BELMAR se les concede la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, reglada en el artículo 15 bis de la Ley N° 18.216, a la que quedarán sometidos por el tiempo que duren sus condenas.

b) A LIBARDO HERNÁN SCHWARTENSKI RUBIO y a JOSÉ RAÚL INZUNZA REYES se les concede la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena, reglada en el artículo 4° de la Ley N° 18.216, a la que quedarán sometidos por el plazo de un año.

c) A SERGIO ORLANDO VALLEJOS GARCÉS se le concede la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena, reglada en el



artículo 4° de la Ley N° 18.216, a la que quedará sometido por el plazo de 420 días.

V. Que, en lo relativo a la acción civil, SE CONFIRMA la sentencia apelada CON DECLARACIÓN que se otorgan las siguientes indemnizaciones de perjuicios por daño extrapatrimonial por los montos y a favor de las víctimas por repercusión que a continuación se indican:

1) \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos) para cada una de las siguientes personas: Lavinia Valenzuela Velásquez, Gastón Patricio Valenzuela Velásquez, Daniel Omar Valenzuela Velásquez y Sergio Manuel Valenzuela Velásquez. Lo que equivale a la suma total de \$120.000.000 (ciento veinte millones de pesos), todos los anteriores hermanos de la víctima Víctor Hugo Valenzuela Velásquez.

2) \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos) para Ricardo Alberto Montero Mosquera, hermano de la víctima Amador Francisco Montero Mosquera

3) \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos) para cada una de las siguientes personas: Luis Rodrigo Chávez Rivas y Javier Aníbal Chávez Rivas, hermanos de la víctima Juan Antonio Chávez Rivas.

4) \$100.000.000 (cien millones de pesos) para Encarnación Alarcón Muñoz, viuda de la víctima Florentino Alberto Molina Ruiz

5) \$70.000.000 (setenta millones de pesos) para cada una de las siguientes personas: Lidia del Carmen Molina Alarcón, Luis Alberto Molina Alarcón, María Petronila Molina Alarcón y Yuri Alejandro Molina Alarcón, hijos de la víctima Florentino Alberto Molina Ruiz, lo que equivale a un total de \$280.000.000 (doscientos ochenta mil pesos).

6) \$120.000.000 (ciento veinte millones de pesos) para María Elena Ruiz Mancilla, en su calidad de viuda de la víctima Juan Chávez Rivas y de hermana de Juan Carlos Ruiz Mancilla

7) \$70.000.000 (setenta millones de pesos) para Alejandra Andrea Elina Chávez, hija de la víctima Juan Chávez Rivas.



8) \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos) para cada una de las siguientes personas: Clemente Cirilo Mardones Jofré, Cosme Damián Mardones Jofré, Casilda Inés Mardones Jofré y Catalina Erasma Mardones Jofré, hermanos de la víctima Pedro Juan Mardones Jofré, lo que equivale a la suma total de \$28.000.000 (veintiocho millones de pesos).

9) \$70.000.000 (setenta millones de pesos) para Ana Aillañir Antiman, hija de la víctima Carlos Aillañir Huenchual.

10) \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos) para Pamela del Carmen Coche Aillañir, nieta de la víctima Carlos Aillañir Huenchual.

VI. Que se aprueban los sobreseimientos definitivos y parciales de Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez, de Aquiles Alfonso Poblete Muller, de Juan Humberto Carrillo Rebolledo, de Benjamín Farías Lavín, de Mario Hernán Arias Díaz y de Anacleto Aguirre Rivera.

VII. Que se exime del pago de costas a los condenados Juan Bautista Labraña Luvecce y Arnoldo Aedo Matus.

VIII. Que se confirma en todo lo demás la sentencia recurrida de fecha 15 de septiembre de 2023, pronunciada por el Ministro en Visita Extraordinario para causas sobre derechos humanos Álvaro Mesa Latorre.

El Sr. abogado integrante Luis Iván Díaz García concurre a la decisión, con la única excepción del otorgamiento de una indemnización a favor de Pamela del Carmen Coche Aillañir, nieta de la víctima Carlos Aillañir Huenchual. Para fundar este voto de minoría, por el que rechaza el otorgamiento de indemnización a favor de la citada demandante, tiene presente lo siguiente:

PRIMERO: La Corte Suprema reiteradamente ha rechazado reparar a quien tiene la calidad de nieto de una víctima directa de violación a los derechos humanos. Así se ha manifestado en al menos tres casos recientes. En efecto, aquel rechazo se ha confirmado en las sentencias recaídas en las causas rol 71.900-2020, mediante sentencia de 28 de julio de 2023; rol 82.318-2021, mediante sentencia de 29 de agosto



de 2023; y rol 5.005-2020, mediante sentencia de 15 de diciembre de 2023.

SEGUNDO: Lo expresado no significa rechazar la posibilidad de indemnizar el daño padecido por un nieto, como consecuencia del asesinato de su abuelo. No obstante, aquello exigiría acreditar, en forma previa e indubitada, el estrecho vínculo que unía a la víctima con este nieto. Estrecho vínculo que, por cierto, permitiría inferir que ese descendiente efectivamente es una víctima por repercusión, porque ha padecido un daño extrapatrimonial que deriva precisamente del quiebre de aquel vínculo. En opinión de este disidente, aquella exigencia no ha sido acreditada en la presente causa, por lo que la pretensión indemnizatoria debe rechazarse.

Sentencia redactada por el abogado integrante Luis Iván Díaz García.

Regístrese.

NºPenal-1665-2023. (csd)



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LETUXZMWJWX

Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco integrada por los Ministros (as) Jose H. Marinello F., Alberto Amiot R. Se deja constancia que no firma el abogado integrante Sr. Luis Iván Díaz García, no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por haber concluido su nombramiento.

En Temuco, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LETUXZMWJWX